

CUADERNILLO TEORICO GEOGRAFÍA

QUINTO AÑO

TURNO MAÑANA



PRIMER CUATRIMESTRE.

PROFESOR ESTEBAN ALEJANDRO DROGHI

GEOGRAFÍA 5.

Textos para resolver los Trabajos Prácticos.

La posición de la Argentina en el capitalismo global.

A partir del proceso de globalización, el sistema capitalista avanzó en todos los países del mundo. La Argentina se insertó en este sistema económico como proveedora de materias primas y, al mismo tiempo, como importadora de manufacturas y tecnología. En este proceso, el país sufrió varias crisis que se intensificaron debido a la necesidad de seguir las directivas de los organismos de financiamiento internacional, como el Fondo Monetario Internacional (FMI) o el Banco Mundial (BM). En los últimos años, la Argentina logró negociar y pagar parte de su deuda externa; así, pudo cambiar su política financiera y dar prioridad al mercado interno. De esta manera, la economía nacional siguió creciendo a pesar de la crisis mundial de 2008. Por todo ello, en el ámbito internacional, donde se tratan temas relacionados con el comercio, la Argentina es uno de los países emergentes referentes, por ejemplo, cuando solicita cambios en las decisiones de la Organización Mundial del Comercio (OMC). La Argentina continúa siendo un importante productor de materias primas y un gran exportador de productos elaborados de origen agropecuario. Los sectores más dinámicos de la economía avanzan progresivamente con el desarrollo de nuevos productos tecnológicos. Esto genera la posibilidad de una verdadera transformación de la economía nacional. Por ejemplo, más allá del Mercosur, la Argentina ha encontrado un gran socio comercial en la Unión Europea.

¿Por qué la Argentina no logra consolidar el desarrollo económico?

El desarrollo económico es un proceso de transformación económica y social basado en la acumulación de capital, conocimientos, tecnología, organización de recursos, educación y fuerza de trabajo. Durante la economía agroexportadora, la Argentina creció por la demanda externa de productos primarios, aunque no fue suficiente para el desarrollo de su industria. La actividad industrial es la que articula el territorio y genera valor agregado; sin embargo, el país no incorporó los conocimientos y tecnologías necesarios para el conjunto de la actividad económica. Esto se debió a la interrupción de sus gobiernos democráticos y la falta de inversión en ciencia y tecnología.

La conformación histórica del territorio.

Desde la disolución del Virreinato del Río de la Plata, hasta llegar a sus dimensiones territoriales actuales, la Argentina atravesó diversas etapas. Cada gobierno intentó imponer un modelo de país, que se vería plasmado en el territorio. La organización territorial que dominó la configuración espacial hasta la actualidad es conocida como radio céntrica. Fue impuesta por el desarrollo del sistema de transporte, que organizó el espacio en base a la dependencia del Interior respecto de Buenos Aires. El área pampeana -Buenos Aires, particularmente— ha sido el eje de concentración del poder político y económico. Durante la década de 1990 en la Argentina, se aplicaron políticas neoliberales que afectaron la inclusión de ciertos sectores del territorio nacional a la economía globalizada.

Como consecuencia, en la actualidad, son muchas las áreas del país que todavía se encuentran excluidas de la economía global, sin posibilidad de ofrecer sus recursos y capacidades. Solo las áreas que se encuentran en el llamado Corredor del Mercosur mantuvieron su inserción en el sistema global. Estas áreas ofrecen los servicios e insumos necesarios para las actividades económicas conectadas con el resto del mundo. Durante los últimos años del siglo xx, el Área

Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) concentró las actividades económicas primarias y secundarias. En la actualidad, el AMBA se erige como una ciudad global de segundo orden, sede de empresas multinacionales y lugar elegido para las inversiones extranjeras. Además, tiene injerencia en el resto de América latina, ya que marca tendencias en los ámbitos político, económico, tecnológico y cultural de toda la región. Por otro lado, históricamente, las ciudades de Córdoba y Rosario fueron protagonistas de la etapa de industrialización del país. En la actualidad, son ciudades que también realizaron transformaciones orientadas a atraer inversiones para el desarrollo de actividades terciarias y cuaternarias. Estas ciudades han crecido en infraestructura, inversiones y generación de empleo.

La actual división territorial y social del trabajo.

La globalización y los acuerdos económicos regionales modificaron las fronteras, así como la organización territorial dentro de cada país. En el caso argentino, las actividades tradicionales desarrolladas en cada región sufrieron grandes cambios. Cada área ofrecía productos, recursos y trabajadores al sistema productivo nacional, que contaba con importantes niveles de exportación. Actualmente, este sistema se encuentra en reestructuración, ya que las empresas nacionales y extranjeras tienen una importancia cada vez mayor en relación a la organización territorial. Por ejemplo, las inversiones en la industria vitivinícola reactivaron la economía de Cuyo. De esa manera, los gobiernos provinciales y municipales se encuentran expuestos a cambios profundos en la economía mundial. Por ello, intentan ofrecer mejores competencias para atraer inversiones que generen empleo, aunque muchas veces con un importante costo ambiental. Diversas actividades, como los parques industriales y los polos tecnológicos, se expandieron en el territorio gracias al apoyo estatal. Luego de 2001, la industria creció un 70% e impulsó la creación de espacios para la radicación de empresas de todos los rubros.

Actualmente, el país cuenta con 235 parques industriales y 6.500 empresas instaladas, de las cuales el 90% son Pymes. Por su parte, los polos tecnológicos, en constante crecimiento, se presentan como los sitios productivos más innovadores. El turismo es otro sector que incrementó su actividad, ya que, a los lugares turísticos más tradicionales del país, se sumaron nuevos centros con modernas infraestructuras, La deslocalización de servicios _Uno de los cambios más recientes en el mundo laboral es la deslocalización de servicios. Esta modalidad tiene su origen en las ventajas locales ofrecidas por determinados espacios. Una de estas ventajas son los bajos costos, tanto en instalación como en mano de obra calificada. La Argentina ofrece servicios de atención al usuario, soporte técnico y ventas telefónicamente. Varias ciudades del interior del país actúan como sedes de estas empresas que atienden a clientes del exterior.

Algunos de los polos tecnológicos s...: Polo Tecnológico Bahía Blanca +* Polo Tecnológico de Mendoza e. Polo: 11.nea Con base. en Chaco o El Clustersoa, Polo Jujuy e Polo Corrientes e Infotech Neuquén e. Parque Tecnológico de Córdoba e Parque Científico Tecnológico de Tandil > =Poloí Buenos Aires e Parque Tecnológico del Litoral-Centro ».: * Parque Tecnológico Misiones e Polo Tecnológico Rosario e: Cluster Tecnológico Córdoba > Polo Tecnológico Constituyentes e. Distrito Informático del Gran La Plata e. Incuba, Incubadora de Empresas de Diseño e Industrias culturales

El Estado y la política internacional.

La Argentina tiene relaciones políticas y diplomáticas con todos los países del mundo, incluso con Gran Bretaña, con la cual mantiene una disputa por cuestiones de soberanía sobre las Islas

Malvinas. Además, es miembro de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA), así como también del 620. Sin embargo, presenta lazos más estrechos con sus socios del Mercosur y con el resto de los países de América latina.

Las relaciones con los países más industrializados, como los Estados Unidos, fueron cambiantes: de una fuerte dependencia se pasó, en la actualidad, a otro tipo de relación diplomática. Por eso, las últimas acciones de política exterior del gobierno estadounidense, como la invasión a Irak, no fueron acompañadas ni aprobadas por la Argentina. Por lo general, estas relaciones dependen de la política exterior del gobierno de turno. Actualmente, la Argentina mantiene una relación política muy importante con China, la segunda economía del mundo.

La Argentina y su relación con los Países No Alineados.

El Movimiento de Países No Alineados está conformado por 118 países, de los cuales, 24 son latinoamericanos. Este grupo surgió en 1955, en el contexto del proceso de descolonización y la Guerra Fría, con una política diferente a la de los Estados Unidos; Entre sus objetivos, se destacan el respeto a la soberanía territorial, la no intervención en los asuntos internos de los países y el fortalecimiento de la ONU. La Argentina participó en este movimiento, excepto en el período 1991-2009.

Proyectos solidarios

La iniciativa Cascos Blancos, que depende de la ONU, tiene como objetivo brindar asistencia humanitaria a distintos grupos que se encuentran en situación de crisis. La ayuda comprende desde acciones prácticas, como la entrega de vacunas y alimentos, hasta la organización local para crear agentes multiplicadores de ayuda. La Argentina forma parte de esta iniciativa y aporta profesionales de la salud que trabajan en situaciones de crisis políticas, como la ocurrida en Libia durante 2011. Por su parte, los Cascos Azules están integrados por profesionales de las Fuerzas Armadas que actúan en situaciones de violencia social y política extrema. También colaboran con los Cascos Blancos en las tareas más difíciles. Además, desde el año 1985, la Argentina es parte del programa del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur). El objetivo de este programa es brindar asilo a las personas que son perseguidas por cuestiones políticas, religiosas, de género, nacionalidad o pertenencia a una minoría amenazada.

La participación argentina en organismos internacionales económicos y financieros.

Desde su creación en 1944, el Fondo Monetario Internacional (FMI), que pertenece a la ONU, otorga créditos a distintos países. Además, es la institución que diseña y recomienda la aplicación de planes económicos en aquellos países que solicitan su asistencia. La Argentina ingresó al FMI en 1956. El Banco Mundial (BM) es otro de los organismos financieros internacionales pertenecientes a la ONU. Está integrado por 187 países miembros, que son accionistas y asisten con créditos a otros países, Estos créditos son destinados a proyectos de infraestructura, administración pública, educación y salud. La Argentina ha recibido ayuda del BM en diversas oportunidades.

Por su parte, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), fundado en 1959, tiene como objetivo impulsar el progreso económico y social de los países americanos.

La Argentina fue uno de sus miembros fundadores y, en la actualidad, está conformado por 48 países. Los créditos otorgados por el BID contribuyen a dinamizar la producción y el empleo. Así, la Argentina logró apoyar a la pequeña y mediana empresa, y creó programas para impulsar microemprendimientos. Además, financió proyectos relacionados con comunicaciones, transporte,

minería, alimentos, gas y petróleo, entre otros. El BID también brindó asistencia técnica a la Argentina, colaborando en la elaboración e implementación de diversos proyectos.

La Argentina en el comercio mundial.

Después de la Segunda Guerra Mundial, el GATT (Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio) fue el organismo que reguló el comercio a nivel mundial. Este organismo establecía las normas de los intercambios comerciales y servía como un espacio de negociación. La Argentina se adhirió al GATT en 1967. En 1995, fue sustituido por la Organización Mundial del Comercio (OMC). Desde entonces, la Argentina comercia bajo las reglas internacionales. En los últimos años y con apoyo del grupo de Países No Alineados, reclama la anulación de ciertas normas de la actividad agrícola que considera desleales, como los subsidios agrícolas que los países desarrollados otorgan a sus productores. La participación de la Argentina fue siempre reconocida por la importancia de su producción a nivel mundial.

La participación del Estado argentino en la cultura mundial.

La educación estatal de la Argentina es reconocida internacionalmente. Sus universidades son centros de atracción de estudiantes latinoamericanos y de países desarrollados, y sus académicos son reconocidos a nivel mundial. La excelente capacitación ofrecida por las universidades e institutos estatales es un factor importante para quienes buscan profesionales de gran formación. Una de las estrategias del Estado nacional para el desarrollo de cultura es la creación de la marca "Argentina" como distintivo para promocionar al país en el exterior.

Del mismo modo, el lanzamiento del Canal Encuentro y la programación de la Televisión Pública representan una nueva forma de difundir la cultura en la población. Por otro lado, la Argentina ofrece diversos eventos culturales de importancia nacional e internacional, como la Feria del Libro, festivales de cine y de música, exposiciones, entre otros, además de contar con personal técnico y creativo de alta calidad. A la promoción de estas actividades se suma el impulso estatal a la industria cinematográfica, a través del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa). A nivel internacional, cada vez más distribuidoras de cine compran los derechos para comercializar proyectos argentinos en el resto del mundo.

La Argentina y las cuestiones sociales mundiales.

El panorama de la sociedad mundial es preocupante. Muchas personas viven en la extrema pobreza y desigualdad, vulnerables a la explotación de los más poderosos. En este sentido, la ONU, como organismo supranacional, no ha logrado establecer las condiciones necesarias para revertir esta situación, que sigue profundizándose. Numerosas ONG trabajan en proyectos orientados a mejorar las condiciones de vida, sociales, ambientales y de derechos humanos de gran parte del mundo. La Argentina es sede de varias ONG, ya sea locales, como Red Solidaria, o internacionales, como Missing Children.

En agosto de 2002, luego de la crisis económica, la Argentina fue sede de la reunión zonal del Foro Social Mundial (sm), realizado en enero del mismo año en Porto Alegre. En esa oportunidad, la discusión estuvo centrada en "la crisis del modelo neoliberal en la Argentina y los desafíos para el movimiento global". Este foro busca promover la articulación de las luchas a nivel continental, así como difundir las experiencias de resistencia y las alternativas internacionales contra políticas liberales, como las privatizaciones, el libre comercio y la desregulación económico-financiera. Otro

de sus objetivos es lograr la articulación de los diferentes movimientos y organizaciones sociales y populares que luchan contra este modelo.”

La participación del Estado en cuestiones ambientales.

Como miembro de la ONU, la Argentina firmó acuerdos internacionales para la protección del medio ambiente. En este sentido, fue sede de la Décima Conferencia de las Partes (cop 10), realizada en diciembre de 2004, en Buenos Aires. Esta cumbre fue la primera reunión internacional de relevancia, que posicionó al país como un actor importante en las decisiones ambientales a nivel mundial. Allí se generaron acuerdos para promover los proyectos de Mecanismo de Desarrollo Limpio, que consisten en la inversión en energías renovables, eficiencia energética, forestación y reforestación, manejo de residuos sólidos, entre otros. La delegación argentina reclamó a los Estados Unidos que firme el Protocolo de Kyoto, por el cual los países industrializados están obligados a reducir sus emisiones - de dióxido de carbono y ayudar a los países emergentes a desarrollar su economía de una manera menos contaminante.

El cuidado del agua.

Uno de los compromisos más importantes es el cuidado del agua. La Argentina es uno de los países que debe administrar y proteger el Acuífero Guaraní, una de las reservas de agua dulce más grandes del mundo, compartida con los países vecinos del Mercosur. Este compromiso internacional llevó a la Argentina a mantener un grave conflicto con Uruguay por el uso común del río Uruguay. La falta de consulta respecto a la instalación de plantas de celulosa en el vecino país, provocó el reclamo de la Argentina y el tratamiento de la cuestión por el Tribunal Internacional de la Haya. Por otra parte, fue promulgada la Ley de Glaciares para proteger a todos los glaciares que se encuentran en el territorio nacional frente a las actividades contaminantes.

Sin embargo, las políticas en torno a la limpieza de los grandes cursos de agua contaminados, como la cuenca Matanza-Riachuelo, siguen siendo una deuda pendiente. La cuestión energética. Ante la crisis energética mundial y la mayor demanda de energía en el país por la creciente actividad industrial, se comenzaron a desarrollar otro tipo de energías alternativas, que se suman a la energía nuclear. Las energías eólica, solar, mareomotriz, hidráulica y geotérmica conforman el grupo de las llamadas energías no tradicionales o alternativas que, pese a sus costos elevados, presentan grandes ventajas. Si bien la energía hidroeléctrica es la más difundida, el país cuenta con diversos emprendimientos que emplean distintas energías alternativas, como los parques eólicos en la Patagonia, la energía solar en el Noroeste, la energía geotérmica en Neuquén, entre otros. Sin embargo, su implementación es local, por lo que no logran abastecer a un sector importante del territorio.

Distribución y tenencia de la Tierra.

La producción agropecuaria emplea el suelo como factor principal y las condiciones del clima, como generador biológico.

Los suelos presentan diferente potencialidad productiva, de acuerdo a la distribución y localización, por lo que su valor es cambiante. Un suelo fértil tendrá más valor si presenta buenas condiciones de accesibilidad. Ese valor se traduce en un precio que lo transforma en un bien apropiable: la tierra, - La tierra puede ser utilizada bajo diferentes formas de tenencia, tanto por el propietario como por terceros. La tenencia de la tierra es la relación jurídica entre el productor y la tierra, y por lo tanto, puede dividirse en las siguientes categorías:

Propiedad: es la tenencia cuando un individuo o un grupo de personas tiene título de propiedad o posesión de la tierra. Aparcería: es el contrato por el cual se acuerda establecer el uso de la tierra mediante el pago de una proporción o porcentaje de la producción. Arrendamiento: es el contrato por el cual se permite el uso de la tierra mediante el pago de una determinada cantidad de dinero. Ocupación: es el uso de la tierra sin un contrato escrito que avale la tenencia; puede ser con permiso del propietario, lo cual supone algún tipo de pago o compensación, o de hecho, sin permiso del propietario. + Comunal: se da cuando existe un derecho dentro de una comunidad, por el cual cada miembro, independientemente de la comunidad, tiene derecho a usar las propiedades. Estatal: se asignan derechos de propiedad a una autoridad del sector público; por ejemplo, las tierras forestales que están bajo control del Estado. En la Argentina, existen Establecimientos Agropecuarios (EAP), que son tierras repartidas en unidades productivas cuyas actividades están dirigidas por el productor agropecuario.

Los usos del suelo-agropecuario.

Las actividades de la tierra configuran los usos del suelo agropecuario. La distribución de esos usos puede variar en función de las características del ambiente y los mercados de consumo, pero también por las características de los productores que desarrollan la actividad. Por ejemplo, los establecimientos pampeanos mixtos combinan la agricultura y la ganadería, En cambio, las chacras campesinas del Noreste Argentino (NEA) suelen ser poli productiva. Esto significa que realizan una producción agropecuaria muy diversa, basada en la obtención de leche, mandioca y caña de azúcar, la cría de aves y la cosecha de frutales, entre otras actividades. Esta poli producción está orientada a cubrir las necesidades de autoconsumo. En términos generales, cuando la producción está muy capitalizada, debido a la adopción de tecnología intensiva y la reducción de fuerza de trabajo, la unidad productiva tiene un mayor grado de especialización dedicada a cultivos industriales.

Los actores sociales agrarios.

En la producción agropecuaria intervienen diversos actores sociales. Tradicionalmente, se los diferencia en dos grandes grupos. Por un lado, los actores con posibilidad de acceso a la tierra; tanto propia como cedida. A su vez, estos actores se dividen en pequeños; medianos y grandes productores, en función de la escala de producción, determinada por la combinación de los factores tierra, capital y trabajo. Por otro lado, están los trabajadores rurales; los que se dividen entre aquellos que cobran un salario a cambio de las labores realizadas, los que cobran en especies y quienes no reciben, bien compensación alguna. En muchos casos; estos trabajadores pertenecen a la familia del productor, por lo que se denominan trabajadores familiares. * Además, se distinguen los productores contratados de manera permanente, diferentes a aquellos que son contratados temporalmente, por ejemplo, en épocas de zafra o cosecha de algodón en el norte del país, o de esquila, en el sur. Por lo general, los productores pequeños utilizan mano de obra familiar, con escasa demanda de trabajadores permanentes.

No obstante, los procesos de modernización experimentados por las actividades agropecuarias desde la década de 1970, consistieron en la incorporación de maquinarias que permitían ahorrar mano de obra lo cual generaba un excedente de trabajadores que, en muchos casos, emigró a las ciudades, El proceso de reestructuración que se intensificó en las últimas décadas modificó el mercado de trabajo al continuar el ciclo de capitalización, la reducción del empleo directo y los cambios en los requerimientos de mano de obra. En este contexto, se registró un descenso en el número de trabajadores estables y:» un aumento de los trabajadores transitorios, es decir, se incrementó el trabajo ocasional. Esto ocasionó la localización de la mano de obra rural en zonas urbanas, además de un aumento de empleos ligados a servicios para la producción

primaria. Hoy en día, el sector cuenta con nuevos actores, que no poseen tierra ni venden su trabajo, pero invierten grandes capitales en la producción agropecuaria.

La configuración del campo hasta 1970.

Hasta fines de la década de 1960, la estructura agraria del campo argentino estuvo basada en, por lo menos, cuatro grupos de productores: pequeños, medianos y grandes, y trabajadores rurales, muchos de ellos semi asalariados. En la región pampeana, se conformó una de las áreas más importantes de producción agraria. Esto se debió a la estructura de uso mixto de la tierra, que implicaba la alternancia entre agricultura y ganadería. Este uso de la tierra permitía mantener la capacidad productiva de los suelos a la vez que permitía a * los productores adaptarse a las oscilaciones del mercado internacional.

Los cambios tecnológicos de mayor impacto en este periodo fueron el reemplazo de mano de obra a principios de siglo y, posteriormente, el de los animales de tiro por tractores. En el resto del país, las áreas de producción agrícola estuvieron ligadas al mercado interno y fueron reguladas por el Estado. A pesar de ello, las áreas productivas atravesaron grandes crisis que afectaron, sobre todo, a los pequeños productores y generaron migraciones hacia los centros urbanos. La estructura agraria estaba basada en un gran número de pequeños productores con escasa capacidad de capitalización y sin poder adaptarse a las nuevas condiciones de producción. Además, los productores campesinos e indígenas desarrollaban actividades de subsistencia, combinadas con trabajos temporarios estacionales en las áreas de producción comercial, como la cosecha de caña de azúcar.

La expansión agrícola.

A partir de la década de 1970, y sobre todo en las dos décadas siguientes, ocurrieron cambios significativos en el sector agropecuario. Las primeras modificaciones se produjeron en la región pampeana, a partir de la adopción de elementos tecnológicos de la llamada "Revolución Verde" que se caracterizó por causar grandes transformaciones, como el uso de agroquímicos, la incorporación de maquinaria más potente y la introducción de sistemas de irrigación, para aumentar los volúmenes de productividad. Además, se adoptaron nuevas variedades de cultivos, como el trigo de ciclo corto y el maíz híbrido, así como herbicidas y pesticidas. Posteriormente, estos cambios posibilitaron el ingreso de la soja que, al ser cultivada luego del trigo, permitía generar dos cosechas anuales. - Luego, entre 1988 y 2002, se produjo un fuerte proceso de concentración de la producción y la tierra. Como consecuencia, en ese período, hubo una gran disminución en la cantidad de pequeños y medianos productores, y un aumento de los grandes productores, que pasaron a controlar una gran parte de la producción.

La modernización en el área pampeana.

Los principales actores de la modernización del agro pampeano fueron los productores medianos con producciones mixtas, que adoptaron la doble cosecha de trigo-soja. La producción aumentó notablemente, con lo cual la recuperación del suelo requirió el uso de altas dosis de fertilizantes. Durante la década de 1980, se realizó la transición a la adopción de la soja, que hacia 1990 se consolidó como cultivo predominante. A la potencialidad ambiental del área pampeana se sumó la expansión de los mercados internacionales y los precios altos. Además, comenzaron a expandirse las prácticas de labranza cero o siembra directa, acompañadas de nuevas maquinarias y semillas genéticamente modificadas, resistentes a herbicidas.

La siembra directa es una práctica agrícola que limita al máximo el movimiento de los suelos. Sobre el rastrojo dejado por el cultivo anterior, se siembran las semillas en las pequeñas ranuras o surcos generados por la maquinaria. Todo esto conformó un “paquete tecnológico” de alto costo para cultivos a gran escala, que generó la concentración en manos de los productores más capitalizados, en su mayoría vinculados a compañías exportadoras internacionales. En efecto, una de las características más importantes de la producción sojera es que está integrada al complejo agroindustrial de granos, aceites y fertilizantes, liderado por compañías multinacionales.

La soja no se exporta como grano sino transformada en aceite y alimentos balanceados para animales. Por ello, el aumento de la producción incluyó la construcción de grandes fábricas de aceite, así como de puertos privados cerealeros y aceiteros.

El proceso de agriculturización.

El proceso de expansión de la agricultura en áreas que eran mixtas o ganaderas, se denomina agriculturización. Este fenómeno comenzó a desarrollarse en la década de 1960, en respuesta a la demanda de granos por parte de los mercados europeos, que eran los principales compradores de cereales y oleaginosas. La agriculturización implicó, en las décadas siguientes, el avance del cultivo de soja y la disminución de la ganadería.

La tierra utilizada para la ganadería fue orientada a la producción sojera, mientras el ganado fue concentrado en feed lots o desplazado hacia las áreas extrapampeanas. Por lo tanto, las áreas “marginales” fueron integradas a la producción de este cultivo. Además, la agriculturización no diversificó la producción, ya que los cultivos “clásicos” pampeanos, como el maíz, el trigo y el girasol, vieron reducida su producción al no poder competir con la soja.

Los actores sociales tradicionales y nuevos

Además de los avances tecnológicos, el proceso de modernización incluyó cambios en la población rural y la organización del proceso productivo. Solo los grandes productores pudieron acceder a los nuevos paquetes tecnológicos (semillas transgénicas, herbicidas, maquinaria especializada), ya que requerían importantes inversiones de capital. A esto se sumaron grandes empresas, que ampliaron sus actividades hacia el sector primario.

El acceso a la nueva tecnología fue diferenciado, lo cual afectó a los distintos actores sociales. ya que los cultivos “clásicos” pampeanos, como el maíz, el trigo y el girasol, vieron reducida su producción al no poder competir con la soja.

Los actores sociales tradicionales y nuevos Además de los avances tecnológicos, el proceso de modernización incluyó cambios en la población rural y la organización del proceso productivo.

Solo los grandes productores pudieron acceder a los nuevos paquetes tecnológicos (semillas transgénicas, herbicidas, maquinaria especializada), ya que requerían importantes inversiones de capital. A esto se sumaron grandes empresas, que ampliaron sus actividades hacia el sector primario. El acceso a la nueva tecnología fue diferenciado, lo cual afectó a los distintos actores sociales.

Los pequeños y medianos productores no pudieron competir con los grandes y, al no poder adaptarse a los nuevos cambios, debieron vender o arrendar sus campos a grandes propietarios. Esto ocasionó un proceso de concentración de la propiedad en grandes unidades de producción. En general, los pequeños productores se trasladaron a las ciudades más cercanas o ciudades

intermedias, donde instalaron algún negocio con el dinero de la venta o vivieron con el dinero generado por el arrendamiento. Por otro lado, un número importante de peones del campo se quedó sin trabajo, ya que las nuevas tecnologías requerían menos mano de obra. En muchos casos, también se trasladaron a las ciudades en busca de nuevas oportunidades laborales. Los contratistas son los últimos actores que se incorporaron a este escenario.

Se trata de empresas locales que invierten capitales en maquinarias y alquilan tierras. En algunos casos, son medianos productores locales que compraron máquinas con la ayuda de créditos. Algunos contratistas no solo trabajan su tierra, sino también los campos de otros propietarios, ¡un servicio por el cual reciben un pago! Todas estas actividades permiten incorporar tecnología más avanzada a la producción. Otros actores importantes son los grandes productores, también conocidos como agribusiness.

Estos productores concentran la producción sojera y suelen optar por arrendar la tierra en vez de poseer grandes superficies. Esta es una estrategia que les permite disminuir los riesgos climáticos en las cosechas y concentrar la inversión de capital en la compra de máquinas agrícolas e insumos, prácticas que han creado una fuerte presión sobre los recursos naturales. Otros actores surgidos en el nuevo escenario rural, son los pools de siembra y los fondos de inversión.

En este caso, atraídos por la alta rentabilidad de la producción, arriendan las tierras con capitales de origen financiero y tercerizan las actividades productivas] En este contexto, el auge del cultivo de la soja significó un dinamismo muy importante para algunas ciudades de las áreas destinadas a la producción de este cultivo, que ya contaban con una infraestructura industrial orientada al campo. Allí, las empresas reanudaron la producción de maquinarias agrícolas, que fueron vendidas a los productores. Tal es el caso de las ciudades de Rafaela, en la provincia de Santa Fe, o 9 de Julio, en la provincia de Buenos Aires.

La exclusión en las | producciones extrapampeanas.

En las regiones extrapampeanas, la modernización agrícola fue dispar. En algunos casos, se llevaron a cabo importantes reconversiones productivas, como en la producción de vid en Cuyo o de cítricos en la provincia de Tucumán. En otros casos, las políticas neoliberales de la década de 1990, basadas en la desregulación, la apertura y la paridad cambiaria con el dólar, sumieron a las economías regionales en una situación de crisis y estancamiento, ya que estaban vinculadas preferentemente al mercado interno y, por lo tanto, fueron más vulnerables a las crisis.

En términos generales, las producciones regionales quedaron relegadas del proceso de modernización y se enfrentaron a graves problemas estructurales por la competencia de productos internacionales, como fue el caso del azúcar, por la producción brasileña, o del algodón y la lana, frente a las fibras sintéticas. Para atenuar esa situación, existieron programas estatales que establecieron planes de ayuda para los pequeños productores, con financiamiento de organismos internacionales, pero no lograron compensar las medidas desregulatorias que afectaron de mayor manera a los pequeños productores.

Actualmente, las producciones regionales más dinámicas están orientadas al exterior, como en el caso de los cítricos, la miel, la carne de cordero o algunas producciones intensivas en capital, como los berries (arándanos, frambuesas, moras, frutillas). Sin embargo, la inserción de estos productos en el mercado internacional es variable, según la estabilidad de las economías demandantes.

Los sectores campesino e indígena.

Tradicionalmente, los sectores campesino e indígena, con capacidad de auto subsistencia, han sido marginados. Sin embargo, en la década de 1990, las profundas transformaciones en el modelo de producción generaron el desplazamiento de muchas de estas comunidades. Por eso, las provincias del norte argentino, con una importante presencia de comunidades campesinas e indígenas, fueron especialmente afectadas por el avance del modelo de la agricultura intensiva. El avance de la frontera agropecuaria hacia otras áreas de producción, los desmontes de bosque nativo y el alambrado de parcelas aceleraron la exclusión de la pequeña agricultura.

En muchos casos, estos productores se transformaron en asalariados contratados temporalmente por las mismas empresas desmontadoras que los desalojaron de sus tierras. Otros pequeños productores tuvieron que abandonar las tierras donde producían.

Los complejos agroindustriales.

Un complejo agroindustrial es un conglomerado empresarial con capacidad para producir materias primas y transformarlas en productos terminados que, a su vez, sirven para el consumo directo o para nuevos procesos de transformación. | En este sentido, el complejo integra-las-actividades de producción agropecuaria con las actividades industriales, e involucra además la distribución de los productos elaborados.

De esa manera, comprende un ciclo de etapas y concentra las actividades de los sectores primario, secundario y terciario de la economía. En la Argentina, los complejos agroindustriales tuvieron su origen a fines de la década de 1960, a partir de un proceso que implicó una mayor interdependencia entre los procesos productivos y el surgimiento de nuevas relaciones entre los actores sociales ligados a esos complejos.

Esas relaciones fueron desiguales y excluyentes, ya que los complejos producían a gran escala y demandaban una provisión constante de insumos de calidad. Solo los productores agropecuarios medianos y grandes pudieron cumplir con las demandas de la agroindustria e integrarse a ella, aunque de forma subordinada. Los pequeños productores resultaron marginados del sistema y, en muchos casos, sin posibilidades de competir con los complejos agroindustriales, debieron abandonar la actividad. La expansión industrial fue acompañada por un proceso selectivo de modernización tecnológica, sin participación del Estado y que únicamente benefició a los productores subsidiarios.

Estas tecnologías promovieron la producción a escala para el abastecimiento de la demanda internacional masificada y de un mercado local en expansión. Como consecuencia, la producción comenzó a especializarse en productos más rentables, para la exportación y de gran demanda. De ese modo, las materias primas Vista de un complejo agroindustrial y centro de almacenaje, sobre el río Paraná. agropecuarias crecieron en importancia como insumos para la industria procesadora, las empresas transnacionales fueron adquiriendo protagonismo como fuentes de abastecimiento a nivel mundial y los actores sociales más vulnerables quedaron excluidos del proceso productivo agrícola.

La pampeanización de la agricultura.

El proceso de expansión de los cultivos pampeanos hacia regiones vecinas, especialmente del cultivo de soja a provincias del NOA y el NEA, es conocido como pampeanización: Este proceso implica el reemplazo de cultivos locales, como el poroto en Salta o el algodón en Chaco, lo cual, a su vez, generó la deforestación de bosques nativos, como el monte chaqueño. En esta expansión, el arrendamiento de tierras tuvo gran importancia y ocasionó importantes cambios en algunos actores sociales cada vez menos vinculados con sus explotaciones y territorios. Asimismo, luego de la devaluación de 2002, se incrementó la participación del capital de origen extraagropecuario.

Así, surgieron los fondos de inversión conformados por un grupo de personas con los mismos objetivos de inversión, que aportan dinero para que sea administrado por un equipo de profesionales. Estos fondos de inversión atrajeron capitales provenientes de diferentes sectores: bancos, aseguradoras, etcétera. Los capitales eran invertidos en la producción de cultivos en distintas latitudes del país, para lograr la optimización y disminuir los riesgos en la producción. Los pools de siembra funcionan con una estrategia similar a los fondos de inversión.

A partir de la combinación del dueño de la tierra, un contratista y un ingeniero agrónomo, acuerdan una producción y cada uno aporta sus recursos: tierra, trabajo e insumos, respectivamente, y se reparten las ganancias de acuerdo a su participación. En el marco de la política económica que benefició a las actividades orientadas a la exportación, los fondos de inversión financiera se vieron algo limitados luego de la crisis financiera de 2001.

Estas modalidades también fueron adoptadas por grandes productores-contratistas, que se adaptaron a la nueva realidad del agro. En este sentido, estos productores aumentaron las superficies trabajadas y arrendadas, se expandieron hacia áreas no pampeanas o países limítrofes, y crearon estrategias para atraer inversores ajenos al sector. En distinta medida, todos estos actores aprovecharon un conjunto de circunstancias favorables: las posibilidades ofrecidas por el marco jurídico-financiero; los beneficios de la tecnología aplicada a la soja, con la siembra directa que redujo los tiempos de producción y la adopción de un paquete tecnológico; la situación de crisis, especialmente en la segunda mitad de 1990, que se tradujo en un fuerte endeudamiento y la baja de los precios de la tierra, y por último, el posterior aumento de los precios de los cultivos orientados a la exportación, gracias a la demanda externa y la devaluación de la moneda argentina. Esta gran transformación y extensión de la frontera agrícola a otras regiones del país ha modificado la estructura agropecuaria de la Argentina.

El crecimiento de las externalidades.

Tradicionalmente, para realizar una actividad productiva agropecuaria, era necesario contar con tierra, capital y los conocimientos necesarios. En la actualidad, la producción de un cultivo puede realizarse sin disponer de ninguno de esos factores, ya que se pueden arrendar superficies a terceros, obtener capital de actores sociales no agropecuarios, y contratar productores y empresarios que prestan servicios como siembra y cosecha, entre otros. Así, la agricultura depende cada vez menos de las características propias de la unidad productiva y cada vez más de factores externos al establecimiento y al sector agropecuario.

El Estado como regulador de la producción agropecuaria.

Los sucesivos gobiernos nacionales crearon diferentes mecanismos para intervenir en el sector agropecuario pampeano y extrapampeano, con el fin de evitar la conformación de monopolios, asegurar la provisión de alimentos a la población, promover las exportaciones y proteger las producciones locales frente a la competencia de productos extranjeros. En términos generales, la regulación estatal en el área pampeana se orientó a promover la inserción de la producción de granos y carne en el mercado internacional.

Estas estrategias tenían como objetivo mantener precios competitivos y una oferta de productos o en función de las variaciones de la demanda. En cambio, en las economías regionales o extrapampeanas, la intervención del Estado se basó en la absorción de los excedentes de la o a producción para el mercado interno y su venta al exterior. El sistema de precios que lo regulaba, dependía directamente del consumo local y la intervención estatal.

En ambos casos, el Estado creó organismos de regulación para cada producción, como la Junta Nacional de Granos y la Junta Nacional de Carnes, en 1933, o la Comisión Reguladora de la Yerba Mate, en 1935, entre otros organismos. Además, realizó obras de infraestructura para facilitar el traslado de la producción a los centros de distribución y consumo, como en el caso de la extensión del ramal ferroviario a las provincias de Jujuy y Salta para el transporte de la producción azucarera.

Los instrumentos regulatorios del Estado.

La intervención del Estado en el sector agropecuario implicó la aplicación de diferentes mecanismos. Entre ellos, pueden destacarse los siguientes: El establecimiento de precios mínimos a pagar, principalmente, por los pequeños y medianos productores, que carecen de capacidad de negociación frente a los compradores monopólicos o las grandes industrias con importante presencia en el mercado. El apoyo a canales de comercialización abiertos y transparentes, que garantizaran un precio justo y la calidad del producto. El financiamiento de las operaciones comerciales, para evitar que los pequeños productores ingresen al mercado en condiciones desfavorables de precios y permitir que un ente regulador comercialice el producto cuando lo considere más apropiado. La determinación de cupos de producción para la industrialización del producto agrícola y/o para el mercado, lo cual evita su saturación por sobreproducción. La difusión de información necesaria para la toma de decisiones por parte de los productores, tanto en lo referido a mercados internos como externos:

Desregulación y crisis en el contexto neoliberal.

Desde comienzos del siglo xx hasta mediados de la década de 1970, el Estado tuvo un papel decisivo en la producción agropecuaria. Pero, el cambio de modelo económico en 1975 y la definitiva implementación del modelo neoliberal desde 1991, alteraron drásticamente las condiciones del sector agropecuario y afectaron, sobre todo, a los pequeños y medianos productores. La apertura externa, la - acelerada inserción de la economía en el flujo comercial y financiero internacional, y la ausencia de políticas de regulación estatal, transformaron la dinámica de acumulación de los agentes económicos involucrados en los diferentes procesos productivos.

En base a este conjunto de medidas de ajuste exigidas por los organismos multinacionales de crédito, como el Banco Mundial (BM) o el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Estado implementó la reducción del gasto público, que incluyó la privatización o concesión de empresas públicas de servicios, como los ferrocarriles, y la eliminación de los organismos de regulación de la economía, en general, y del sector agropecuario, en particular. En algunos casos, ello implicó la transformación del sector externo en el principal demandante de la producción, como ocurre con el algodón, el arroz, los cítricos y las frutas del Alto Valle del río Negro.

En otros, el mercado interno siguió siendo el principal destino de la producción, pero el establecimiento de precios de los productos quedó determinado por la cotización de los mercados internacionales. Con la eliminación de los organismos reguladores, el Estado dejó de intervenir en la fijación de precios mínimos y de pautas de comercialización. El establecimiento de precios y demandas quedó en poder exclusivo de los mercados externos, lo cual afectaba principalmente a las economías regionales de escasa proyección internacional, que vieron modificado su desarrollo productivo. Esto obligó a los productores regionales a reorientar la modalidad de inserción en el mercado.

Las organizaciones sociales de campesinos y productores familiares.

En las últimas décadas, los agricultores familiares y los productores-campesinos, junto a otros sujetos sociales, como trabajadores rurales o contratistas sin tierra, conformaron diversos

movimientos sociales de lucha en el ámbito rural. Los problemas económicos derivados de la producción en un contexto de crisis fueron el eje de las acciones colectivas de denuncia y reclamo. Otro de los reclamos de estas organizaciones sociales estuvo relacionado con la cuestión de la tenencia de la tierra o la supervivencia como población rural.

La lucha por la tierra.

En la región pampeana, las consecuencias sociales y económicas de las políticas implementadas durante la década de 1990 dieron origen a las organizaciones rurales. Estas políticas agravaron el proceso de concentración de tierras, que generaron una creciente desocupación, el endeudamiento de los pequeños y medianos productores, y un importante éxodo rural. Una de estas organizaciones es el Movimiento de Mujeres Agropecuarias en Lucha (mmL), surgido de la acción espontánea de productoras y esposas de productores familiares capitalizados de Winifreda, en la provincia de La Pampa. Estas mujeres se organizaron para impedir los remates judiciales de tierras y maquinarias de los productores que no podían solventar sus deudas bancarias. Por otro lado, también surgieron movimientos campesinos en las zonas agrícolas “marginales” del área extrapampeana, que denuncian las precarias condiciones de producción y calidad de vida pero, sobre todo, los conflictos por la tierra.

Además, reivindican modos de producción sustentables. Uno de ellos es el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase), conformado por campesinos y pobladores del noroeste argentino con tenencia precaria de la tierra y altos niveles de pobreza. Otras organizaciones son el Movimiento Campesino de Formosa (Mocafor) y la Unión de Campesinos Poriajhú del Chaco, que continuaron la lucha iniciada en los años setenta por las Ligas Agrarias del Nordeste. Ambos movimientos sociales mantienen los reclamos sobre la cuestión de la tierra y la difícil supervivencia de los campesinos frente a los monopolios comercializadores y los grandes productores. Otras organizaciones sociales campesinas son La Red Puna del noroeste argentino, la Asociación de Criadores de Cabra Angora de Neuquén y la Organización de Comunidades Mapuche-Tehuelche de Chubut.

Estos movimientos reclaman por niveles mínimos de subsistencia, y el reconocimiento de la tierra y la identidad cultural, ya que cuentan con un fuerte componente indígena. Por su parte, el Movimiento Campesino de Córdoba (mcc) nació con el objetivo de reivindicar la producción rural y la vida campesina, y garantizar el acceso a los recursos y la tierra. En los últimos años, surgieron nuevos movimientos sociales rurales, como la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra (usT) de Mendoza y San Juan, el Movimiento Giros de Rosario y otras Organizaciones Comunitarias Urbanas que reivindican la lucha por la tierra y la soberanía alimentaria.

La primarización de la economía nacional.

Dado su escaso valor agregado, se considera que los productos primarios son poco dinámicos. La inserción favorable de la Argentina en la división internacional del trabajo y el comercio internacional hasta 1930, tuvo su origen en la exportación de productos agropecuarios. A mediados del siglo xx, el desequilibrio en la balanza comercial, ocasionado por la exportación de productos primarios frente a la importación de manufacturas de mayor valor, definía el grado de subdesarrollo de un Estado. Durante la fase agroexportadora, la Argentina cubrió una amplia demanda internacional de alimentos e insumos industriales, por lo que nuestro país fue conocido como el “granero del mundo”. Entre 1944 y 1974, el país desarrolló una base industrial para el abastecimiento

local con un fuerte impulso estatal, que permitió el surgimiento de un sector manufacturero, aunque con escasas posibilidades de inserción mundial.

A partir de 1975, con la implementación de políticas neoliberales de apertura económica y, posteriormente, con la instauración de la convertibilidad, la industria dejó de liderar el proceso económico y se dio inicio a una fase de “desindustrialización”. El desmantelamiento de la base industrial fue acompañado por un periodo de profundo deterioro social, en el que se multiplicaron los niveles de desempleo y pobreza. Luego de la crisis de 2001, comenzó una nueva etapa de crecimiento, en la cual la industria tuvo un papel secundario.

Entre los años 2002 y 2007, tuvo lugar en la Argentina una de las fases de mayor crecimiento económico, con eje en el sector primario. Este fenómeno es conocido como “primarización” de la economía, en el cual la producción y las exportaciones están basadas en commodities de escaso o nulo valor agregado. El retorno a la estructura comercial basada «en los recursos naturales significó una balanza comercial positiva, debido a los altos y sostenidos precios de los granos en el mercado internacional, la elevada productividad del sector agropecuario modernizado, y la creciente demanda de nuevos mercados emergentes, como China e India. Sin embargo, el elevado superávit, que impulsó el crecimiento económico de los grandes productores, generó conflictos entre el Estado y los exportadores agropecuarios.

La evolución del PBI y las exportaciones.

El producto bruto interno (PBI) es el valor monetario que representa toda la producción de bienes y servicios de una economía determinada. Dentro del PBI, es posible desglosar la participación de cada sector de la economía. A fines del siglo XIX, la producción agropecuaria representaba el 55% del total del país. En la actualidad, este porcentaje de participación es del 9%, frente al 18% de la producción industrial.

El resto del producto bruto interno está integrado por el comercio y los diferentes servicios que componen el sector terciario. Aunque el porcentaje de participación de la producción agropecuaria es relativamente bajo, prácticamente duplica al promedio del período 1993-2001 (5%) y representa un incremento del 26% para el período 2002-2011. La primarización es mucho más evidente en la estructura exportadora de la Argentina.

Como se observa en el gráfico de torta (FIG. 1), los productos primarios constituyen la mitad de las exportaciones totales, mientras que, si se suman las manufacturas de origen agropecuario (MOA) —bienes de escaso valor agregado o de primera transformación, como el aceite o las harinas—, el porcentaje asciende al 65%. En cambio, las manufacturas de origen industrial (MOI) abarcan el 22%. Si se compara el nivel de transformación de los productos exportados, la Argentina tiene un 50% de exportaciones de primera transformación.

“LOS RECURSOS ENERGETICOS”.

“Los recursos energéticos son uno de los bienes más importantes de un Estado. La valoración social de estos bienes es establecida por la gran demanda mundial. La Argentina cuenta con recursos energéticos, como los hidrocarburos, que son considerados estratégicos, ya que contribuyen al desarrollo económico del país. Actualmente, estos recursos no están en propiedad del Estado, ya que fueron privatizados en 1990”.

La explotación del petróleo en la Argentina ha tenido relación con el desarrollo de la economía nacional y con el poblamiento de las zonas más alejadas de los centros urbanos. La historia de la explotación comenzó el 13 de diciembre de 1907. Los estudios geológicos de exploración de este

hidrocarburo en el territorio argentino habían comenzado cinco años antes. El propósito del gobierno en ese momento era poder reemplazar el carbón mineral, que se importaba de Gran Bretaña y representaba el 95% de la energía. El descubrimiento del petróleo significaba contar con una nueva fuente energética propia y más barata. Posteriormente, el gobierno nacional, encabezado por José Figueroa Alcorta, emitió un decreto donde se tomaba posesión del yacimiento. De esa manera, en 1911, se creó la Dirección General de Explotación del Petróleo de Comodoro Rivadavia y, en 1922, la Dirección General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), cuyo primer director fue el coronel Enrique Mosconi. Del mismo modo, con el modelo argentino como referencia, otros países de la región comenzaron a crear organismos estatales, como la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (Ancap), en Uruguay, creada en 1931; Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), en 1936; Petróleos Mexicanos (Pemex), en 1938, o Petrobras de Brasil, en 1953.

En la Argentina, entre los años 1932 y 1943, YPF inició una gran expansión, que: incluyó la construcción de las refinerías de San Lorenzo (Santa Fe), Mendoza y Salta; el laboratorio de Florencio Varela; la sede central de Diagonal Norte, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA); y una red de estaciones de servicio en todo el país, en asociación con el Automóvil "Club Argentino (ACA). "A lo largo del tiempo, los diferentes gobiernos militares y democráticos sostuvieron una misma postura política frente a la explotación del petróleo: el monopolio estatal de las reservas petroleras. El Estado, a través de YPF, fue responsable por el desarrollo de casi todas las actividades productivas y el descubrimiento del 90% de las; reservas de hidrocarburos,

Sin embargo, no todos los gobiernos coincidieron en relación a la participación de capitales extranjeros en las perforaciones. Por su parte, la producción de gas fue encarada por YPF hasta 1946, cuando se creó la empresa Gas del Estado. Hasta entonces, esta empresa tenía a su cargo el transporte y la distribución del gas natural. Por otro lado, además de ser una empresa petrolera, YPF impulsó el proceso de poblamiento, así como el desarrollo local y regional, especialmente en la Patagonia y el Noroeste.

Ypf como factor de poblamiento. y desarrollo.

A partir de la crisis de 1930, el Estado nacional inició un rumbo económico orientado a aplicar medidas intervencionistas; es decir, asumió un rol planificador y ejecutor de la economía, y tuvo a su cargo una serie de empresas públicas. Una de las medidas adoptadas por el Estado para fomentar el desarrollo de la industria nacional ante el proteccionismo económico de las grandes potencias, fue alentar el traslado de ingresos del sector agrícola a la industria. En este proceso, YPF fue un factor fundamental, ya que era necesario reemplazar las manufacturas importadas por producción local; de esa manera, la explotación de la fuente de energía se realizaba en el país.

Este modelo económico fue conocido como industrialización sustitutiva de importaciones (ISI) y, para llevarlo a cabo, se adoptó el modelo fordista de producción industrial. Además, este modelo productivo estuvo acompañado por un Estado que contribuía económica y socialmente al Estado de Bienestar. En este sentido, el desarrollo de YPF como empresa pública ha sido muy importante. En lo económico, la explotación de hidrocarburos en el país permitió proveer al mercado interno de los insumos básicos para poner en marcha las industrias y alentar la inversión de capitales en ese sector. En orden político, se instituyó un modelo de distribución de la riqueza. De esta manera, el Estado, a través de YPF, pasó a ser clave en tres aspectos: la producción, el territorio y el trabajo.

Respecto a la producción, aportó el recurso energético necesario para el desarrollo de la industria, En relación al territorio, impulsó el poblamiento de muchas áreas del país. La construcción de polos petroleros consolidó una nueva actividad regional, a través de la generación de nuevas poblaciones, actividades comerciales, y servicios sociales y culturales. Además, el Estado logró

implementar mecanismos de distribución de las regalías, que contribuyeron al desarrollo de cada una de las regiones.

En el caso de Cutral Có y Plaza Huincul, cuyos orígenes se deben a la explotación del petróleo, la empresa ejerció dominio sobre la producción, además de tener propiedad territorial. De esa manera, se constituyó como una suerte de gobierno local. En cuanto al trabajo, el Estado, como empleador de miles de trabajadores, aplicó mejoras laborales dirigidas a conformar el mercado interno que la Argentina necesitaba para colocar sus productos. La incorporación de empleados a las empresas estatales mejoró la situación de los asalariados, que se volcaron al consumo masivo de bienes.

El proceso productivo del petróleo.

El petróleo y el gas son hidrocarburos formados por átomos de carbono e hidrógeno. Los hidrocarburos son compuesto orgánico que se originaron a partir de la transformación de plantas expuestas a distintos procesos físicos y químicos durante millones de años. Por las condiciones geológicas, se fueron depositando en las cuencas sedimentarias, donde se ha comprobado la existencia de hidrocarburos. En el país, se identificaron 24 cuencas sedimentarias (19 en territorio continental y 5 en la plataforma submarina), que cubren una superficie de casi 2 millones de km².

Las cuencas que se encuentran actualmente en explotación son la del Noroeste, la Cuyana, la Neuquina, la del Golfo San Jorge, y la Austral y Magallanes.) M SA “La explotación del petróleo va acompañada por la del gas, ya que ambos compuestos se “hallan juntos. Sin embargo, en la Argentina, predomina la producción gasífera en las cuencas del Noroeste y Austral. En la Neuquina, la explotación de gas y petróleo es más uniforme. En cambio, en las cuencas del Golfo San” Jorge y la Cuyana; es más importante la producción de petróleo.

A partir de la década de 1960, se inició en el país la explotación a gran escala del gas natural, extraído de los yacimientos gasíferos y petrolíferos. Los yacimientos destacados fueron Campo Durán y Madrejones, en Salta. Sin embargo, la producción más importante del país es la de Loma de la Lata, en la provincia del Neuquén, donde se encuentra el principal reservorio de gas.

El circuito económico de los hidrocarburos.

Ypf a partir de la década de 1.990.

Antes de ser aprovechada por la población, la producción de petróleo y gas involucra una serie de etapas. Estas etapas son la exploración y extracción, el transporte de las materias primas, y su procesamiento y distribución.

ver a partir de la década de 1990 A partir de 1989, bajo la llamada Ley de Reforma del Estado, se realizaron una serie de transformaciones en la estructura del Estado nacional, que llevaron a un proceso de privatización y concesión de empresas públicas. Estas reformas neoliberales implicaban el achicamiento del gasto público y la descentralización de servicios de la Nación hacia las provincias. En este contexto, YPF, al igual que otras empresas públicas, fue vendida a capitales transnacionales, lo que dejó sin empleo a 50.000 trabajadores, aproximadamente. La privatización de YPF se inició en 1989, con la conversión de la empresa a Sociedad Anónima (sa) y el “Plan de Transformación 3 Global”. De esa manera, se desreguló el mercado en las distintas etapas productivas y se incorporaron capitales privados. Para lograr mayor productividad y la apertura comercial al mercado internacional, se implementaron diversas medidas, como la privatización de las reservas, el despido de personal, la desregulación de los precios y la eliminación de trabas a la exportación. Por lo tanto, con la privatización de YPF, se otorgó a las empresas privadas la

propiedad de numerosos yacimientos en explotación, otras reservas comprobadas, refinerías, productos, e instalaciones y equipos que pertenecían a la empresa estatal. Durante la privatización de la empresa, el Estado conservó una parte de sus acciones, pero no quedó como socio mayoritario y, por lo tanto, no tenía decisión sobre los proyectos y acciones de la empresa.

Las reservas de petróleo y gas.

La Argentina tiene un total de reservas comprobadas de 457,7 millones de metros cúbicos de petróleo y 763,5 miles de millones de metros cúbicos de gas natural. Cuatro de las cuencas del país producen desde principios del siglo xx y han alcanzado un grado de madurez en términos de producción; por lo cual, sus reservas comenzaron a declinar. La cuenca Neuquina es la más importante, ya que concentra el 43% de las reservas de petróleo y el 50% de las de gas natural. Le siguen en importancia la cuenca del Golfo San Jorge, que acumula el 36% de las reservas de petróleo, y la cuenca del Noroeste, con un 25% de las reservas de gas. A partir de la privatización de la empresa, cesaron los estudios de exploración. En general, a las empresas privadas han tenido la política de invertir sobre seguro.

De esa manera, sobreexplotan los yacimientos que ya están en funcionamiento y no están dispuestas a arriesgar fuertes inversiones en exploración. Por lo tanto, se estima que, en unos años, la Argentina pasará a importar petróleo y gas, debido a la disminución de las reservas. Sin embargo, esta situación podría cambiar, ya que, en mayo de 2011, se descubrió una importante reserva de petróleo en el yacimiento de gas de Loma de la Lata, en la provincia del Neuquén.

YPF y el deterioro del Estado de Bienestar.

En la etapa de industrialización sustitutiva de importaciones, YPF representó el exponente industrial que impulsó el Estado de Bienestar. Posteriormente, al desaparecer ese modelo productivo y estatal, la empresa ya no se ocupó de la redistribución de ingresos hacia la clase trabajadora y las economías regionales. También, dejó de ser la empresa del Estado que representaba la soberanía de sus recursos. A partir de 1976, al asumir el gobierno militar, se inició en la Argentina un proceso de deterioro del Estado nacional, a partir de la implementación de medidas económicas que perjudicaron a la producción de la industria local. En ese contexto,

YPF absorbió gran parte de las deficiencias económicas nacionales. En la década de 1990, con la implementación de las políticas neoliberales comenzaron las privatizaciones de empresas que eran propiedad del Estado. Estas políticas fueron impulsadas por un discurso que sostenía la ineficacia del Estado como empresario y la necesidad de disminuir su presencia. El ámbito privado estaba asociado a la eficiencia y la rentabilidad, mientras que lo estatal era visto como corrupto y deficiente. También, en aquel momento, se consideraba que los empleados estaban poco capacitados. Sin embargo, para poner en funcionamiento a las empresas, muchos empleados despedidos volvieron a ser contratados. Particularmente, con la privatización de YPF se inició una etapa de conflictos sociales, basados en reclamos laborales y la defensa de la soberanía nacional, es decir, los recursos que son propiedad del Estado.

La concentración en la actividad petrolera.

Según un informe de la Cepal (Comisión Económica para América Latina), en la Argentina actual, cinco empresas concentran alrededor del 80% de la producción total de petróleo y controlan la mayor parte de la extracción de gas. Una sola empresa es responsable por casi la mitad de la

producción y concentra, entre otras actividades, el 59% de las reservas comprobadas de petróleo y el 49% de las de gas natural; el 48% de la producción de petróleo y el 65% de la distribución de gas; el 54% de la capacidad de refinación, y el 50% de las estaciones de servicio. Por otra parte, la distribución del gas natural, que anteriormente estaba a cargo de Gas * del Estado, pasó a manos de empresas privadas, que cuentan con licencias y están controladas por el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), quien dicta los reglamentos en lo referente a calidad de servicios, protección ambiental, etcétera.

Surjimientoy declive de algunas ciudades petroleras.

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la instalación de YPF en las provincias de Salta, Neuquén, Mendoza, Chubut y Santa Cruz, desde la década de 1920, promovió la movilización de recursos económicos, humanos y tecnológicos, con el objetivo de emplazar la infraestructura necesaria para el desarrollo de la explotación petrolera (FIG. ». Además de la creación de nuevos polos de producción, se abrieron caminos y se mejoraron las comunicaciones. También, el Estado estimuló la construcción de barrios para los trabajadores, así como la apertura de escuelas y hospitales. De esta manera, YPF implicó no solo un gran avance en la instalación de infraestructura, sino que también generó otras actividades económicas, como el turismo. Así, YPF fue una de las empresas que, además del empleo, se preocupó por satisfacer las necesidades de vivienda, educación y tiempo libre de los trabajadores,

Muchos pueblos crecieron gracias a la actividad petrolera. Sin embargo, cuando la empresa fue vendida en 1998 y se cerraron plantas e instalaciones, varios de estos pueblos, al no contar con otra actividad económica, sufrieron una gran crisis al no contar con otra actividad económica, sufrieron una gran crisis. Algunas de las ciudades más afectadas fueron Tartagal y General Mosconi, en Salta, y Cutral-Có y Plaza Huincul, en Neuquén. En estas ciudades, el índice de desocupación se ubicó en el 20% aproximadamente. Esta fue una de las causas por las cuales estas ciudades lideraron la resistencia contra la privatización de YPF. Las luchas desarrolladas en Tartagal y General Mosconi comenzaron en 1988, a partir de un intento de reestructuración de la empresa. Estas luchas y manifestaciones fueron muy importantes y produjeron, en septiembre de 1991, una de las primeras puebladas del país contra las políticas neoliberales. En 1996, Cutral-Có y General Mosconi fueron escenario de importantes movilizaciones contra las privatizaciones. Estas luchas se iniciaron con la modalidad de los cortes de ruta y dieron origen al movimiento piquetero.

Las consecuencias de la privatización.

La primera consecuencia del proceso de reestructuración de YPF fue la implementación del sistema de retiros voluntarios del personal; es decir, un acuerdo que los empleados hacen con la empresa para renunciar a cambio del pago de dinero. Ante la amenaza que representaban los despidos, muchos trabajadores adhirieron a este sistema, lo cual produjo una reducción de puestos de trabajo. Por su parte, los empleados que no aceptaron este convenio, debieron enfrentarse a dos situaciones. Por un lado, fueron obligados a asistir a cursos de capacitación con goce de sueldo, que los alejaban de su lugar de trabajo y evitaban los reclamos colectivos.

Por el otro, como parte del proceso de tercerización y con "consentimiento del sindicato, se crearon emprendimientos con algunos recursos humanos expulsados de la empresa pública, mientras que otros se incorporaron a una vasta red de empresas de servicios que realizaban parte de las actividades que antes correspondían a YPF.

Solo aquellos empleados técnicamente más capacitados fueron retenidos en la empresa. "Esta situación repercutió negativamente en la población que vivía en las ciudades petroleras

mencionadas, y en otras como Colonia Catriel, Campo Durán y Comodoro Rivadavia, mayormente conformada por empleados petroleros. Así, en estos lugares, surgieron numerosos problemas sociales que implicaron desempleo, emigración y despoblamiento. Muchas de estas poblaciones crecieron al amparo de la cultura estatal y no pudieron adaptarse al nuevo contexto de privatización. Aquellos que defendían la privatización de las empresas, argumentaban que la relación entre YPF y la población debía cambiar hacia una nueva cultura (la del mercado), sin el amparo del Estado. En este sentido, esos trabajadores debían encontrar una nueva forma de subsistencia. De esa manera, miles de trabajadores que habían contribuido al poblamiento de muchas zonas del país, pasaron a ser desempleados, sin ayuda del Estado y con grandes dificultades para readaptarse a la nueva realidad. ' Del mismo modo, mientras la empresa privatizada crecía económicamente, en las regiones petroleras comenzaron los conflictos sociales. Además, el estancamiento de la economía en la segunda mitad de 1990, impidió transformar esas zonas petroleras en polos de desarrollo que absorbiesen parte de la mano de obra calificada que había sido despedida.

Los movimientos sociales desocupados.

Luego de la etapa del Estado de Bienestar, durante la cual los trabajadores gozaron de ciertos beneficios otorgados por el Estado, las transformaciones de la década de 1990 afectaron especialmente a las zonas industriales. El quiebre del modelo económico significó la emergencia de distintos actores sociales. En tal sentido se verificó una ampliación y complejización de los conflictos. En ese contexto, surgieron nuevas formas de protesta, que tuvieron como protagonistas a las poblaciones de las ciudades o pueblos afectados por las políticas neoliberales. Eran ciudades que dependían de la empresa estatal, ya que una de cada cuatro personas vivía del empleo público, y el resto comerciantes y pequeños productores rurales- en mayor o menor medida dependía de aquel sector para desarrollar sus actividades.

Estas ciudades habían crecido en el marco de un “modelo de civilización territorial”. Así, como consecuencia de la privatización de YPE, surgió el movimiento piquetero, uno de los símbolos de estas luchas populares. La población que había reproducido su vida en torno a la ex empresa estatal YPF, ahora se movilizaba. Este movimiento estaba integrado por trabajadores desocupados y era muy heterogéneo.

Fueron los trabajadores desocupados quienes se pusieron al frente de la protesta= Sus reclamos hacia el Estado estaban relacionados con la creación de nuevos puestos de trabajo y la recuperación de aquellos que se habían perdido con las privatizaciones, Además solicitaban asistencia y protección social mediante planes de ayuda, hasta la recomposición de la situación laboral. Estas organizaciones expresaron sus reclamos, principalmente, a través de cortes de ruta, también conocidos como “piquetes” que impedían la circulación⁹En estos piquetes participaban trabajadores desempleados, familias y vecinos. En este contexto de desintegración económica, social, cultural y política en que se encontraban estos trabajadores, la propuesta de los movimientos de desocupados pretendía rescatar la cultura del trabajo.

Otros combustibles fósiles: conflictos e intereses.

El gas natural y el carbón son otros combustibles fósiles muy utilizados en el país. Por ejemplo, parte de la energía eléctrica proviene de plantas térmicas, que funcionan con gas natural como insumo. Sin embargo, la producción de estos combustibles genera un debate en torno a sus consecuencias ambientales. La producción de gas natural El gas natural está formado por una combinación de hidrocarburos y otros elementos en estado gaseoso, y también se encuentra mezclado con el petróleo crudo. Es un gas incoloro con gran poder calorífico, por lo cual constituye una fuente de energía eficaz y rentable.

En la Argentina, la creación de la empresa estatal Gas del Estado, en 1946, significó un aumento significativo en la provisión de este recurso. En 1943, solo el 6% de la población recibía el servicio, lo que equivalía a 190.000 usuarios; hacia 1992, la cantidad de usuarios domésticos había aumentado a casi cinco millones y cerca de 300 localidades a participación del gas natural en la generación de energía ascendía al 40%. A partir de la privatización de la empresa estatal Gas del Estado, en 1992, la industria del gas natural en la Argentina comenzó a estar en el mercado de combustibles (junio de 2007).

Así, el total de usuarios era equivalente al 45% de la población, distribuido en 18 provincias y cerca de 300 localidades a participación del gas natural en la generación de energía ascendía al 40%. A partir de la privatización de la empresa estatal Gas del Estado, en 1992, la industria del gas natural en la Argentina comenzó a estar organizada en tres segmentos diferenciados: producción, transporte y distribución.

La producción del gas natural pasó a ser una actividad desregulada; es decir, los productores exploran, extraen y comercializan libremente el gas, controlados por la Secretaría de Energía de la Nación. Por su parte, el transporte y la distribución del gas por redes constituyen servicios públicos, de modo que son prestados por empresas privadas, pero están reguladas por el Ente Nacional Regulador del Gas. Las consecuencias ambientales. El uso de combustibles fósiles tiene muchas ventajas, como su bajo costo y la facilidad de transporte. Sin embargo, tiene un gran impacto ambiental. Sus principales consecuencias son la contaminación del aire y el aumento del efecto invernadero. El dióxido de carbono (CO₂) es el gas que llega a la atmósfera por la quema de combustibles, lo cual contribuye al calentamiento global. A nivel mundial, existe un debate en torno a la reducción del uso de estos combustibles.

A partir de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo realizada en 1992, en Río de Janeiro, los países participantes, como la Argentina, comenzaron a trabajar en estas cuestiones. Posteriormente, en la Conferencia de Kyoto de 1997, se firmó un Protocolo donde se fijaron límites a la emisión de gases contaminantes, especialmente para los países desarrollados. Para cumplir con los acuerdos establecidos, el Estado argentino desarrolla varios programas que apuntan al uso racional de la energía. Además, lleva a cabo diferentes proyectos, como la generación de energías alternativas, como la nuclear, la hidroeléctrica y las llamadas energías renovables (eólica; solar, geotérmica y biomasa).

La producción de carbón.

El carbón se forma a partir de materia orgánica de origen vegetal, acumulada debajo de capas de sedimentos. A lo largo del tiempo, esta materia se transforma y pierde gradualmente su humedad, hasta convertirse en una sustancia sólida con alto contenido de carbono y, por lo tanto, con un alto valor energético. Este proceso se ha dado especialmente en zonas montañosas: Por ello, las regiones carboníferas de nuestro país se extienden a lo largo de provincias de Catamarca, La Rioja, San Juan, Cruz. También, se conocen formaciones carboníferas en Salta y Jujuy: Sin dudas, el yacimiento más importante es el de Río Turbio, en la provincia de Santa Cruz: Este yacimiento concentra el 99% de las reservas de carbón del país; La explotación en Río Turbio € Editorial Estrada S.A.P se inició en 1941 y estuvo originalmente a cargo de YPE. Más tarde, en 1958, fue creada la empresa estatal Yacimientos Carboníferos Fiscales (YCF), que se hizo cargo de la explotación hasta su privatización, en 1994.

Al igual que con YPF la creación de esta empresa tuvo dos objetivos: por un lado, poblar una región deshabitada hasta ese momento; por el otro, satisfacer intereses económicos relacionados con la producción energética. Además, acompañó al desarrollo del ferrocarril y la apertura de puertos

para el transporte de la producción. En ese momento la producción de este yacimiento era destinada al abastecimiento de las centrales termoeléctricas localizadas en Buenos Aires. Con la privatización de YCF se produjo una gran transformación tanto en la producción como en la distribución de este combustible. Hacia el año 2002, debido a fuertes irregularidades en la empresa que se hizo cargo, el Estado decidió recuperarla. Actualmente, la Argentina se autoabastece de carbón para la producción de electricidad, aunque importa carbón para uso industrial.

La soberanía de los recursos estratégicos.

Las fuentes de energía son necesarias para llevar adelante el proceso de industrialización y producción. La mayoría de los países del mundo consideran que los recursos energéticos deben pertenecer al Estado, ya que son estratégicos para el desarrollo económico. La actividad petrolera en la Argentina alternó entre lo público y lo privado. Desde su descubrimiento, los capitales extranjeros mostraron intención de participar en esta actividad. No todos los gobiernos permitieron la presencia de capitales extranjeros. En este sentido, hubo gobiernos que defendieron la propiedad nacional del recurso y la explotación por la empresa estatal YPF, y otros se inclinaron por el control federal de los yacimientos y las concesiones privadas. Estas discusiones generaron políticas a corto plazo, que no impidieron la planificación de un proyecto a futuro.

En muchos momentos del siglo xx, YPF dio pérdidas debido a los sobrecostos o subsidios y, por lo tanto, no tenía presupuesto para reponer reservas, es decir, realizar trabajos de exploración. En la actividad petrolera, suele ser fundamental el cálculo del valor de reservas que se espera encontrar, en relación con el riesgo y el costo de su exploración, desarrollo, producción y comercialización. Como la existencia de reservas de petróleo o gas está determinada por las características geológicas del lugar, los yacimientos pueden tener diferente dimensión, productividad y costos. Estos yacimientos generan rentas para quienes los explotan. Los países manejan la propiedad y explotación del petróleo de diversas maneras.

Por un lado, puede existir una empresa estatal, como en Arabia, Kuwait, Irak o México, que lleve a cabo toda la actividad, desde explotar el petróleo hasta generar rentas. Por el otro, existen empresas públicas, como en Brasil, Canadá, Colombia, Venezuela o Noruega, que conviven con empresas privadas encargadas de alguna etapa del proceso productivo. En otros países, como en los Estados Unidos, no existe la empresa estatal, o bien se ha privatizado y la propiedad estatal de los yacimientos debe coexistir con un régimen de concesiones privadas, como en la Argentina, Perú o Inglaterra. En definitiva, cualquiera sea el régimen de explotación, es fundamental observar cómo se reparte la renta obtenida por la explotación del recurso natural, teniendo en cuenta que varía según los precios y las condiciones geológicas del yacimiento.

El mercado internacional.

Para que sea rentable, la actividad debe estar bien administrada. Los precios internacionales y la valoración social que ha alcanzado el petróleo en los últimos años, lo convierten en "un recurso natural sumamente importante. Un país que carece del manejo de este recurso, no puede planificar un proyecto energético y, por lo tanto, un crecimiento industrial sostenido. La Argentina ha crecido económica e industrialmente en los últimos años, lo cual trajo una mayor demanda de consumo energético: La industria nacional se ha reestablecido y crece a ritmos importantes, por lo que necesita más energía para abastecerse. Pero esa energía, que antes aportaba YPF, ya no está disponible para el mercado interno.

Desde hace varios años, el sistema energético de la Argentina está al límite de su producción y la falta de obras que atiendan esa demanda puede paralizar la economía. Frente “ a esta situación, se hace necesaria la participación estatal pero, como el Estado ya no es propietario del recurso, está incapacitado para invertir en las áreas donde lo necesita. De todas maneras, puede participar de parte de las ganancias gracias a las regalías y manejar el precio interno de los combustibles. € Editorial Estrada S.A. Por otra parte, la actual administración en manos privadas ha generado una sobreexplotación de los yacimientos en producción, con escasa inversión en exploración, a pesar de los altísimos precios internacionales. Así, cae la producción, se agotan las reservas y resulta necesario importar petróleo, gas y derivados:

Las energías alternativas.

Además de las energías derivadas de los hidrocarburos, la Argentina se abastece de energía hidroeléctrica y nuclear, y de energías no tradicionales. La proporción que aporta cada una es: e Gas natural, 47% o Petróleo, 40% o Energía hidráulica, 6% o Energía nuclear, 2%. Otras fuentes: carbón, bagazo y leña, 5% La energía hidroeléctrica La energía hidroeléctrica es la más utilizada dentro de las energías limpias. La mayor parte de esta energía proviene de las centrales hidroeléctricas, especialmente de las represas de Salto Grande, el Complejo Alicopa (conformado por Alicurá, Piedra del Águila y Collón Curá) y Yacyretá, que abastecen a casi la totalidad del sistema.

Estas centrales están ubicadas a grandes distancias del Área Metropolitana de Buenos Aires, el mayor mercado consumidor. Por ello, la red de distribución de alta tensión es muy compleja. Durante muchos años, el sistema eléctrico tuvo un alcance territorial limitado. A partir de la creación del Sistema Interconectado Nacional (sin), se logró resolver el problema de conexión entre las zonas de producción de energía y las áreas de mayor consumo. Mediante este sistema, se distribuye casi la totalidad de la energía eléctrica producida en el país. Está compuesto por las centrales generadoras y las empresas de distribución y transmisión.

La energía nuclear.

A pesar de ser un tipo de energía muy debatido a nivel mundial, ya que los peligros de accidentes son muy grandes, la Argentina ha desarrollado energía nuclear para transformarla en 'electricidad. Actualmente, existen tres centrales: Atucha inaugurada en 1974, en la localidad de Lima, provincia de Buenos Aires, fue la y, primera central nuclear de América latina destinada a la producción de energía eléctrica. Atucha 1 también localizada en Lima, aunque comenzó a ser construida en 1981, sufrió varias interrupciones en las obras. La construcción de la central mejora la situación energética Embalse: ubicada en la localidad de Embalse Río Tercero, provincia de Córdoba, fue inaugurada en 1984.

La energía geotérmica.

Desde 1972, se planificaron estudios de prospección en la región de Copahue, provincia de Neuquén, con el propósito de evaluar la potencialidad energética de la zona. Además, se efectuaron algunos estudios en otras áreas del país, como Rosario de la Frontera (Salta), Farallón Negro (Catamarca) y el territorio de la provincia de Jujuy. Así, se individualizaron siete regiones, que presentaban las mejores condiciones para la instalación de infraestructura orientada al desarrollo geotérmico. El aprovechamiento de esta fuente de energía es muy bajo en comparación con las posibilidades técnicas que ofrece. Tal es así que la única instalación para la producción de este tipo de energía en el país se encuentra en el yacimiento de Copahue, y alimenta a las localidades termales y turísticas de Copahue y Caviahue. La biomasa Uno de los aprovechamientos de biomasa de mayor importancia está localizado en la provincia de Jujuy y se destina a la fabricación de carbón

vegetal para la industria siderúrgica. Este recurso se obtiene, fundamentalmente, a partir de plantaciones de eucaliptos.

Por su parte, las calderas de los ingenios azucareros utilizan el bagazo (residuo de la caña de azúcar) como fuente de energía. biomasa son consideradas energías no tradicionales Otros aprovechamientos son: El uso de leña a nivel doméstico en zonas rurales y semirurales. o El uso de residuos agroindustriales (torta de girasol, cáscara de arroz, etc.) en calderas para producir vapor. El uso de residuos de aserradero para generar energía en la industria de la madera. La generación de biogás en tambos.

La energía eólica.

A partir de la crisis petrolera de 1973, se inició en el país la investigación para desarrollar la energía eólica. Con la firma de un acuerdo de asistencia técnica con Alemania, se instaló el primer parque eólico, compuesto por cuatro aerogeneradores, conectados a la central térmica de la localidad de Rio Mayo, en el sudoeste de la provincia del Chubut. Posteriormente, algunas provincias, como Neuquén, Buenos Aires y Catamarca, se sumaron a estos proyectos e instalaron máquinas de pequeña potencia. A partir del año 1994, con la privatización del servicio eléctrico, varias cooperativas sumaron este tipo de energía. En Comodoro Rivadavia y zonas aledañas, así como en varias localidades de la provincia de Buenos Aires, se instalaron plantas generadoras.

Biocombustibles

La situación actual y perspectivas.

El desarrollo de los biocombustibles ha generado un debate a nivel mundial. Por un lado, se considera necesario reemplazar a los hidrocarburos como principal fuente de energía. Por el otro, la expansión de los biocombustibles requiere de tierras que deberían ser destinadas a la producción de alimentos., tres tipos de recursos: Biomasa tradicional: es utilizada en países subdesarrollados, principalmente en zonas rurales, Esta energía es neutra en emisiones de dióxido AT de carbono; Biomasa para generar electricidad: es empleada en países industrializados con elevados recursos forestales. Biocombustibles líquidos: actualmente, proporcionan energía equivalente a 20 millones de toneladas de petróleo. Los biocombustibles más utilizados son el etanol y el biodiésel, El Eletanol es empleado Si motores que utilizan nafta, mientras que el biodiésel se utiliza en motores con gasoil:

En la Argentina, la producción de biocombustibles viene creciendo de manera sostenida. Un informe de la Cámara Argentina de Energías Renovables señala que, en 2008, el país producía más del 10% del biodiésel del mundo; posicionándose como el tercer productor a escala global, con ventas estimadas en 1.500 millones de dólares. Los principales mercados de la Argentina son los Estados Unidos y la Unión Europea. Por su parte, el mercado interno de este combustible aumenta. De acuerdo a informes oficiales, en 2010, la Argentina demandó unos 600.000 metros cúbicos de biodiésel y 250.000 metros cúbicos de etanol. En este contexto, es importante la asociación entre la Argentina y Brasil. Ambos países mantienen acuerdos de investigación sobre este tema, ya que producen y comercializan biocombustibles. Bajo el Programa Cooperativo para el Desarrollo Tecnológico Agroalimentario y Agroindustrial del Cono Sur (Procisur), del cual también participan Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay, los Institutos Nacionales de Tecnología Agropecuaria (INTA) de cada país han realizado importantes avances en la materia

La energía solar.

En el país, la mayor parte de la población rural carece de servicio eléctrico. Ante ello, surgió el Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales (Permer), que busca garantizar el abastecimiento de electricidad a esa población, que alcanza a 1,8 millones de personas. Mediante este programa, se instalarán paneles solares, especialmente en instituciones públicas. El proyecto está ejecutándose en las provincias de Jujuy, Tucumán, Chubut, Río Negro, Mendoza, San Luis, Corrientes, Santiago del Estero, Chaco, Santa Fe y Córdoba.

La promoción estatal.

La desarticulación del sector energético en la década de 1990, que implicó la privatización y concesión de empresas públicas, como YPF, Gas del Estado, Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires (Segba) y centrales generadoras de energía, produjo una gran crisis. Cuando las nuevas empresas no cumplieron con los contratos firmados, el Estado debió intervenir en defensa de los usuarios mediante sus entes reguladores, como el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas).

A mediados de 2004, se produjo una caída de la oferta energética debido a la falta de inversiones de las empresas privadas. En consecuencia, el Estado tomó diversas medidas para superar la crisis, entre ellas: » La implementación de un plan para racionalizar el uso de energía, con la promoción de lámparas y artefactos domésticos de bajo consumo. e La suspensión del servicio eléctrico a las industrias que contaban con tarifa reducida. o La importación de derivados del petróleo, como el fuel oil, desde Venezuela. o La restricción de las exportaciones de crudo y gas a otros países. e La exploración de los fondos marinos en busca de yacimientos de petróleo. » La firma de un acuerdo con Brasil y Venezuela para la construcción de un gasoducto.

LA CONCENTRACIÓN DE INDUSTRIAS Y SERVICIOS.

“En la economía argentina, los sectores industriales y de servicios conforman una parte importante del ps: y de los puestos de trabajo. El proceso de industrialización se vio acompañado por el crecimiento de las grandes ciudades, que reforzaron la centralidad del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)”.

En la Argentina, la industrialización se inició luego de la década de 1930, aunque con anterioridad a esa década ya existían algunas actividades industriales destinadas al procesamiento de los productos agropecuarios, como los saladeros y frigoríficos. Estas actividades permitían mejorar los productos primarios para exportación. Pero el proceso de industrialización propiamente dicho comenzó luego de la crisis mundial de 1929, cuando los países centrales adoptaron medidas económicas proteccionistas, cerraron sus fronteras a las materias primas importadas y dejaron de exportar manufacturas.

A partir de ese momento, para reemplazar a las manufacturas que antes provenían del exterior y equilibrar la balanza comercial, la Argentina debió comenzar a producir manufacturas propias a partir de sus productos agropecuarios y minerales.. De esa manera, se inició a una etapa sustitutiva de importaciones, fuertemente influida por el contexto internacional. La industrialización por sustitución de importaciones se desarrolló en dos fases. En la primera, se fundaron industrias de bienes de consumo, es decir, destinados al mercado interno, hasta entonces caracterizado por la presencia de un pequeño grupo de familias ricas y una clase baja muy numerosa. Estas industrias fueron financiadas por la clase terrateniente, que aportó las ganancias obtenidas por las actividades agropecuarias.

La tecnología y el modelo productivo fueron importados desde Gran Bretaña. Así, se adoptó el fordismo, un sistema que ya estaba sufriendo modificaciones en su país de origen. Esta fase

industrial estuvo caracterizada por la tecnología simple y la mano de obra poco calificada. Hasta la década de 1940, los trabajadores industriales eran sobreexplotados, lo cual permitía acumular grandes ganancias a los empresarios. A partir de la aprobación de diversas leyes laborales, impulsadas por el legislador socialista Alfredo Palacios, el gobierno de Juan Domingo Perón promovió mejoras laborales que cambiaron la calidad de vida de los trabajadores urbanos y rurales, y generaron un mercado de consumo inexistente hasta ese momento.

Durante la Segunda Guerra Mundial, la Argentina debió comenzar a fabricar bienes de capital (maquinarias y equipamiento) ya que Europa y Estados Unidos restringieron sus exportaciones. El desarrollo de la industria pesada ayudó a evitar la dependencia respecto a las importaciones desde otros países. La segunda fase de industrialización se inició en la década de 1960. Bajo el modelo fordista, la producción de bienes de capital permitió el crecimiento de empresas nacionales y extranjeras. Las grandes industrias impulsaron el desarrollo de miles de pequeñas y medianas empresas (Pymes), que fabricaban insumos o bienes intermedios.

El rol del Estado entre 1930 y 1976.

En el país, se desarrollaron principalmente las industrias siderúrgica, petroquímica, metalmeccánica, textil, automotriz y alimentaria. Sin embargo, no lograron alcanzar el nivel de industrialización de los países centrales. En el período comprendido entre 1930 y 1976, el Estado fue un impulsor clave de la industrialización y creó una serie de empresas públicas que acompañaron el desarrollo industrial. Es el caso de Sociedad Mixta Siderurgia Argentina (Somisa), principal productora de acero, y Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), dedicada a la producción de petróleo y derivados. Además, el Estado impulsó la ampliación del mercado interno y, como consecuencia, el aumento de la demanda de bienes industriales.

Así, los trabajadores fueron capaces de adquirir productos a los cuales antes no tenían acceso. Las mejoras salariales y el bajo costo de los productos, especialmente de los electrodomésticos, contribuyeron a mejorar la calidad de vida de los trabajadores y al crecimiento progresivo de la “clase media”. El Estado acompañó ese crecimiento con planes de promoción industrial y crédito para empresas, y la creación de escuelas técnicas y universidades, y organismos oficiales, como el Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Asimismo, se desempeñó como intermediario entre los trabajadores, cada vez más sindicalizados, y los empresarios. Durante, este período, la instalación de una gran cantidad de industrias impulsó el traslado de población desde otras zonas del país. Muchos de estos migrantes internos habían sido expulsados del campo, donde se había iniciado un proceso de maquinización de las tareas rurales.

Las grandes fábricas demandaban obreros industriales. Así comenzaron a llegar miles de personas desde el campo, pueblos y ciudades pequeñas, y también desde los países limítrofes, atraídas por las ofertas laborales de las industrias locales. A raíz de este incremento de la población urbana, las ciudades crecieron en extensión y sumaron barrios periféricos, así como nuevas trazas para el transporte y los servicios públicos.

Estos barrios, llamados “barrios obreros”, muchas veces eran construidos por cooperativas, sindicatos o por el Estado mismo. La Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, junto a Córdoba y Rosario, sufrieron una gran transformación urbana, que permitió el asentamiento de estos nuevos pobladores. El denominado frente fluvial —la franja territorial que une San Lorenzo (Santa Fe) y La Plata (Buenos Aires)— se urbanizó al ritmo de la industrialización. Sin embargo, en muchos casos, este crecimiento fue absolutamente desordenado y sin planificación.

Así, aparecieron las llamadas "villas de emergencia", que nacieron como asentamientos precarios de viviendas transitorias o de emergencia. Sin embargo, por la falta de viviendas en las grandes ciudades, estas villas se convirtieron en lugares definitivos de residencia. Por ello, algunos gobiernos han intentado derribarlas, mientras que otros han contribuido a mejorarlas a partir del otorgamiento de títulos de tierra, la apertura de calles y la incorporación de servicios.

La concentración y extranjerización del sector industrial.

Desde el golpe militar de 1976, el sector manufacturero local perdió más de 20.000 establecimientos fabriles. De ese modo, entre 1976 y 1983, se produjo la caída del producto bruto del sector en un 20%, la disminución de la ocupación en un 40% y una reducción del 28% del peso relativo de la producción manufacturera en el conjunto de la economía. Estos impactos no fueron homogéneos en todos los sectores. Algunas ramas productivas pudieron escapar a este proceso de achicamiento, mientras que otras salieron beneficiadas.

Las Pymes fueron las menos favorecidas, mientras que las grandes empresas hasta pudieron estatizar sus deudas, es decir, fueron absorbidas por el Estado. Así, un número reducido de grupos económicos locales y extranjeros pudieron reestructurarse mediante una estrategia de integración y diversificación productiva. Con ayuda del Estado, se vieron beneficiados por políticas de promoción industrial, compras estatales, privatizaciones de empresas públicas y relaciones con el sistema financiero. En la década de 1980, los grupos empresarios favorecidos por la dictadura militar, siguieron obteniendo los mismos beneficios y continuaron acumulando capital.

La concentración económica se dio especialmente en las ramas. De bienes de uso intermedio, como celulosa y papel, cemento, petroquímica y siderurgia. A pesar de la ayuda estatal, se produjo un proceso de descapitalización del sector, es decir, no hubo inversión por parte de los empresarios. Sin embargo, algunas grandes empresas lograron exportar sus productos. En los años noventa, la política industrial del Estado siguió promoviendo la concentración y extranjerización. Entre los años 1991 y 1995, la concentración de la propiedad industrial estuvo asociada con una expansión de las empresas líderes, mientras que, durante los años 1995 a 1998, se relacionó con los cambios de propiedad centrados en la extranjerización del sector.

El plan de privatizaciones de empresas públicas llevado a cabo en esta etapa, tuvo como principales beneficiarios a los mismos grupos empresarios que habían sido favorecidos en las décadas anteriores. Así, nuevos operadores transnacionales y bancos extranjeros invirtieron en distintos sectores de la economía nacional. Dentro del sector industrial, las principales inversiones se dieron en las ramas alimentaria, petroquímica y automotriz. De esa manera, esta profundización de la concentración industrial castigó a muchas empresas medianas y pequeñas. Por ejemplo, entre 1993 y 1998, el PBI se expandió a un ritmo promedio anual del 4%, mientras que el sector manufacturero descendió del 18,2%, en 1993, al 17,1%, en 1998.

Durante esta década, se consolidó un tipo de industria asociada a la explotación de los recursos naturales, como la producción de alimentos y bebidas, y a los sectores asociados al poder, como la industria automotriz y la fabricación de ciertos commodities industriales (FIG. 1). El bajo desempeño del sector industrial en esta década estuvo ligado a la desintegración de la producción

fabril, iniciada durante la dictadura. La apertura a la importación de ese período implicó el cierre o la transformación de muchas empresas en ensambladoras de componentes importados,

Las ramas productivas industriales y de servicios.

De acuerdo a las actividades desarrolladas, las empresas pueden clasificarse en: Industriales: dedicadas a la producción de bienes a partir de la transformación y/o extracción de materias primas. A su vez, se clasifican en: o Extractivas: dedicadas a la extracción de recursos naturales. Manufactureras: transforman las materias primas en productos terminados y pueden ser productoras de bienes de consumo final o de capital. Agropecuarias o agroindustrias: realizan una primera transformación de las materias primas; generalmente se ubican cerca de las zonas de producción. » Comerciales: actúan como intermediarias entre el productor y el consumidor, y su función primordial es la compra-venta de productos terminados; pueden ser clasificadas en mayoristas o minoristas. Servicios: son aquellas que prestan un servicio a la comunidad, como servicios públicos domiciliarios (comunicaciones, energía, agua), servicios privados (administrativos, contables, jurídicos), transporte, turismo, instituciones financieras, educación, salud, entre otros.

De acuerdo al origen del capital y a quién las administre, se clasifican en: e Estatales: pertenecen íntegramente al Estado, quien las administra. o Públicas: pertenecen al Estado, aunque pueden estar administradas por privados; su finalidad es satisfacer necesidades sociales. Mixtas: implican la coparticipación entre el Estado y los privados para producir bienes y servicios. o Privadas: el capital es propiedad de inversionistas privados y su finalidad es obtener rentabilidad; según su propiedad, pueden ser nacionales o extranjeras. La Argentina produce una gran variedad de productos manufacturados. Las ramas industriales que producen mayor valor agregado son las que elaboran alimentos y bebidas, así como las que fabrican maquinarias y equipos, productos químicos, metales y productos elaborados con metales.

Los servicios públicos.

Desde la década de 1990, los servicios públicos fueron vendidos a empresas privadas para su administración. De todos modos, por las características de estos servicios y la necesidad de su funcionamiento permanente, el Estado cuenta con entes reguladores, que controlan a las empresas y los servicios que prestan. Entre estos entes, se encuentran la Comisión Nacional de Comunicaciones (cnc), la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), el Ente Nacional de Obras Hidricas de Saneamiento (Enohsa), el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) y el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA).

Las condiciones espaciales para la producción industrial.

Existen diversos factores para la localización industrial, relacionados principalmente con la cercanía a los mercados consumidores, las materias primas y la oferta laboral. En los últimos años, a medida que las empresas se especializaban, esa localización fue sumando otros factores. En este sentido, las industrias tecnológicas no siguen los mismos patrones de localización que una industria que elabora productos más sencillos, como muebles. El tejido industrial previo, la capacitación de los trabajadores, el acceso al mercado externo, la cercanía a universidades y centros de investigación, la red de comunicaciones, son elementos a evaluar a la hora de instalar una industria tecnológica.

La promoción del Estado, a través de la instalación de parques industriales o de reducciones impositivas, también constituye un factor importante para la localización industrial. En la Argentina, los factores de localización han variado, de acuerdo a la posición de la producción industrial frente al mercado mundial y el modelo adoptado (fordismo o toyotismo) (FIG. 2). Tradicionalmente, la localización industrial en el aAmba estuvo relacionada con diversas cuestiones, que explican la

concentración demográfica y económica, tales como: a) La presencia del puerto de Buenos Aires y la alta dependencia de los bienes importados (bienes de capital y materias primas). b) La distribución del sistema de transporte marítimo, fluvial y terrestre. c) La creación de una fuerte infraestructura de servicios (hospitales, escuelas, transportes urbanos, energía eléctrica). Así, la concentración de la actividad económica y la población consolidó un mercado local de consumo que, a su vez, atrajo a nuevas empresas.

Frente a esa concentración y ante la falta de políticas de descentralización, en la década de 1960, el 34% de la población, que representaba el 54% de los puestos laborales industriales, vivía en el AMBA, De los 19 partidos del AMBA, 13 podían considerarse industrializados.

En la misma década, fuera del AMBA, el proceso industrial se hacía fuerte en: 1. El área territorial conformada por Tandil, Olavarría y Benito Juárez, en la provincia de Buenos Aires, especializada en industrias metálicas" y de minerales no metálicos. 2. Un grupo de departamentos en el norte y el sur de la provincia de Mendoza, especializados en la industria agroalimentaria. 3. Una gran área territorial entre Córdoba y Santa Fe, productora de alimentos, maquinarias y equipos, y productos de metal, 4. Los partidos de Rawson y Viedma, en la provincia del Chubut.

El Rol del Estado en la promoción industrial

En la Argentina, las políticas de promoción industrial comenzaron durante la década de 1940. Estas políticas apuntaron a fomentar el desarrollo industrial en distintas zonas, a partir de la promoción regional, e incentivar un tipo de industria en particular, mediante la promoción sectorial. Inicialmente, esta política fue implementada a través de la protección arancelaria para bienes de consumo. Posteriormente, a fines de 1950, la promoción industrial sectorial apuntó a grandes proyectos de las industrias siderúrgica, petroquímica, automotriz, y de celulosa y papel. Ya en esa época, comenzó a registrarse una fuerte tendencia hacia un modelo de organización territorial excesivamente concentrado.

La primera política orientada a la desconcentración se aplicó en 1964, mediante la cual se excluía de los beneficios promocionales a la Capital Federal y el Gran Buenos Aires. Así, se favorecía la promoción de aquellos sectores que elaboraban productos a partir de materias primas regionales. Siguiendo esta política, en 1973, se prohibió la localización de nuevas industrias en la Capital Federal. El gobierno militar y el de Raúl Alfonsín siguieron con la misma política. Ambos alentaron el desarrollo regional con la instalación de industrias en el interior del país y a través del fomento de nuevas actividades industriales en áreas de fronteras. A mediados de 1980, las políticas vigentes impulsaron la industrialización en las provincias de La Rioja, San Luis, Catamarca, San Juan y Tierra del Fuego. De esa manera, se aplicaron beneficios sectoriales y territoriales.

El régimen de promoción industrial-sectorial se basó en la exención de aranceles, beneficios tributarios para la industria y los inversionistas, beneficios adicionales para la exportación y restricciones temporarias para las importaciones de bienes competitivos. En cambio, la promoción industrial territorial solo ofreció exenciones arancelarias y beneficios tributarios para la industria y los inversionistas. En el caso de Tierra del Fuego, también se sumaron beneficios para la exportación, así como otros beneficios para las compras y ventas realizadas en el territorio continental.

El proceso de industrialización en San Luis, La Rioja, Catamarca y Tierra del Fuego comenzó a ser registrado a partir del censo económico de 1984. Posteriormente, otros estudios han mostrado que, en general, las pequeñas y medianas empresas se acogieron al régimen de promoción regional o territorial, mientras que las grandes empresas prefirieron la promoción sectorial. Además, un aspecto positivo de estos regímenes fue la descentralización industrial, aunque con un alto costo

fiscal. Por eso, los resultados a largo plazo de la promoción industrial están en duda. Actualmente, solo el 14% de la mano de obra industrial total se localiza en territorios de nueva industrialización”, mientras que un 56% se ubica en los territorios de “antigua industrialización”

Los grandes grupos económicos.

Varias empresas de origen argentino crecieron durante el modelo de industrialización - por sustitución de importaciones, mientras que otras lo hicieron a partir de la última dictadura militar.

En muchas ocasiones, el Estado, como promotor, ha beneficiado a ciertos grupos económicos locales y extranjeros. Del mismo modo, las empresas contratadas por el Estado para realizar obras de infraestructura, como rutas, escuelas o represas hidroeléctricas, muchas veces se han enriquecido a partir de esos contratos.

Estos grandes grupos económicos participan en actividades diversificadas, es decir, tienen negocios en varios sectores de la economía, como la producción agropecuaria, extractiva, financiera y manufacturera. En cambio, ha sido escasa su participación en la industria y las exportaciones metalmeccánicas, donde las empresas extranjeras son más numerosas. Si se tiene en cuenta la participación de los distintos tipos de empresas en la producción industrial y las ventas, se desprende que, dentro de las 200 firmas industriales más grandes del país, los grandes grupos económicos nacionales pasaron de tener 34 empresas, en 1976, a 56, en 1983. Por otra parte, las firmas nacionales que no pertenecían a estos grandes grupos, se redujeron de 56 a 44.

Además, se han identificado 33 grandes grupos económicos nacionales, que poseían 665 empresas, y 29 empresas extranjeras con actividades diversificadas en el país, que tenían 426 firmas entre los años 1986 y 1987. Gracias a la diversificación de las actividades, los grandes grupos económicos y algunas empresas extranjeras pudieron seguir obteniendo grandes ganancias a pesar de los vaivenes y las sucesivas crisis de la economía argentina. También, han logrado acceder a financiamiento internacional y local,

Las empresas multinacionales argentinas.

Desde fines del siglo XIX, las empresas argentinas más tradicionales han sido las primeras en invertir en el exterior. Empresas como Alpargatas, Bunge & Born, Siam Di Tella, Quilmes y Águila-Saint, fueron pioneras por su presencia en varios países de América latina. Posteriormente, se sumaron Techint, YPF, Pérez Companc, Arcor, Bagó e IMPSA, entre muchas otras. Hacia la década de 1970, la presencia argentina en los países emergentes era muy importante. En la década de 1980, la crisis de la deuda redujo esta participación, que se vio opacada por las inversiones asiáticas. La situación volvió a cambiar hacia 1990, como resultado de la estabilización, el crecimiento y las reformas económicas llevadas adelante en la Argentina, que consolidaron el crecimiento de grandes grupos económicos locales.

La crisis de 2001 generó una breve interrupción en los flujos de inversiones, tanto entrantes como salientes, pero, hacia 2003, estos flujos volvieron a crecer. La Argentina sigue siendo un receptor de inversión extranjera directa (IED). Sin embargo, las empresas argentinas han ampliado sus inversiones en el exterior, a tal punto de pasar de alrededor de 6.100 millones de dólares, en 1990, a 21.100 millones, en 2000, y 26.900 millones, en 2007. De esa manera, la Argentina es uno de los principales inversores externos de América latina, por debajo de Brasil y México, y casi al mismo nivel de Chile.

Las estrategias para entrar a los mercados internacionales son, principalmente, la compra de empresas locales y el joint venture, tal como se conoce a la asociación con compañías locales. Los sectores de la economía donde invierten las empresas multinacionales argentinas son, principalmente, las industrias de metales básicos, alimentos, productos farmacéuticos, ingeniería civil y producción agropecuaria. También se invierte en sectores más dinámicos, como la producción electrónica y química, los servicios de tecnología de la información, la recolección y el tratamiento de residuos, y las actividades de investigación y desarrollo.

El peso del sector de servicios en el PBI.

Los servicios comprenden una cantidad de actividades que satisfacen múltiples necesidades de la población. A nivel internacional, es un sector en pleno crecimiento y, en la actualidad, genera la mayoría de los puestos de trabajo. A su vez, es una parte muy importante del Par. En el caso de la Argentina, este sector aporta dos tercios del ingreso nacional. Por eso, en los últimos años, se lo ha señalado como el principal motor de crecimiento de la economía nacional. El segundo lugar lo ocupó la industria manufacturera, con un 19,6%.

Para el Indec, los servicios pueden clasificarse de la siguiente manera: Servicio de hotelería y restaurantes. Servicios anexos de transporte. Servicios de agencias de viaje. Servicios inmobiliarios. Alquiler de equipos de transporte. Servicios informáticos y actividades conexas. o Investigación y desarrollo. Servicios empresariales NCP (no clasificados previamente). Enseñanza. Servicios sociales y de salud. Eliminación de desperdicios y aguas residuales, saneamiento y servicios similares. Servicios de esparcimiento, y servicios culturales y deportivos. Servicios NCP.

Los sectores de mayor crecimiento.

Además de los servicios, el comercio mayorista, minorista y exterior, junto al sector de transporte, son parte de las actividades terciarias. Al incrementarse los ingresos de la población, aumenta la demanda de servicios, ya que la capacidad de compra es mayor. Según un informe de 2011 de la Cámara de Comercio de la Argentina, entre 1993 y 2010 el valor agregado generado por el sector de comercio y servicios dentro de la economía argentina se incrementó un 82%; es decir, su crecimiento anual fue del 3,6%.

De esta manera, fue el sector de la economía de mayor crecimiento y aumentó su participación en el PBI año tras año. Para 2010, llegó a representar el 67,3% de la actividad económica. Entre estos años, los sectores más dinámicos fueron los de transporte, almacenamiento y comunicaciones, que crecieron al 6,8% promedio anual, con un acumulado de 207%. Otro rubro importante fue el de las finanzas, que acumuló un 139%. Por su parte, el comercio tuvo un alza del 66%. Dentro del rubro comercio, el mayorista y minorista crecieron un 20,6%, seguido por las actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler, con un 17,9%.

La dispersión territorial de los servicios.

La concentración de los servicios se da en las ciudades, y son precisamente aquellas ciudades más grandes las que ofrecen una mayor variedad y complejidad de servicios. El AMBA es el área que reúne más servicios y donde la actividad comercial es mayor, debido a la concentración poblacional. La provisión de servicios públicos de calidad sigue siendo muy desigual en el territorio argentino. Por ejemplo, los servicios de electricidad son los más desarrollados, mientras que el de

gas natural es el más escaso. La infraestructura necesaria para la provisión de estos servicios es muy dispar y no abastece por igual a toda la población urbana.

Las ciudades más grandes son las que presentan una mejor instalación de redes de agua potable y saneamiento, aunque importantes zonas del AMBA aún no cuentan con estos servicios. Muchas veces, la baja densidad y dispersión de población influye en la presencia de servicios de salud y educación, así como culturales y de seguridad, transporte, comercio y ocio. Para analizar la distribución de los servicios y el comercio por regiones, es necesario relacionar esta distribución con el conjunto de las actividades económicas de cada provincia. Por ello, el extremo superior de la actividad terciaria lo ocupa la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde el sector de servicios genera el 78,2% del pbi. Dentro de este total, se destacan los servicios financieros, con un 13,3%.

Por otra parte, las provincias de Río Negro y Chaco también cuentan con altos porcentajes de su PBI representados por el sector de servicios. Muchas veces, esta situación es favorecida por la ausencia de otras actividades productivas. En el otro extremo, se ubica, por ejemplo, la provincia del Neuquén, donde el sector de comercio y servicios contribuye con solo el 34% del PBI.

En esta provincia, la actividad minera tiene un peso superior al 50% del producto provincial, Por su parte, en la provincia de Buenos Aires, el comercio y los servicios generan el 59,9% del PBI. El rubro de servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler conforma el 15,4% del valor agregado provincial. El área de transporte, almacenamiento y comunicaciones constituye el 13,49%, seguida por el comercio mayorista y minorista, con un 12,1%.

Los nuevos servicios avanzados y especializados.

A partir del avance de la economía global, dentro del sector de servicios se ha generado un nuevo rubro de servicios avanzados o especializados, que conforman la llamada actividad cuartaria. La economía global se organiza en torno a nodos de comando y control, capaces de coordinar, innovar y gestionar las actividades de las empresas que se encuentran en red. Esta nueva forma de operación de las empresas a nivel mundial, hizo necesaria la aparición de servicios renovados para atender a sus nuevas demandas.

Como señala el sociólogo español Manuel Castells, los servicios avanzados son aquellos que atienden a las empresas en rubros como finanzas, seguros, inmobiliaria, consultoría, servicios legales, publicidad, diseño, mercadotecnia, relaciones públicas, seguridad, reunión de información y gestión de los sistemas de información, sistema de telecomunicaciones, hoteles de lujo con servicios de asistencia secretarial en inglés e infraestructura tecnológica, pero también investigación y desarrollo (I+D), ya que la innovación científica es el motor de los procesos económicos actuales.

Los servicios avanzados se han desarrollado especialmente en las grandes ciudades. Si bien no todas las ciudades del mundo son centros dominantes de la economía global, pueden conectar a una gran cantidad de población a ese sistema global. También, funcionan como polos de atracción de inversiones de capital. En la Argentina, las principales ciudades, especialmente Buenos Aires, Córdoba y Rosario, actúan como nodos de control y gestión de las actividades económicas. Por ello, también organizan la producción de los servicios avanzados requeridos para gestionar los nuevos negocios empresariales. Funcionan como nodos de la economía global y concentran las funciones superiores de dirección, producción, gestión y control de los medios de comunicación.

A su vez, por la presencia de estos servicios, las ciudades están conectadas a la red de ciudades del mundo, donde circulan las inversiones, la información, la tecnología y las ideas. Las ciudades se convierten en centros de producción y, a su vez, en centros de consumo de servicios avanzados. Además, se han transformado para desarrollar estos servicios especializados. En estas

ciudades, así como en otras ciudades de la Argentina, las operaciones de servicios y las inversiones han aumentado drásticamente, aunque también lo hizo la desigualdad en la concentración de recursos. Así, las nuevas actividades se concentran en polos específicos e incrementan la disparidad entre esos polos urbanos y sus respectivos entornos.

Por otro lado, estas ciudades han comenzado a desempeñar cuatro nuevas funciones y a destacarse como: e Puestos de mando altamente concentrados en la organización de la economía mundial. Emplazamientos clave para las finanzas y las firmas de servicios especializados. Centros de producción e innovación. Mercados para los productos y las innovaciones.

La relocalización en las ciudades intermedias.

En la Argentina, existe una relocalización de ciertos servicios, como los servicios educativos, comerciales, de entretenimiento y de consumo, en las ciudades intermedias del país. Estas ciudades son aquellas que cuentan con una población que va de 50.000 a 500.000 habitantes. Por otro lado, se refuerza la centralidad de los servicios avanzados. A nivel mundial, los servicios, en general, y los servicios avanzados, en particular, están dispersos y descentralizados en la periferia de las áreas metropolitanas, o en regiones y países menos desarrolladas. Algunas ciudades argentinas son un escenario fundamental para la economía global.

Para la localización del sector de servicios, resulta fundamental la proximidad al mercado de mano calificada y altamente calificada (profesionales creadores de conocimiento y tecnología), y al mercado de empresas y organismos estatales, que serán los compradores de estos servicios. Así, la localización de las nuevas industrias está regida por factores que apuntan a minimizar la incertidumbre y los riesgos.

Por ello, prefieren un lugar donde exista un mercado de trabajo acorde a la actividad, un mercado para sus productos, personal con la capacitación adecuada, tejido industrial previo y, por último, infraestructura y servicios avanzados y especializados que apoyen a la actividad.

En este sentido, en las ciudades de Buenos Aires, Córdoba y Rosario, se han creado las Bolsas de Subcontratación Industrial, que funcionan como un banco de datos sobre las empresas disponibles para la subcontratación por parte de grandes firmas.

LAS CONSECUENCIAS DELAS POLÍTICAS NEOLIBERALES.

En la década de 1990, la Argentina continuó el proceso de transformación económica, política y social que se había iniciado con la última dictadura militar. La profundización de las políticas neoliberales sumió al país en un contexto de inactividad productiva, pobreza y desempleo, que estalló finalmente con la crisis de 2001.

El proceso de consolidación del capitalismo en la Argentina tuvo consecuencias políticas, económicas, sociales y territoriales. Fundamentalmente, la dictadura militar que se inició en 1976 fue la que llevó adelante este proceso de grandes cambios. Uno de ellos fue la transformación del Estado de Bienestar en un Estado neoliberal. Esto implicó el fin del rol del Estado como planificador de la economía, así como el traspaso de empresas públicas a manos privadas. El gobierno de Carlos Menem (1989-1999) continuó profundizando las políticas neoliberales, en base a las exigencias de los organismos internacionales.

Al asumir su gobierno, Menem impulsó la aprobación de las leyes de Reforma del Estado, Emergencia Económica, Desregulación de la Economía, Flexibilización Laboral y Convertibilidad.

Estas leyes abrieron varios procesos, tales como: 1. Apertura de la economía nacional: el ingreso de productos industriales importados impactó en la industria manufacturera nacional, que no pudo sostener la competencia en los costos, lo cual derivó en el cierre de muchas fábricas. Por otro lado, se orientó la economía hacia la exportación de bienes de origen primario. 2. Flexibilización de las condiciones de trabajo: hubo un cambio en la seguridad laboral con respecto a las condiciones de contratación y los derechos sindicales.

Entre otras medidas, se redujeron las indemnizaciones por despido y los costos laborales para los empleadores, y se ampliaron los períodos de prueba. Desde entonces, el Estado actúa como mediador en conflictos laborales y en las relaciones entre trabajadores y empresarios. 3. Plan de privatizaciones: se privatizaron o concesionaron diversos servicios públicos, como telecomunicaciones, servicios domiciliarios, energía, transportes, caminos, servicios financieros, sistema previsional, etcétera. De ese modo, llegaron al país importantes inversiones extranjeras, que compraron las empresas públicas a muy bajo costo y con grandes beneficios, ya que, gracias a la Ley de Convertibilidad, se convirtieron en empresas monopólicas y con tarifas dolarizadas. En ese proceso, el Estado redujo su personal en más de 500.000 trabajadores, que fueron despedidos o se plegaron a un plan de retiro voluntario. 4. Transferencia de servicios públicos a las provincias: se transfirieron los servicios educativos, de salud y ferroviarios de pasajeros, entre otros, a las provincias. De esa manera, las provincias también afrontaron un problema, ya que no obtuvieron ayuda económica del Estado nacional para su financiamiento. 5. Disminución del gasto público: se cerraron una serie de organismos que contribuían a la planificación de la economía y el asesoramiento de los productores, como la Junta Nacional de Carnes, que regulaba esa producción.

Las privatizaciones.

Las opiniones de la sociedad en torno a las privatizaciones fueron diversas. Si bien una parte de la población estaba convencida del mal funcionamiento de las empresas del Estado, esta cuestión fue amplificadas con la intención de generar malestar en los usuarios y que el traspaso a manos privadas fuese menos conflictivo. En este sentido, desde los medios de comunicación se instaló la idea de que el Estado era un mal administrador y que sus empresas generaban pérdidas. Por ello, las críticas al proceso de privatización apuntaron a cuestiones como la modificación de las condiciones pactadas, la ausencia de marcos regulatorios y la inacción del Estado ante la falta de cumplimiento de las empresas.

Más tarde, algunos análisis sobre las privatizaciones mostraron los efectos que tuvo este proceso. Por ejemplo, un informe realizado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), señaló que hubo fuertes aumentos en las tarifas, como en el gas natural, del 149%, o en el servicio telefónico, del 124,4%, lo que les permitió a las empresas adjudicatarias elevar su rentabilidad por encima de las ganancias que obtenían en sus países de origen. Así, en el año 2000, Repsol, que un año antes había comprado a la petrolera YPF, registró en España un margen de rentabilidad sobre las ventas del 5,3%, mientras que, en la Argentina, obtuvo una tasa de ganancia del 14,2%.

En el caso de Telefónica y Telecom, el margen de rentabilidad obtenido fue casi tres veces mayor que el del grupo de las diez operadoras de telecomunicaciones más importantes del mundo. Muchas de las empresas privatizadas eran estratégicas para el desarrollo económico del país. Así, el Estado perdió poder de decisión y planificación.

La regresividad social y la concentración económica.

Durante la década de 1990, la brecha social, el desempleo y la pobreza alcanzaron valores históricos. Al igual que los empleados públicos luego de las privatizaciones, miles de trabajadores industriales quedaron sin trabajo. Los índices de desocupación alcanzaron al 20% de la población económicamente activa (PEA), y quienes aún conservaban el trabajo, contaban con ingresos que los colocaban por debajo de la línea de pobreza, con condiciones laborales muy precarias y sin políticas sociales que reemplazaran a los derechos laborales perdidos.

Por otra parte, existió un proceso paralelo de extranjerización de la economía y concentración de la propiedad industrial y agropecuaria. Las inversiones extranjeras se dieron particularmente en la región pampeana (43%) y en el AMBA (25%), por lo que las economías regionales volvieron a quedar relegadas y, algunas de ellas, sumergidas en la falta de accesibilidad por la pérdida de la conexión ferroviaria. Las inversiones extranjeras se orientaron a la compra de empresas públicas en áreas de actividades conocidas. En otros casos, apuntaron a la concesión de empresas o servicios públicos, para ingresar a mercados proveedores de algún insumo clave para sus principales producciones.

Otros capitales, en cambio, priorizaron una estrategia de diversificación de sus actividades hacia diferentes servicios privatizados con poca vinculación entre sí. Hasta 1994, las inversiones se centraron en las privatizaciones de empresas públicas y, desde 1995, se orientaron a las industrias automotriz y alimentaria, hipermercados y entretenimientos, y recursos naturales, como minería, agricultura, ganadería y forestación.

Las discusiones sobre la implementación de políticas neoliberales.

En la actualidad, la mayor parte de la sociedad habla de las consecuencias negativas de la implementación de las políticas neoliberales durante la década de 1990. Sin embargo, en ese entonces, las voces contrarias a esas políticas eran muchas menos. Los oficialistas consideraban que seguir las directivas del “Consenso de Washington” era lo más provechoso para el país.

El Consenso de Washington fue un documento donde se expresaron diez medidas que los países centrales, bajo recomendación de los organismos de financiamiento internacional, sugerían implementar a los países emergentes para controlar las crisis. Estas medidas se centraban básicamente en la gestión privada de los medios de producción, la liberalización de los mercados y la inserción de las economías emergentes en el comercio mundial.

El fracaso de las medidas recomendadas por el Consenso de Washington se hizo evidente durante la crisis económica, política y social que atravesó la Argentina a partir de diciembre de 2001. Sin embargo, los defensores de esas políticas sostienen que la crisis no se dio por los efectos de esas medidas, sino por la incapacidad de los gobiernos para generar un crecimiento económico sostenido. Estos economistas opinan que los gobiernos solo tuvieron en cuenta algunas de las medidas sugeridas y que la implementación no siempre ha sido adecuada.

Sin embargo, otros economistas que han apoyado estas recomendaciones, hoy sostienen que esos consejos estaban equivocados y que se debió prestar atención a cuestiones como la inestabilidad de los mercados internacionales, el desarrollo de otros sectores de la economía (además de las exportaciones) y, fundamentalmente, la inclusión social y laboral como base de la democracia y el desarrollo equilibrado.

El fenómeno de la desocupación.

Durante la etapa de industrialización por sustitución de importaciones, la Argentina fue un país que integró a su PEA al mercado laboral. A diferencia de lo ocurrido en otros países

latinoamericanos, en esta etapa creció la clase media, como un reflejo del mercado interno en desarrollo. El empleo formal era muy elevado y el empleo informal, bastante reducido. Las exportaciones se vieron afectadas por el proteccionismo de los países centrales. Por ello, las ganancias de los capitalistas dependían, en gran parte, de la venta de bienes en el mercado interno.

De esa manera, las ganancias estaban estrechamente relacionadas con la capacidad de consumo de los trabajadores, para lo cual era fundamental que los salarios fuesen altos. Por el contrario, a partir de la dictadura militar de 1976 y el plan económico de apertura de mercado, una parte de la producción se destinó a la exportación y al consumo de los sectores más altos. Así, como era más conveniente colocar los productos en el exterior, el mercado interno se fue dejando de lado. Además, el salario de los trabajadores se transformó en una parte del costo de producción, por lo que debía reducirse si se deseaba obtener una mayor rentabilidad.

Por lo tanto, la apertura económica y el dismantelamiento de la estructura productiva industrial significaron una reducción en el empleo, especialmente en el sector manufacturero. Entre los años 1976 y 1982, la tasa de empleo se redujo un 5,5% y los salarios cayeron un 32,8%. Los primeros años de la democracia no lograron reactivar la economía ni el empleo. El país se encontraba muy endeudado y los productos de exportación tenían un bajo precio en el mercado internacional. Hacia fines de la década de 1980, se produjo una crisis hiperinflacionaria, que continuó hasta la implementación del Plan de Convertibilidad, en 1991. Este plan de conversión de la moneda argentina reactivó el ingreso de capitales. Pero, en 1995, se produjo una crisis en México, conocida como “efecto tequila” que llevó al retiro de los inversores internacionales de los países emergentes. De esa manera, se contrajo nuevamente la economía y volvieron a surgir problemas de empleo. Así, disminuyó el ingreso de nuevos trabajadores a la PEA y se perdieron puestos de trabajo, principalmente de tiempo completo. En esos años, la desocupación alcanzó por primera vez los dos dígitos: 13%, en octubre de 1994, y 17,3%, en el mismo mes de 1995,

La precarización de los empleos.

Con la Ley de Flexibilización Laboral, se intentó frenar el desempleo a partir de la reducción de los costos laborales. Esta medida no contribuyó a generar nuevos empleos, sino que, por el contrario, precarizó la situación de los empleados. Además, los altos niveles de desempleo condujeron a una reducción de los salarios de los trabajadores. Durante la primera mitad de la década de 1990, los salarios se habían recuperado; sin embargo, en la segunda mitad, se redujeron notablemente. De esta manera, el bajo nivel de ingresos de los cada vez más numerosos trabajadores precarios y empleados informales, la falta de cobertura de salud, la pérdida de aportes previsionales y el desempleo, comenzaron a ser vistos como un “problema social”. Así, la pobreza comenzó a asociarse al desempleo.

Entre 1998 y 2002, se desató la mayor crisis económica de la Argentina, conocida como la crisis de 2001. Los años de sobrevaluación del peso condujeron a la falta de competitividad de los productos argentinos y, por lo tanto, a la reducción de la demanda de mano de obra. Luego de la crisis de 2001 y a partir de la devaluación de la moneda, la economía volvió a ser competitiva. Por las bajas tasas de interés, los capitales volvieron a invertir en actividades productivas. De esa manera, entre 2002 y 2006, la economía creció un 40%, con una expansión del sector manufacturero de casi el 52%. El tipo de cambio permitió la expansión de muchos sectores industriales, que tenían una alta demanda de mano de obra, lo cual generó la recuperación del empleo. Los salarios comenzaron a crecer, gracias a los altos rendimientos de los sectores productivos, los bajos costos laborales y las políticas públicas, como el llamado a paritarias, que atendieron las demandas de los trabajadores.

La situación social luego de la crisis de 2001.

En 1999, Fernando de la Rúa fue elegido presidente y decidió sostener el Plan de Convertibilidad implementado durante el gobierno anterior. Por ello, no pudo revertir la situación económica y social heredada. Aunque la inflación estaba controlada, el costo de vida aumentaba y los salarios perdían su capacidad de compra. En 1998, Brasil había devaluado su moneda, lo cual provocó que una gran cantidad de empresas dejaran de operar en ese país y se trasladaran a la Argentina. Sin embargo, a principios de diciembre de 2001, el sistema financiero colapsó. La paralización de las actividades productivas, que llevaron a la pobreza e indigencia al 50% de la población, generaron un estallido social a partir del 19 de diciembre. Esta protesta masiva de la población fue conocida como el “cacerolazo” y contó con una fuerte presencia de la clase media, que salió a la calle a pedir por la devolución de sus ahorros capturados en los bancos.

El 20 de diciembre, en medio de violentas protestas en varias ciudades del país, el presidente De la Rúa debió abandonar su cargo. Luego de la crisis, una gran parte de la sociedad quedó sumergida en el desempleo y la exclusión social. El presidente reemplazante, Eduardo Duhalde, decidió entregar bonos a los ahorristas, devaluar la moneda e iniciar un intento de recuperación de la actividad productiva. Desde el Estado, se implementaron una serie de planes de ayuda social, como el Plan Jefes y Jefas de Hogar, que buscaron contener la situación social extrema. Ante la crisis y el hambre, millones de personas iniciaron emprendimientos de distinto tipo, que significaron una solución transitoria para muchas familias. De esta manera, se crearon cooperativas, huertas comunitarias y hogares que brindaban ayuda y asistencia alimenticia a chicos y ancianos de los sectores más vulnerables. Paralelamente, creció la protesta callejera como modo de reclamo y lucha. Así, nacieron muchos movimientos sociales, con diferente origen y objetivos. Además, el sistema educativo fue un gran sostén para muchísimos niños, que asistían a los comedores donde, muchas veces, recibían la única comida diaria.

La crisis en localidades grandes e intermedias.

Las grandes ciudades del país concentran a la mayor parte de la población. Allí, los problemas económicos, de desempleo y de pobreza resultan más alarmantes. Por su parte, según los últimos tres censos, las ciudades intermedias fueron las de mayor crecimiento, ya que las ciudades más grandes dejaron de ofrecer oportunidades laborales para aquellas personas provenientes de ciudades pequeñas y pueblos. A través de la firma del llamado Pacto Fiscal Federal, en agosto de 1992, el Estado nacional transfirió los servicios de salud, educación y ferroviarios a los Estados provinciales. Al mismo tiempo, transfirió inmuebles y tierras fiscales de su propiedad. Esta política profundizó aún más las diferencias regionales existentes en el país.

Las regiones más pobres, como el NOA y el NEA, que se habían sostenido a través de políticas federales, debieron afrontar nuevos gastos sin ayuda nacional. A partir de 1992, los Estados provinciales comenzaron a realizar reformas similares a las del Estado nacional, a partir de la privatización de empresas públicas y el traspaso de muchas funciones provinciales a los gobiernos municipales. La finalidad central de estas reformas era transformar a los municipios, que ya administraban la mayor parte de los servicios públicos, en promotores del desarrollo urbano y territorial. De esa manera, la crisis de 2001 llegó a ciudades grandes e intermedias de provincias que contaban con escaso apoyo del Estado nacional. Por lo tanto, la recesión económica, el desempleo y la pobreza afectaron especialmente a las ciudades de las regiones más pobres.

La crisis en las grandes empresas y las Pymes.

Durante el período que se inició con la crisis de 2001, las diferentes empresas radicadas en la Argentina actuaron de distintas formas. Las posibilidades de superar la crisis para las grandes empresas y las Pymes eran diferentes. Algunas grandes empresas llegaron a posicionarse de manera mucho más ventajosa que antes del año 2001. Por un lado, los directivos de empresas multinacionales veían un clima de amenaza en la Argentina. Por tal motivo, decidieron sostener una conducta conservadora, que implicaba no innovar ni arriesgar sus recursos. Por otro lado, los empresarios locales percibieron el momento como una oportunidad para constituir nuevos negocios y ganar participación en el mercado. Asimismo, estas dos posturas diferentes frente a la crisis generaron resultados distintos al finalizar esta etapa. Mientras que muchas empresas globales se perdieron capacidad regional, algunas compañías locales ganaron mercado en áreas antes inimaginables.

En general, las firmas locales eran personalistas o, principalmente, familiares. Luego de la crisis, muchas empezaron a trabajar con equipos y un mayor nivel de profesionalización, para buscar el crecimiento en las ventas a mediano plazo, mientras que las empresas multinacionales exigían ganancias y resultados a corto plazo. Así, en estos años, se cerraron más empresas de las que se abrieron. No obstante, hacia 2005, esta tendencia se revirtió, con un crecimiento mayor de firmas locales que multinacionales. Uno de los aspectos más novedosos del período 2003-2006 fue la gran diversificación sectorial. Algunos sectores que, en la década pasada, sufrían severas crisis o directamente eran incapaces de generar actividad en el país, pasaron a liderar la creación de nuevas empresas.

Las políticas públicas ante la crisis.

El aumento de la pobreza provocó que muchas personas tuvieran que administrar lo poco que tenían para sobrevivir. Fue en este contexto que surgieron, por ejemplo, los llamados Clubes del Trueque. El objetivo de estos centros de encuentro era el intercambio de bienes y servicios, sin más motivo que la imposibilidad de adquirirlos mediante la moneda corriente. Del mismo modo, otro sector de la sociedad, que se encontraba en peores condiciones, optó por recuperar objetos de los residuos de otras personas y venderlos para su reciclado. Este fenómeno mostró lo peor de la crisis. Personas y familias enteras en busca de alimento, cartones, botellas y cualquier material posible de vender, era una imagen que se repetía en los barrios de clase media y alta de las principales ciudades. A estas personas se las llamó “cartoneros” y, debido a su crecimiento en número, el Ferrocarril Mitre habilitó el llamado “Tren Blanco” una formación adaptada para el transporte de los carros recolectores.

En diferentes etapas de la historia de la Argentina han existido diversas crisis, sin embargo, la crisis de 2001 impactó en más de la mitad de la población. La existencia previa de planes sociales no logró abarcar la totalidad y la complejidad de las situaciones sociales que se generaron. Así, luego de la crisis, el Estado debió reforzar los planes que ayudaran a la alimentación, la salud, la vivienda, la educación y el empleo, en los sectores sociales más afectados. Estos planes apuntaban a sostener, de algún modo, a las personas y familias en situaciones más vulnerables. Si bien estos planes son pensados para paliar una situación puntual, muchas veces no llegan a atender las necesidades de los más perjudicados por tal situación. Por otra parte, los planes no generan una salida a la situación de emergencia y, por lo tanto, la asistencia perdura en el tiempo.

LOS BIENES COMUNES, EL SUELO Y LOS BOSQUES.

“A lo largo del tiempo, los bienes comunes han sido objeto de una constante apropiación privada. La Argentina no escapó a este proceso: los suelos y los bosques —dos de los bienes comunes más importantes— fueron valorados para diversas actividades económicas. Sin embargo, las formas dominantes de explotación de estos bienes no han tenido en cuenta los tiempos de recuperación”.

Los bienes comunes se definen como aquellos bienes producidos, transmitidos o heredados por una comunidad. Su uso es colectivo y tanto los beneficios como los perjuicios que derivan de su utilización son compartidos por todos. Estos bienes pueden ser sistemas naturales o culturales. En el caso de los sistemas naturales, algunos de los bienes comunes son el agua, el aire, el suelo y la información genética contenida en plantas y animales. Los sistemas culturales, en cambio, son el producto de las acciones llevadas a cabo por una cultura en una sociedad determinada.

Los bienes comunes no deben confundirse con los bienes públicos. Estos últimos pertenecen a todos, pero existe una legislación que otorga al Estado su control y administración. Por otro lado, tampoco deben ser confundidos con los recursos naturales, es decir, los elementos de la naturaleza valorados para su uso por un grupo social determinado. Actualmente, se considera que el carácter común de los bienes puede surgir en dos casos. Primero, en situaciones donde no está definida la propiedad: por ejemplo, los peces de un lago no tienen un dueño y, por lo tanto, pueden ser utilizados y apropiados sin mediaciones. Segundo, por acuerdo de una comunidad: se aplica en casos en los que un determinado bien puede ser utilizado por todos pero no apropiado por alguien en particular; por ejemplo, tierras de cultivo o pastoreo utilizadas por varios agricultores dentro de una comunidad. Los bienes comunes tienen ciertas características principales. Por un lado, son el sustento básico que posibilita la vida, permiten el transporte (como el agua y el aire) y proveen combustible. Por el otro, son fuente de todos los recursos naturales. Finalmente, permiten el reciclado del agua, el oxígeno, el carbono y todos los desechos de la sociedad.

La discusión sobre los bienes comunes.

Un antecedente de la definición y discusión acerca de los bienes comunes se puede encontrar en la Antigua Roma, donde se designaron las *res communes* como un tipo específico de propiedad. Las *res communes* hacían referencia a la existencia de cosas naturales utilizadas por todos, como el agua, el aire, etcétera.

Otro antecedente es el Código de Justiniano, una recopilación de leyes promulgada por el emperador Justiniano 1 en el año 529 d.C. Este Código reconocía que, por ley de la naturaleza, el aire, el agua, el mar y sus orillas eran cosas comunes a toda la Humanidad.

Luego, en la Edad Media, los pobladores del actual Reino Unido contaban con tierras compartidas o comunales para cazar, cortar leña, sembrar o llevar a pastar a sus animales. En 1215, a partir de la sanción de la Carta Magna, los bosques y las pesquerías también pasaron a ser bienes comunes, según interpretaciones de ese antiguo documento británico.

A partir de la expansión de las potencias europeas sobre América, Asia y África, a fines del siglo xv, fueron disminuyendo progresivamente los bienes comunes a disposición de todos. La expansión implicó la apropiación de nuevos espacios y sus recursos, los cuales quedaron bajo la administración de los Estados centrales. Luego, las declaraciones de Independencia en las colonias no alteraron particularmente las formas de protección de los bienes comunes, cuyo control pasó de las metrópolis a los Estados nacionales.

Hacia mediados del siglo xx, a partir del avance de los problemas de degradación y sobreexplotación de los recursos, el biólogo estadounidense Garrett Hardin postuló la tesis de la

llamada “tragedia de los bienes comunes” Esta tesis sostenía que, si cada persona de una comunidad tiene acceso a un determinado bien común, llegaría un momento en que tal bien se agotaría o degradaría, de forma tal que nadie más podría beneficiarse de su uso.

Esta propuesta, que ponía en primer plano el interés individual por sobre el común, generó un intenso debate. Aquellos que apoyaban la propuesta de Hardin, defendían la transformación de los bienes comunes en propiedad privada, con la justificación de que evitaría la degradación de los bienes. Así, consideraban a los bienes como fuente de ganancias y favorecían la apropiación privada de bienes comunes no privatizados, como el agua. Por otro lado, quienes se oponían a la privatización de los bienes, defendían los beneficios de la gestión común de estos recursos. Asimismo, sostenían que los culpables de la degradación de los bienes comunes no eran otros que, precisamente, el interés privado y la búsqueda de ganancias. Además, pudieron mostrar modelos eficientes de administración, uso y conservación de los bienes comunes. Tal es el caso de la gestión de las tierras comunales en algunas comunidades indígenas.

Los suelos y bosques como bienes comunes.

Los primeros bienes comunes en ser valorados, apropiados y convertidos en recursos en la Argentina fueron el suelo, los bosques y las selvas. En el caso de los suelos, se los ha explotado en diversas actividades productivas, como la agricultura y la ganadería. En el caso de los bosques y las selvas, su uso se orientó a la extracción de maderas y la obtención de otros productos forestales, que fueron considerados valiosos en distintos momentos de la historia.

La distribución de los suelos.

El recurso suelo ha sido considerado la base fundamental para el desarrollo económico de la Argentina. Tal es así que, a fines del siglo XIX y principios del XX, la Argentina era llamada el “granero del mundo”. En aquel momento, el país se insertó en el sistema capitalista mundial como productor agropecuario y principal proveedor de carnes y granos. Los suelos más fértiles se encuentran, principalmente, en la planicie chaco-pampeana, que se extiende sobre la provincia de Buenos Aires, el centro y sur de Córdoba, y el centro y sur de Santa Fe. Estos suelos se originaron sobre el loess pampeano, un material sedimentario compuesto por minerales y nutrientes, que los torna más productivos. Son suelos profundos y oscuros, con horizontes bien estructurados, llamados molisoles.

Además, este tipo de suelos también se encuentran en parte de Santiago del Estero, Tucumán, Chaco y Formosa. Allí también se observan alfisoles, es decir, suelos con presencia de arcilla y, por lo tanto, con baja capacidad para drenar las aguas. Las zonas áridas y semiáridas del país, que coinciden con las provincias patagónicas y andinas, se caracterizan por poseer suelos de menor fertilidad, más jóvenes y con poca profundidad. En el oeste montañoso dominan los entisoles, que son suelos de formación reciente y poco desarrollados.

Además, en la Patagonia, predominan los aridisoles, suelos con muy bajo contenido en materia orgánica, de texturas gruesas y susceptibles a la erosión. En el noreste del país, se encuentran los suelos típicos de áreas cálidas y húmedas, con diverso grado de desarrollo y capacidad para la práctica agrícola. Además de los molisoles, se pueden identificar los vertisoles, suelos poco evolucionados y con alguna acumulación de materia orgánica. En la provincia de Misiones, el norte de Corrientes, también están presentes los “suelos rojos”, llamados ultisoles, que son de formación antigua y alto contenido de hierro (de allí su coloración).

La distribución de los ecosistemas boscosos.

Los bosques y las selvas originales de la Argentina se desarrollaron bajo diversas condiciones climáticas y de suelo. Actualmente, pueden encontrarse remanentes, con distinto grado de alteración en función de la intensidad del uso a la que fueron sometidos a lo largo del tiempo. Se pueden reconocer cinco grandes regiones forestales en el país

. Selva misionera: ubicada en el extremo noreste del país, en la provincia de Misiones, se caracteriza por un clima subtropical, con lluvias abundantes (entre 1.600 y 2.000 mm anuales), que permiten el crecimiento de árboles de gran altura. Tiene varios estratos de vegetación bien diferenciados: dos arbóreos, uno de arbustos, uno de hierbas y el más bajo, compuesto por especies rastreras que cubren el suelo.

. Selva tucumano-boliviana o yungas ubicada también en la franja de clima subtropical húmedo, con lluvias abundantes que superan los 1.500 mm anuales, principalmente durante el verano. Las yungas se desarrollan sobre los faldeos de las sierras Subandinas, en el norte del país, adentrándose además en territorio boliviano. Debido a las diferencias de clima por la altura, se generan varios pisos de vegetación. + Parque chaqueño: se trata de una extensa región con amplias variaciones climáticas. Las precipitaciones disminuyen fuertemente, de 1.300 mm en el este a 500 mm en el oeste. Esto determina fuertes diferencias en la vegetación. Los bosques caducifolios xerófilos de gran altura, donde predomina el quebracho colorado, se alternan con pajonales, praderas y palmares.

. Espinal: es una zona de gran variedad climática, caracterizada por la presencia de un bosque caducifolio de baja altura (menos de 10 metros de altura), donde se alternan palmares, sabanas y estepas. En la región, se encuentra una gran variedad de especies, en las que predominan el algarrobo y el caldén.

. Monte: es una amplia región desarrollada sobre zonas áridas y semiáridas, donde se observan importantes diferencias en las temperaturas al norte y al sur del río Colorado. La cobertura forestal es baja, y predominan los arbustales de jarilla y los bosques de algarrobos. Bosque andino-patagónico: es un bosque de clima templado-frío y húmedo, con lluvias concentradas en invierno. Esta región se desarrolla desde el sur de Mendoza hasta Tierra del Fuego, sobre los faldeos andinos. Se caracteriza por la presencia de bosques de coníferas, por lo general, con un estrato arbóreo y uno herbáceo, donde predominan el ñire, el coihue, la lenga y la araucaria.

La expansión agrícola a fines del siglo XX.

Las planicies pampeanas fueron las áreas del país que se destacaron por la producción de cereales (trigo y maíz) y oleaginosas (soja y girasol), así como por la producción bovina. La composición de suelos aptos, el clima templado y la disponibilidad de agua otorgaron un gran valor al suelo. Por ello, muchos capitales privados invirtieron en estos suelos, se apropiaron de ellos y los destinaron a la producción de cereales para la exportación. El resto del país se orientó a la producción de otros cultivos, de acuerdo a las características de cada área. Así, el clima húmedo y cálido del norte del país permitió el crecimiento de cultivos industriales y frutales.

Esta gran área "extrapampeana" ha sido marginal en el proceso de desarrollo socioeconómico del país y, por lo general, su producción se destinó al mercado interno. Este esquema territorial desigual, con producciones diferenciadas, se generó a partir de la inserción del país en el mercado mundial y se mantuvo durante, prácticamente, todo el siglo XX. A fines de la década de 1980, se inició un proceso acelerado de expansión de la actividad agrícola, que se caracterizó por dos grandes factores: e El aumento de la superficie de tierras dedicada a la

agricultura, conocido como “agriculturización, que se dio en el área pampeana a partir del avance de la agricultura sobre la ganadería. En cambio, en el área extrapampeana, se reemplazaron bosques por tierras cultivadas. El aumento de los volúmenes de producción con la incorporación de innovaciones tecnológicas, que permitió obtener mejores rendimientos en las cosechas, es decir, un mayor volumen de granos y semillas por superficie sembrada,

¡Cuales fueron las causas de la expansión!

La gran expansión de la frontera agrícola durante los últimos años responde a varias causas de origen natural, social y tecnológico.

Una de las causas es el desplazamiento de las isohietas hacia el oeste, lo que ha incrementado las precipitaciones en el centro y norte del país desde mediados de la década de 1970. Este fenómeno está asociado al llamado “cambio climático”. Por otro lado, se han incorporado tecnologías y semillas genéticamente modificadas a la producción agrícola, lo cual profundizó la expansión de la agricultura hacia otras áreas. Además, el aumento en la demanda de ciertos productos alimenticios a nivel mundial, generó una suba en los precios de los principalmente de la soja y sus derivados.

El monocultivo de la soja.

El proceso de agriculturización y el avance de la frontera agrícola en la Argentina desde fines del siglo xx se basaron especialmente en el cultivo de soja. Desde mediados de la década de 1970 y hasta la actualidad, se observa un incremento constante de la superficie dedicada al cultivo de esta oleaginosa. Algunos cálculos señalan que la superficie implantada con soja creció unas 275.000 hectáreas por año desde 1970 y que este crecimiento es aún mayor en las áreas extrapampeanas. Este crecimiento se explica, principalmente, por dos cambios en los sistemas de cultivo. El primero de ellos se dio en 1975, a partir de la introducción de nuevas variedades de soja traídas desde Europa. El sistema tradicional de labranza en el área pampeana se modificó, y la rotación entre agricultura y ganadería fue reemplazada por el cultivo doble anual de trigo-soja. Además, disminuyó la producción de otros cereales, como el maíz y el sorgo, y se redujo la capacidad de recuperación del suelo entre cosechas.

El segundo cambio se produjo en 1996, con la aparición de la soja transgénica, conocida como soja RR. Se trata de una semilla modificada genéticamente para resistir la aplicación del glifosato, un herbicida de amplio espectro creado para eliminar plantas no deseadas, como hierbas de hojas anchas, arbustos leñosos, y pastos anuales y perennes, sin afectar el crecimiento del cultivo. Junto a la soja se introdujeron otros cultivos modificados, pero solo la oleaginosa creció vertiginosamente, lo cual amplió la cantidad de superficie implantada en el país e impulsó el avance sobre áreas de características áridas y semiáridas. Además, por los precios favorables en el mercado internacional, la producción comenzó a orientarse fundamentalmente a la exportación. De esa manera, en las provincias pampeanas, el monocultivo reemplazó al sistema de rotación y desplazó a la ganadería, mientras que, en el área extrapampeana, sustituyó bosques nativos o cultivos tradicionales, como el algodón, en Chaco, o la caña de azúcar, en Tucumán.

La adopción de este modelo también ha tenido serias consecuencias sociales. Por un lado, el cultivo de soja está en manos de grandes empresas, llamadas pools de siembra, que concentran la propiedad de la tierra. Por el otro, este tipo de cultivo demanda escasa mano de obra (un trabajador rural cada 500 hectáreas sembradas), lo cual genera un proceso de expulsión de trabajadores y migración hacia centros urbanos pequeños e intermedios. Este fenómeno se observa especialmente en áreas de reciente incorporación al uso agrícola, como el departamento de Anta, al este de Salta. Allí se concentra el 65% de la superficie con soja de la provincia y, a la vez, en las ciudades cercanas a los campos, se registró un alto crecimiento de la población, principalmente por la llegada de los trabajadores rurales desplazados por la deforestación y el avance de la soja.

El modelo de producción y sus consecuencias ambientales.

Los modelos agrícolas basados en el monocultivo tienen como consecuencia la degradación de los bienes naturales, ya que el principal objetivo de la producción es la obtención de ganancias económicas en el corto plazo. Actualmente, en la Argentina, la soja ocupa más de la mitad del total de la superficie cultivada. Sin duda, es un cultivo que genera ganancias extraordinarias para los productores privados, así como divisas para el país. Sin embargo, las consecuencias ambientales del modelo ya comienzan a ser visibles.

La degradación de los suelos.

La planta de soja tiene la particularidad de requerir altas proporciones de nutrientes, como nitrógeno y fósforo. Ambos elementos se encuentran presentes de forma natural en los suelos -en cantidades variables según su composición- y condicionan el crecimiento de las plantas. El nitrógeno contribuye a la fertilidad de los suelos, mientras que el fósforo es parte de procesos esenciales, como la fotosíntesis. Se estima que, durante 2003, en nuestro país, la soja consumió poco más de 1.400.000 toneladas de nitrógeno y 321.600 toneladas de fósforo. El monocultivo de una semilla con tales demandas de nutrientes conduce a un progresivo debilitamiento del suelo. Como resultado, se deben emplear fertilizantes artificiales para mantener los rendimientos, lo cual aumenta los costos de producción. La práctica del monocultivo también tiende a erosionar los suelos.

La implantación de soja en áreas deforestadas o con suelos semiáridos, puede iniciar o profundizar los procesos erosivos. Algunas investigaciones señalan que, para 2003, las pérdidas de suelo por la erosión ligada al cultivo de soja fueron de unas 19 a 30 toneladas por hectárea sembrada. Otros problemas asociados al cultivo de soja son el lavado y la compactación de los suelos. El lavado consiste en la eliminación de los nutrientes por lixiviación, como resultado del exceso en el agua de riego. La compactación está asociada con la labranza prolongada y el paso constante de maquinarias, lo cual provoca una reducción de los poros que posibilitan la circulación del agua y el aire al interior del suelo. Esta compactación reduce la capacidad de los suelos para retener o drenar el agua, lo cual genera encharcamientos en superficie, primer paso para la erosión de origen hídrico. Estos fenómenos son típicos del área tradicional de cultivo, en las provincias de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires.

El uso de herbicidas y sus efectos perjudiciales.

Como vimos, la adopción del paquete tecnológico que posibilitó la expansión de la soja transgénica, requiere la aplicación de un herbicida específico: el glifosato. Los herbicidas son productos químicos diseñados para eliminar hierbas que pueden dañar los cultivos. El uso constante

de estos productos introduce sustancias contaminantes en el ambiente, que afectan la composición del suelo, quedan como residuo en las plantas o son transportados por los cursos de agua, extendiendo la contaminación hacia otras áreas. Además, en muchos casos, afectan la salud de los trabajadores rurales, En la siembra directa de soja, se aplica glifosato sobre los rastros del cultivo anterior; por, Sin embargo, también suele aplicarse el herbicida luego de la siembra y durante el crecimiento de la planta, a fin de eliminar probables malezas.

En estos casos, se realiza la fumigación por métodos diversos, entre los que se destaca el uso de aviones o maquinarias especiales que descargan el herbicida sobre los campos sembrados. En la actualidad, existen sobre las consecuencias del glifosato. Por un lado, numerosas investigaciones demuestran que los efectos tóxicos del herbicida son En la Argentina se utilizan anualmente 300 millones de litros de agroquímicos, que afectan a 12 millones de habitantes.

Diferentes organizaciones piden prohibir las fumigaciones aéreas y limitar las fumigaciones terrestres. eso, se lo denomina "herbicida emergente". generados no solo por su componente principal, sino también por los compuestos adicionales que lo vuelven más soluble para facilitar su dispersión durante la fumigación. Por el otro, las empresas que elaboran este herbicida, sostienen que el producto es inocuo. Sin embargo, estudios recientes presentan una serie de evidencias que se podrían asociar al uso prolongado del glifosato en los campos.

En los animales, se han comprobado malformaciones y afecciones en el sistema respiratorio. Al mismo tiempo, las hembras de una especie son más susceptibles a los efectos tóxicos que los machos. A su vez, se observa la pérdida de biodiversidad de plantas y malezas resistentes al herbicida. Entre la población humana, se pueden mencionar la aparición frecuente de irritación en la piel y las mucosas de trabajadores expuestos al producto, así como problemas gastrointestinales y destrucción de glóbulos rojos. Mucho más grave es el incremento en las malformaciones genéticas en los hijos de personas que aplican el agroquímico o están expuestas a él.

La explotación del bosque nativo.

La apropiación del bosque, ya sea privada o pública, se realiza con el fin de extraer maderas destinadas a diferentes usos. Estos usos dependerán de las características de las especies arbóreas, las preferencias de consumo en el mercado mundial y las técnicas disponibles para la transformación de la madera. En la Argentina, las diferentes regiones forestales, en estrecha relación con las grandes áreas climáticas, han presentado especies muy requeridas en distintos momentos históricos.

Los bosques de quebracho colorado del Chaco, en la franja subtropical, fueron intensamente explotados a fines del siglo xix para la obtención del tanino, sustancia utilizada para el curtido de pieles. Además, por su resistencia, la madera del quebracho fue empleada en la fabricación de durmientes, durante el momento de mayor expansión de la red ferroviaria nacional, En la selva tucumana -o yungas- se han explotado el cedro y el nogal para la fabricación de muebles. Por su parte, en la selva misionera, los cambios en la demanda de madera y la paulatina disminución de los árboles disponibles, se tradujeron en el incremento del número de especies explotadas: de las cuatro iniciales se pasó a veinte en la actualidad.

En la franja árida y semiárida, los bosques xerófilos de algarrobo del monte y el espinal fueron utilizados de forma intensiva a partir de principios del siglo xx. Su explotación tenía como objetivos la obtención de leña y durmientes para el ferrocarril, principalmente, Por su parte, los bosques patagónicos fueron la fuente de materia prima para la construcción de viviendas, galpones y otras estructuras.

En todos los casos, el modelo de utilización privilegió la obtención de ganancias en el corto plazo, sin considerar los tiempos de regeneración y recuperación de los ecosistemas. La técnica de extracción más utilizada fue la tala selectiva, esto es, la elección de los ejemplares de mayor porte, en detrimento de los más pequeños, enfermos o malformados. Este tipo de extracción tiende a empobrecer el bosque, tanto en cantidad como en calidad. También, se utilizó otra práctica extractiva: la tala rasa. Esta práctica implica entrar en el bosque y derribar indiscriminadamente todos los ejemplares .

Según datos de 2008, en la actualidad, el parque chaqueño es la región forestal que mayores aportes hace a la producción de madera de bosques naturales, con un 88% del total.

La obtención de leña es el uso más extendido de la madera, excepto en la selva misionera, las yungas y el bosque andino-patagónico, donde predominan los rollizos, es decir, la madera en forma de poste, una vez extraído el tronco del árbol. En el caso de la leña, una buena parte de la producción nacional se destina a la obtención de carbón.

El bosque como fuente de energía: leña y carbón vegetal.

A través del tiempo, en la Argentina se ha dado prioridad al consumo de energía obtenida de fuentes tradicionales -especialmente, petróleo y gas-. Las redes de abastecimiento priorizan el suministro energético a las grandes ciudades y, en particular, al Área Metropolitana de Buenos Aires. En las áreas rurales, por su parte, se suele utilizar la leña obtenida de los bosques. Con ella se calefacciones los hogares o se cocinan los alimentos, tanto para el consumo familiar como para la venta a pequeña escala. Este tipo de prácticas se repite en la periferia de las áreas urbanas, donde no llegan las redes de electricidad y gas. Allí, el aumento de las migraciones ligadas a la deforestación y la expansión de la agricultura potencia estos procesos. La leña, además de servir como materia prima para la calefacción o la cocción de alimentos, también es la base para la obtención del carbón vegetal, el recurso energético más antiguo que se obtiene a partir del calentamiento de la leña. En la Argentina, el parque chaqueño lidera las extracciones de madera para leña y carbón. Dentro de esa región, Chaco y Santiago del Estero son las provincias con mayores niveles de producción.

Según datos de 2008, estas provincias concentran el 87% de la cantidad de leña obtenida en la región. La especie por elección es el quebracho (colorado y blanco), cuya madera tiene un alto poder calórico. En ambas provincias, el uso de leña está extendido en hogares rurales y áreas periféricas de las ciudades. Sin embargo, debe diferenciarse este uso, en función de las necesidades de los hogares, respecto de la tala indiscriminada. Además, las provincias de Santiago del Estero y Chaco lideran la producción nacional de carbón vegetal, ya que aportan alrededor del 90% de las extracciones de leña para carbón. La especie más demandada es el vinal, un arbusto bajo, espinoso y de frutos comestibles. El vinal es característico de esta región y se ha expandido enormemente debido a su alta capacidad de adaptación y a la introducción de la ganadería. El carbón vegetal se emplea principalmente para la calefacción de los hogares. A diferencia de la leña, el carbón es un producto que se comercializa y se exporta, En 2009, las exportaciones de carbón vegetal representaron alrededor del 20% del valor total de los productos madereros que salieron del país.

La degradación y deforestación del bosque nativo

Los procesos de degradación del bosque nativo argentino se relacionan principalmente con dos cuestiones: por un lado, la explotación selectiva como forma predominante; por el otro, la utilización del fuego como método de apertura de masas boscosas densas, tanto para facilitar el uso

agropecuario como para la instalación humana en general. En los dos casos, el proceso de degradación presenta etapas similares: 1. El bosque original pierde sus ejemplares y, con ello, disminuye su diversidad biológica. 2. Sobre el ecosistema alterado avanzan especies invasoras, generalmente arbustos de baja calidad maderera. 3. Aparece un nuevo ecosistema, donde se combinan bosques talados o quemados con arbustales. Por su parte, la deforestación implica la pérdida progresiva de la superficie boscosa.

En general, está vinculada al avance de las actividades agropecuarias y al cambio en el uso del suelo, que pasa de ser forestal a ser agrícola, ganadero o una combinación de ambos. Con la deforestación, no solamente desaparece el bosque, sino también se inician los procesos de degradación del suelo.

Esto se debe a que los árboles forman una cubierta protectora del suelo. Si está cubierta es removida, el suelo queda expuesto a la erosión y es fácilmente destruido. Por lo general, luego de desmontado el bosque, se implementan prácticas agrícolas inadecuadas que contribuyen al proceso de deforestación. Además, la deforestación puede dispararse con el descubrimiento de otros recursos de mayor valor en el mercado.

Así, por ejemplo, hacia la década de 1970, en el parque chaqueño se abrieron áreas para la exploración petrolera, donde la vegetación fue eliminada en franjas angostas y rectas. El proceso no solo permitió el ingreso de la maquinaria requerida en la exploración, sino que, además, amplió las posibilidades para otro tipo de explotación, como la extracción selectiva de árboles en áreas hasta entonces inexploradas del bosque. Otra de las causas de la deforestación es el reemplazo del bosque nativo por el implantado. En estos casos, se talan las especies originarias y se plantan otras que, en general, son de crecimiento rápido y presentan un alto valor en el mercado. De esa forma, se reduce la diversidad natural del ecosistema para acelerar los tiempos de comercialización y obtención de ganancias. En otros casos, las plantaciones pueden realizarse con el fin de recuperar parte del bosque original. Para ello, suelen emplearse especies exóticas a la región. A principios de la década de 2000, prácticamente todas las provincias del norte argentino —a excepción de Chaco— tenían más superficie implantada con especies exóticas que con especies naturales.

Un inventario de los bosques argentinos

La preocupación por la pérdida de los bosques nativos, ya sea por deforestación o por degradación, motivó la puesta en marcha de un proyecto para inventariar estos recursos y conocer el estado general de los ecosistemas, así como su grado de conservación. Este proyecto, llamado Primer Inventario Nacional de Bosques Nativos y llevado a cabo por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, permitió conocer con bastante exactitud los bosques naturales existentes a principios del siglo xxi y compararlos con las estimaciones realizadas a lo largo del siglo xx por investigadores y por el propio gobierno nacional.

La metodología de trabajo incluyó técnicas modernas, como el procesamiento e interpretación de imágenes satelitales, el uso de sistemas de información geográfica y las recorridas en el terreno. Se identificaron cuatro grandes categorías de cobertura de la tierra en las regiones forestales: o Tierras forestales: áreas cubiertas por árboles en más del 20% de su superficie. Pueden ser formaciones abiertas o cerradas, de alturas superiores a los 7 metros. o Otras tierras forestales: áreas cubiertas por árboles en porcentajes de entre el 5% y el 20% de la superficie; las alturas son menores a 7 metros; los arbustos son abundantes. Bosques rurales: áreas con remanentes de bosques naturales, situados en medio de la población agrícola. o Otras tierras: áreas que no cuentan con cobertura boscosa significativa, como praderas naturales o implantadas, terrenos con construcciones, áreas sembradas, etcétera. Los resultados de esta evaluación indican que, para el

año 1998, nuestro país contaba con 31.443.873 hectáreas de bosques nativos, de las cuales un 96% pertenecía a la categoría de tierras forestales y el resto, a bosques rurales.

También, se identificaron unas 75.000.000 de hectáreas de otras tierras forestales, compuestas por formaciones de arbustos con diferentes niveles de degradación. Un análisis por región forestal señala que el mayor nivel de degradación ocurre en el monte, donde sólo se identificaron otras tierras forestales y pequeños bosques en el área más meridional. En el espinal, por su parte, solo el 7,5% de la superficie total de la región estaba cubierta con bosques nativos. En 2002, una nueva revisión de las masas boscosas mostró que la superficie continuó disminuyendo y dio como resultado, entre 1998 y 2008, una tasa de deforestación de unas 230.000 ha/año.

La pérdida de biodiversidad o a La biodiversidad, o diversidad natural,

Es la variedad de organismos vivos —vegetales, animales y humanos- que existen sobre la Tierra como resultado de la historia y la evolución de la vida. También, incluye la distribución y abundancia relativa de los organismos en los ecosistemas terrestres y acuáticos, así como la diversidad dentro de cada especie. La biodiversidad es un bien común fundamental, pues es el reservorio genético del planeta. Así, por ejemplo, las plantas, los árboles y los animales contienen el material genético que determina la longevidad, la resistencia a enfermedades, la capacidad de adaptación a suelos y climas diferentes, etcétera. Las plantas también contienen los componentes fundamentales para la elaboración de medicamentos.

La biodiversidad en la Argentina actual.

Desde el punto de vista de la distribución de la vida, el territorio nacional alberga una gran variedad de ecosistemas. Las condiciones del clima, los suelos, la disponibilidad de agua y las formas del relieve determinan una gran variedad de ecosistemas en el territorio nacional. Así, las estepas, sabanas, bosques, selvas y extensas áreas marinas, conforman las ecorregiones argentinas. Las ecorregiones argentinas con mayor diversidad de especies son las selvas y los bosques húmedos.

La selva paranaense y las yungas cuentan con la mayor biodiversidad de árboles y, junto con los bosques andinos, presentan la mayor cantidad de especies endémicas, es decir, especies propias de cada región. Si bien, en algunos casos, la degradación de estos ecosistemas ha aumentado con los años, también existe cierto grado de conservación debido a la presencia de áreas protegidas, especialmente en la selva paranaense y el bosque andino. Le siguen en importancia de biodiversidad los bosques xerófilos (el monte, las sierras y bolsones, el espinal, el monte de llanuras y mesetas, el Chaco seco) y las áreas frías. La menor diversidad se observa en la ecorregión Altos Andes, debido a las características rigurosas del clima frío y la altura, que restringen la vida únicamente a la presencia de musgos.

Además, existen algunos casos particulares entre las ecorregiones. La vegetación original de la Pampa fue totalmente sustituida por ecosistemas agrícolas. Este cambio no solo afectó la diversidad de plantas, sino también la fauna: los grandes mamíferos típicos de la ecorregión hoy están extinguidos. La ecorregión del Delta e islas del Paraná, en cambio, debe su singularidad al conjunto de características propias de varias ecorregiones, lo cual permite un alto grado de diversidad de especies vegetales.

La pérdida de diversidad biológica.

Actualmente, las características naturales de las ecorregiones son muy diferentes a las originales. Esto ha llevado a una disminución de la biodiversidad, tendencia que también se observa a nivel mundial, sobre todo a partir de los últimos años del siglo xx. Entre las causas de esta situación, se pueden mencionar el cambio en el uso del suelo, la sobreexplotación, la introducción de especies exóticas y la contaminación. El cambio en el uso del suelo se refiere sobre todo a la deforestación de grandes superficies boscosas, para destinar los suelos a la agricultura o la ganadería. En este proceso, también se considera el crecimiento de las áreas urbanas sobre los sistemas naturales que las rodean. En la Argentina, la práctica agrícola requirió tanto el reemplazo de los pastizales pampeanos originales como la deforestación de grandes masas boscosas. En ambos casos, la biodiversidad natural disminuyó y se produjeron cambios en la composición biológica de los ecosistemas, al incorporarse variedades domésticas que se combinaron con los remanentes de la vegetación natural.

La sobreexplotación se refiere tanto a la explotación de ciertas especies forestales de valor comercial como a la caza o pesca intensiva de especies animales. En el caso de la fauna, existen especies que están en peligro de extinción en la Argentina. Un ejemplo es el yaguareté o jaguar, que habitaba buena parte del territorio nacional y cuya existencia se reduce hoy a unos pocos ejemplares en las áreas protegidas. Este felino fue perseguido por el alto valor de su piel, que se exportaba a Europa, especialmente a principios del siglo xix. Su merma se debió al avance de la agricultura y la progresiva pérdida de sus hábitats naturales. La introducción de especies exóticas es especialmente crítica en algunos ecosistemas. Esto se debe a que las especies exóticas compiten con las nativas, además de alterar los procesos ecológicos. En la Argentina, se introdujeron alrededor de 400 especies exóticas, de las cuales, unas 80 causaron un altísimo impacto en la biodiversidad.

En algunos casos, se trata de “invasiones biológicas”. Un ejemplo es la introducción de castores canadienses en Tierra del Fuego, a mediados del siglo xx, para comercializar su piel. Los roedores se reprodujeron, construyeron diques con ramas, inundaron zonas bajas y dañaron el bosque. Entre los vegetales, las acacias negras, introducidas para crear pequeños bosques en Buenos Aires, provocan pérdidas de suelo para la cría de ganado. Otro ejemplo, es la introducción de las truchas en los cursos de agua, que aumentaron la presión sobre el zooplancton, el alimento principal de los peces nativos. La contaminación, por la presencia de sustancias tóxicas en el aire, el agua o el suelo, ha causado un severo impacto en la biodiversidad. El uso de agrotóxicos potentes para eliminar malezas trajo como consecuencia la reducción de algunas especies arbóreas circundantes en los campos donde se aplican estos químicos.

LA PROBLEMÁTICA DEL AGUA EN LA ARGENTINA.

“El agua es un recurso fundamental para la vida y las actividades productivas de los seres humanos. Por ello, es importante considerarla como un bien al que todos deben poder acceder en cantidad y calidad suficientes. Sin embargo, en la Argentina + los problemas ambientales afectan la calidad y disponibilidad del agua, así como las cuestiones sociales, políticas y económicas inciden sobre el acceso a este recurso.”

El agua es un recurso único e insustituible, y el elemento más importante de la naturaleza, del cual depende la vida en el planeta. Por un lado, del total disponible en la Tierra, solo un 2,5% es agua dulce, que puede utilizarse para el consumo humano y el desarrollo de actividades productivas, como la agricultura y la ganadería. Por el otro, el acceso al agua en condiciones seguras, es decir, libre de contaminantes, es fundamental para la salud de las personas.

Además, el agua es un insumo fundamental en los procesos industriales. Por su importancia para la vida humana, el agua es un bien al que todas las personas tienen derecho a acceder para

satisfacer sus necesidades básicas. Por ello, se dice que es un bien común, como el suelo o los bosques. Así, su uso y aprovechamiento debe hacerse en forma conjunta por todos los miembros de una comunidad con acceso a un río, un lago o cualquier otra fuente de agua dulce.

Cuando su uso está regulado por un Estado, ya sea nacional, provincial o local, el agua adquiere el carácter de un bien público. Sin embargo, el agua tiene otra particularidad: es un elemento finito —o limitado—; en efecto, existe una cantidad determinada de agua que cambia de estado a través del ciclo hidrológico. Debido a esta característica, el agua adquiere la propiedad de un bien económico que, como tal, puede ser apropiado por particulares para su utilización o comercialización.

Durante los últimos años, estas dos posturas sobre el agua como bien común o bien económico, han estado enfrentadas. Los defensores de la noción de bien común, consideran que el acceso universal al agua es un derecho humano fundamental, ya que garantiza la salud y el bienestar de las personas. Por otro lado, para los partidarios de la idea del agua como bien económico, este recurso es una mercancía que puede ser intercambiada. Este debate también ha estado presente en la Argentina, ya que nuestro país cuenta con importantes recursos hídricos.

Los recursos hídricos en la Argentina.

“Debido a la diversidad climática y morfológica de su territorio, la Argentina posee una gran diversidad de sistemas de drenaje. Se distinguen dos tipos de cuencas: por un lado, los ríos de vertiente atlántica, que desaguan en el océano Atlántico; por el otro, los ríos de vertiente pacífica, que desembocan en el Pacífico. Además, existen áreas de drenaje endorreico, es decir, que no tienen salida al mar, y áreas arreicas, o sea, sin drenaje. En la vertiente del Atlántico, se destaca la Cuenca del Plata, un gran sistema hídrico de 3.100.000 km²” compartido entre la Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay. Los ríos Paraná, Uruguay y Paraguay son los principales cursos de agua de esta cuenca, que tiene un caudal medio de 22.600 m³/seg. Otros ríos importantes de la cuenca se encuentran íntegramente en territorio argentino, como el sistema Pasaje-Juramento-Salado o los ríos de las provincias mesopotámicas. En la Cuenca del Plata, se localizan las mayores áreas urbanas del país y se desarrollan las actividades productivas más importantes.

En la vertiente del Atlántico también se encuentran otros importantes cursos de agua, como los ríos Colorado y Negro. Ambos atraviesan el territorio de oeste a este, y pasan por varias provincias de la región semiárida del país. Dadas las condiciones climáticas, el principal uso del agua en ambas cuencas es el riego para el desarrollo agrícola. Por otro lado, los ríos de la vertiente del Pacífico se ubican en el sector patagónico de los Andes. Se destaca el río Futaleufú, el mayor y más caudaloso, y otros como los ríos Pico, Manso y Puelo. Si bien se trata de cuencas de superficie reducida, aportan el 4,7% del derrame total del país, con un caudal total de 1.100 m³/seg. Las cuencas sin salida al océano se ubican en el centro y noroeste del país, y en grandes superficies de la meseta patagónica y la llanura pampeana. Si bien ocupan algo menos del 30% del territorio, solo aportan el 1% del derrame total de la Argentina,

El río más importante de estas cuencas es el Salí-Dulce, que nace en Tucumán y desemboca en la laguna Mar Chiquita. Este gran cuerpo de agua salada recibe, además, las aguas de los ríos Primero y Segundo. En base al caudal superficial total de agua dulce, es posible estimar que cada habitante del país dispone de unos 26.000 m³ de agua por año. Sin embargo, la distribución territorial es muy desigual, ya que está concentrada en el litoral húmedo, donde se asientan las poblaciones y las actividades económicas. En cambio, en las zonas áridas, el recurso se obtiene

fundamentalmente de fuentes subterráneas. La Argentina cuenta con abundantes recursos hídricos subterráneos, de los cuales, el más importante es el Acuífero Guarani, compartido con Paraguay, Brasil y Uruguay.

Valor económico y privatización del agua.

La noción del recurso agua como bien económico tuvo su máximo apogeo durante las dos últimas décadas del siglo xx. En ese momento, el liberalismo económico instaló, a nivel mundial, la idea del agua como un bien que podía ser intercambiado en el mercado, tal como se hacía con un automóvil o un televisor. Las grandes instituciones de financiamiento internacional, como el Fondo Monetario Internacional (FMI), y las empresas multinacionales de agua, han utilizado el concepto de escasez para promover criterios de gestión del agua enfocados en las necesidades del mercado.

En. Ese contexto, se impulsó la privatización de los servicios públicos de provisión de agua potable, especialmente en los países de América latina, África y Asia. La Argentina no estuvo exenta de estos procesos de privatización.

Características de la privatización del agua Durante las décadas de 1980 y 1990, se produjeron profundos cambios en la provisión de servicios públicos esenciales, como el agua, en nuestro país. A lo largo de la década de 1980, el gobierno nacional impulsó la descentralización de los servicios. Como consecuencia, la prestación del servicio, hasta entonces a cargo del Estado nacional, pasó a manos de los Estados provinciales y municipales. Cada provincia y, en algunos casos, cada localidad, debió asumir los costos de la producción y distribución de agua, así como de otros servicios públicos, como el gas y la electricidad.

El proceso de cambio se profundizó durante la década de 1990. En ese momento, el gobierno nacional promovió leyes que apuntaron a facilitar el ingreso de capitales privados extranjeros al país y transferir la mayor parte de los servicios públicos a empresas privadas. El proceso fue muy rápido, ya que, en menos de seis años, fueron privatizadas la mayor parte de las empresas estatales.

En el caso de la provisión de agua potable y saneamiento (cloacas), la forma de privatización elegida fue la concesión. Así, se designaba un operador privado que prestaba el servicio de producción y operación de la red de distribución del agua. En cambio, las cañerías de la red y los bienes, ya sean inmuebles u otras instalaciones, quedaron en manos de los Estados. Por otra parte, se crearon diversos entes reguladores, encargados de controlar el accionar de las empresas.

De acuerdo al tamaño del área de concesión —por ejemplo, una ciudad o una provincia—, los prestadores de agua potable podían ser grandes empresas, incluso de capitales internacionales, o pequeñas cooperativas locales. Como resultado de la descentralización y privatización del acceso al agua potable y al saneamiento, a principios del siglo XXI existían en nuestro país poco más de 1.500 empresas u organismos a cargo de uno o ambos servicios, tanto en áreas urbanas como rurales. De ese total, la gran mayoría eran empresas privadas, mientras que una proporción menor continuó en manos de actores estatales o cooperativas de usuarios. Esta última modalidad está presente, especialmente, en pequeñas localidades.

La privatización de Obras Sanitarias de la Nación.

Obras Sanitarias de la Nación (OSN) fue el organismo del Estado nacional a cargo de la producción y distribución del agua potable y los servicios cloacales en todo el país. Fundada en 1912, su objetivo era analizar, construir y administrar las obras para la provisión de agua corriente en las ciudades y pueblos de la Argentina. En los primeros años, sus tareas se concentraron en la expansión de la red de agua corriente y desagües cloacales en la Ciudad de Buenos Aires, y el

asesoramiento a gobiernos de las ciudades del interior del país para desarrollar sus propias redes. Hacia principios de la década de 1930, OSN atendía a una población cercana a los 6 millones de usuarios. La intervención del Estado buscaba homogeneizar las tarifas en todo el país, para garantizar el acceso de la población a los servicios.

Luego de varios cambios en su estructura y funciones a lo largo del siglo xx, la descentralización impulsada a principios de 1980 redujo el área de atención de OSN a la Capital Federal y 14 partidos bonaerenses que formaban parte del Área Metropolitana de Buenos Aires. En la década de 1990, el gobierno nacional llamó a una licitación pública internacional para la privatización de OSN. El ganador de la licitación fue un grupo de empresas denominado Aguas Argentinas, que accedió a la prestación del servicio a través de un contrato de concesión. El área geográfica de concesión de Aguas Argentinas fue la misma que originalmente se otorgó a OSN. Años más tarde, se sumaron otros municipios de la provincia de Buenos Aires, hasta llegar a un total de 17. La superficie afectada a la empresa fue de 808,5 km, donde residía una población cercana a los 8.600.000 habitantes. Aguas Argentinas estaba conformada por un consorcio de varias empresas, una de las cuales tenía mayor participación en el capi-tal accionario. Además, también participaron empresas privadas españolas y argentinas.

La concesión tenía una duración de 30 años, durante los cuales la empresa debía hacerse cargo de la captación, potabilización, transporte, distribución y comercialización del agua. Asimismo, se ocupaba de la recolección, transporte, tratamiento y disposición de los residuos cloacales. Para controlar el desempeño de la empresa, se creó un organismo regulador, llamado Ente Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios (ETOSS).

El argumento central para la privatización y concesión de OSN fue la supuesta ineficiencia del Estado nacional para mantener o modernizar las redes existentes. Cuando se efectuó la firma del contrato, Aguas Argentinas se comprometió a realizar grandes inversiones, para modernizar el servicio y extenderlo a zonas aún no cubiertas. Además, la empresa acordó la reducción progresiva de las tarifas. Sin embargo, a mediados de la década de 2000, la empresa había invertido un 60% de lo prometido y las tarifas habían aumentado un 45%. Este incumplimiento de sus obligaciones motivó la reestatización de la empresa, que ahora se denomina Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA).

El acceso al agua como derecho humano.

En la Argentina, el agua es utilizada principalmente en la producción agropecuaria, para el riego y el ganado. En efecto, esas actividades consumen alrededor del 75% del total de agua extraída, ya sea de fuentes superficiales, como ríos, lagos y lagunas, o subterráneas. El segundo uso más importante es el doméstico, es decir, aquel que comprende el abastecimiento de hogares, comercios e industrias, seguido por el uso destinado a los procesos industriales, como la minería. En el país se extraen unos 4,5 km: de agua por año para uso doméstico, sin embargo, la red de distribución de agua potable para los hogares es insuficiente.

En efecto, a principios de la década de 2000, solo alrededor del 84% de las viviendas del país contaban con este ser- vicio. Por su parte, la red de servicios cloacales que, junto con la red de agua, conforma el servicio de saneamiento básico, era mucho menor y alcanzó al 56% de las viviendas. Estos valores difieren según las áreas sean urbanas o rurales, ya que las primeras cuentan con mejores servicios que las segundas, La situación del país es deficitaria en materia de provisión de agua potable. En algunas áreas, sobre todo en la periferia de las grandes ciudades, la privatización de los servicios y la aplicación de tarifas generaron un acceso restringido al recurso agua. En otras áreas, don- de no llegan las redes, la provisión de agua depende de la disponibilidad

de fuentes de agua y la calidad del recurso que, en muchos casos, puede estar afectado por diversos contaminantes.

De esa manera, el agua como bien común con un valor social ha quedado relegada frente al valor económico. Con la elaboración de los Principios Rectores de Política Hídrica, las autoridades han reconocido el acceso al agua potable y al saneamiento como un derecho humano básico, cuya Carencia puede generar enfermedades y afectar la calidad de vida de las personas. Por Otra parte, el mismo documento establece que todos los habitantes de una cuenca hídrica tienen derecho a acceder al agua para cubrir sus necesidades básicas de alimentación, bebida, salud y desarrollo. Además, se establece que el uso del agua para consumo humano es prioritario por sobre cualquier otro uso. Dada la situación deficitaria del país, los Principios Rectores también establecen que el Estado nacional, provincial o local debe garantizar el acceso al agua a todas las personas, a través de las inversiones necesarias para ampliar las redes, o proyectos para asegurar su calidad, Este reconocimiento no implica la gratuidad del recurso. En efecto, los principios rectores también consideran el valor económico del agua. Por lo tanto, de acuerdo a este punto, debe garantizarse el acceso a través de diversos mecanismos, como subsidios o tarifas diferenciadas.

La lucha: por el acceso al agua.

A principios del siglo xxi comenzaron algunos reclamos por la falta de agua potable, sobre todo en aquellas áreas del país donde los procesos de privatización dificultaron el acceso al servicio. En algunos casos, las protestas llegaron a la instancia judicial, a través de organizaciones civiles que canalizaron las demandas de los habitantes. El reclamo por el derecho al agua fue el origen de dos episodios ocurridos en el Área Metropolitana de Buenos Aires: el primero, relacionado directamente con el accionar de una empresa concesionaria en el partido de Moreno, en la provincia de Buenos Aires; el segundo, con la falta de respuesta del Estado porteño para proveer el recurso en la Villa 31 bis, en el barrio de Retiro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En el caso del partido de Moreno, la empresa Aguas del Gran Buenos Aires estuvo a cargo de la provisión del servicio de agua potable y saneamiento entre los años 1999 y 2006, cuando el gobierno de la provincia de Buenos Aires le rescindió el contrato de concesión. En el año 2001, un grupo de vecinos comenzó a movilizarse en contra de la empresa, que amenazaba con cortar el servicio a los usuarios morosos. Además, el reclamo coincidió con la grave crisis económica que atravesaba el país, la cual condicionaba aún más la posibilidad de pagar el servicio. El caso llegó a la Justicia, instancia en la cual se reconoció que el acceso al agua potable es un derecho que debe asegurarse a todos los habitantes, estén o no en condiciones de pagar la tarifa correspondiente.

En base a la Constitución Nacional, y los tratados y convenios internacionales sobre derechos humanos suscriptos por la Argentina, el juez declaró inconstitucional la cláusula que permitía a la empresa suspender el servicio. En la Villa 31 bis, el agua potable llega a través de la red pública, a excepción de un área donde, en 2007, residían unas 400 personas. Como forma de paliar la situación de esa área, el Gobierno de la Ciudad enviaba camiones cisterna regularmente para proveer agua a los vecinos. Sin embargo, en 2007, suspendió los envíos. Ante ello, el grupo afectado inició una acción judicial, con la asistencia de una asociación civil que lucha por los derechos de los más pobres. En la instancia judicial, el magistrado a cargo de la causa invocó que el derecho al agua constituye uno de los pilares del derecho a la vida.

Problemas del agua cuestión de la cantidad.

La Argentina es un país con importantes recursos hídricos y grandes volúmenes de agua disponible por habitante. Sin embargo, existen serios problemas que afectan la disponibilidad del

agua. La cantidad de agua disponible para las actividades humanas depende, sobre todo, de la presencia del recurso, así como de factores sociales y económicos. Entre ellos, se pueden citar las diferencias en la capacidad de las personas para acceder al agua. Así, por ejemplo, aquellos con suficientes recursos económicos para abonar las tarifas, podrán acceder al agua más fácilmente. En otros casos, cuando las fuentes de agua se encuentran alejadas de los lugares de residencia y no existen redes de distribución, las personas sin recursos o con problemas de salud pueden tener dificultades para el abastecimiento. Uno de los problemas ambientales más críticos vinculados con la cantidad de agua, es la sobreexplotación del recurso. Esto ocurre cuando varias comunidades comparten un mismo curso de agua dentro de una cuenca.

En tales casos, el uso específico del agua en la parte superior de la cuenca repercutirá sobre la disponibilidad de caudal en los sectores inferiores. En la Argentina, existen conflictos por el uso del recurso en cursos de agua y acuíferos compartidos por varias provincias. Uno de los problemas más conocidos se dio entre las provincias de Mendoza y La Pampa por el aprovechamiento del sistema del río Desaguadero. En efecto, este río drenaba naturalmente una amplia zona de vertientes del oeste cordillerano, en las provincias de San Juan, Mendoza y La Rioja.

El eje formado por el río, y su continuación hacia el sur a través de los ríos Salado y Chadileuvú, alcanzaba la cuenca del río Colorado, en la provincia de La Pampa, a la que se conectaba mediante el río Curaco. En Mendoza, el agua del Desaguadero y sus más importantes afluentes era utilizada para regar las zonas áridas. Las obras de aprovechamiento se multiplicaron, especialmente en el siglo xx, en los ríos Atuel y Diamante, dos afluentes del Desaguadero. En ambos casos, se crearon extensas áreas de riego y se construyeron embalses para almacenar el agua y generar energía hidroeléctrica. Como resultado, los aportes de ambos ríos hacia el Desaguadero Salado disminuyeron progresivamente.

En la provincia de La Pampa, la conexión del río Curacó pasó a ser intermitente y se perdió la salida al océano Atlántico a través del río Colorado. Esta antigua conexión solo se activa muy raramente, en presencia de lluvias extraordinarias, como las ocurridas hacia 1970. Ante esta situación, en 1978, el gobierno pampeano realizó un reclamo al gobierno mendocino. El fallo reconoció el carácter interprovincial del río y, por lo tanto, dispuso que cada una de las provincias utilizara una parte del caudal del río. Sin embargo, esta resolución aún no se cumplió. Actualmente, organizaciones civiles de La Pampa continúan con la demanda a través de la Corte Suprema de Justicia, específicamente para resolver la cuestión del aporte del río Atuel.

Los extremos hidrológicos.

Las inundaciones y las sequías son los eventos hidrológicos extremos más importantes de la Argentina. Se trata de procesos naturales que, en muchos momentos a lo largo de la historia, han ocasionado desastres. Las inundaciones ocurren a partir de las crecidas y desbordes de los ríos. Las sequías, en cambio, tienen lugar frente a la ausencia de lluvias durante un largo período de tiempo, lo cual afecta las condiciones de vida y la economía de las comunidades. Por lo tanto, al tener dificultades para enfrentar, responder y recuperarse frente a la incidencia de un proceso natural, esas comunidades se vuelven vulnerables.

En la Argentina, las inundaciones se producen en áreas muy diferentes y tienen distintas características, de acuerdo a los cursos de agua y el régimen de precipitaciones. En el litoral fluvial de los ríos Paraná y Paraguay, las inundaciones se producen lentamente y, en los casos más

graves, las aguas pueden cubrir el suelo durante meses. En esas áreas han ocurrido los desastres por inundación más graves del país, como en los años 1982-1983, 1991-1992 y 1997-1998. En todos los casos, el río Paraná aumentó el caudal por encima de lo normal y afectó las ciudades de Resistencia (Chaco), Clorinda (Formosa) Salado y Goya (Corrientes).

Sin embargo, la peor inundación Río Quinto Bañados de Atuel ocurrió entre los meses de abril y mayo de 2003, y afectó a la ciudad de Santa Fe, como consecuencia del desborde del río Salado. En otras áreas del país, como las zonas montañosas y serranas, los desbordes son muy rápidos y están asociados, por lo general, a los aluviones, es decir, desmoronamientos de materiales sólidos de las márgenes y riberas. Un caso reciente de inundación de este tipo fue el ocurrido en la ciudad de Tartagal, provincia de Salta, en febrero de 2009.

Por otra parte la sequía puede definirse como un descenso de precipitaciones en una zona húmeda durante un tiempo prolongado o bien un período sin lluvias. especialmente en áreas de clima árido y semiárido. Estos procesos suelen tener consecuencias más severas que las inundaciones, ya que afectan las actividades económicas de muchas familias rurales que no cuentan con los medios suficientes para recuperarse. Las sequías más recientes ocurrieron durante 2009 en el área conocida como “El Impenetrable”, al oeste de las provincias de Chaco y Formosa. En ese año, se prolongó la estación seca, que afectó la provisión de agua para las personas y el ganado. Además, existen zonas del país donde se alternan ambos extremos hidrológicos, en coincidencia con cambios en las precipitaciones y el caudal de los ríos. Por ejemplo, luego de las inundaciones del Paraná en 1998, se produjo una sequía en 1999, que afectó la producción agropecuaria y ocasionó la bajante del río.

Problemas ambientales la cuestión de la calidad.

La contaminación es el principal problema ambiental relacionado con la calidad del agua. Esto se debe a que muchos cuerpos de agua del país son utilizados, al mismo tiempo, como fuente del recurso y como sumidero de los desechos de las actividades productivas. Cuando el aporte se acumula por años, los ríos pierden la capacidad natural de depurar sus aguas, lo cual afecta la propia sustentabilidad del sistema. Las principales fuentes de contaminación del agua en la Argentina son las actividades industriales, el volcado de residuos cloacales sin tratar, así como las actividades agrícolas.

La contaminación por la actividad industrial La contaminación industrial se observa en los cursos superficiales o aguas subterráneas, que coinciden con áreas de alta concentración de establecimientos y asociadas a las ciudades. Los contaminantes industriales son variados y dependen de la actividad. Así, las industrias metalúrgicas generan desechos con un alto contenido de sustancias químicas, mientras que los frigoríficos producen residuos orgánicos. Las áreas metropolitanas del país han estado ligadas al desarrollo de la actividad industrial, que durante muchos años utilizó los ríos cercanos para el volcado de los efluentes. Los casos más notables de contaminación hídrica superficial se dan en dos grandes ríos que surcan el Área Metropolitana de Buenos Aires: el Matanza-Riachuelo y el Reconquista.

En la Cuenca Matanza-Riachuelo existen unas 4.100 industrias, de las cuales la mayor parte corresponde a curtiembres, frigoríficos y petroquímicas. En la cuenca del río Reconquista, por su parte, predominan las industrias textiles, frigoríficos, químicas y curtiembres. Se estima que, en 2007, existían unas 330 industrias calificadas como de “alto riesgo ambiental”. Otras grandes áreas urbanas del país tienen la misma problemática, como el área metropolitana de Rosario, las zonas cercanas a las refinerías petroquímicas del Puerto San Martín y el Gran La Plata, por la presencia del polo petroquímico de Ensenada.

La contaminación por volcado de residuos.

Las áreas urbanas son escenario de la contaminación hídrica por volcado de efluentes cloacales sin tratar. Esta problemática se vincula a la falta o deficiencia en los sistemas de depuración de las aguas servidas, que llegan a los ríos y lagos. Luego de descargas constantes, la materia orgánica consume el oxígeno disuelto en el agua y afecta las funciones respiratorias de los organismos acuáticos. Los residuos cloacales también pueden influir en la propagación de enfermedades, como el cólera. Solo un pequeño porcentaje de los efluentes cloacales del país reciben algún tipo de tratamiento previo. Por lo tanto, la llegada de estos desechos ha alterado progresivamente la calidad del agua. Este es el caso de las áreas recreativas balnearias que debieron ser clausuradas en Rosario, Formosa, Santiago del Estero, Río Negro y el norte del Área Metropolitana de Buenos Aires.

En el caso de la ciudad de Posadas, provincia de Misiones, un estudio ha detectado la presencia de entre 1.000 y 9.300 coliformes fecales por mm en el río Paraná, frente a la ciudad. La problemática de la contaminación del agua en áreas urbanas se ve agravada porque estos ríos suelen desbordar y provocar inundaciones. En esos casos, los habitantes ribereños son quienes se ven más afectados, ya que no cuentan con la cobertura básica de saneamiento y, por lo tanto, se encuentran expuestos a enfermedades.

La contaminación por la actividad agrícola.

La contaminación agrícola está vinculada con el uso de plaguicidas y fertilizantes, una problemática que se agravó con la expansión del modelo sojero. Los agroquímicos pueden alcanzar la napa de agua subterránea, así como drenar hacia cursos de agua cercanos. Un fenómeno asociado al volcado de estas sustancias con alto contenido de nitrógeno o fósforo es la eutrofización, que suele observarse en lagos naturales o embalses artificiales.

Este proceso genera el crecimiento de algas y otras plantas acuáticas que consumen el oxígeno disponible en el agua. A su vez, la descomposición de los vegetales provoca un aumento en la cantidad de materia orgánica y turbiedad de las aguas. En la Argentina, existen casos de eutrofización, como el lago del dique San Roque, en la provincia de Córdoba, o el embalse Río Hondo, en Santiago del Estero. Entre los cuerpos de aguas naturales, algunos lagos del sur argentino están afectados de eutrofización. Eutrofización de lagos (paso de nutrientes) Al poco tiempo Eutrófico dos por contaminación proveniente de descargas cloacales sin tratar, si bien aún no hay evidencias

La gestión del agua en la Argentina.

La cuestión del agua tiene múltiples facetas, vinculadas a sus usos diversos y los impactos que generan sobre el recurso. La contaminación, las inundaciones, la provisión de agua potable, la industria y el riego, la navegación, la generación de energía hidroeléctrica, la generación de información hídrica, entre otros, requieren atención especial y respuestas adecuadas. Por ello, en la Argentina, la gestión del agua ha estado repartida entre diversos Organismos nacionales, que se ocupaban de aspectos particulares. La situación se hizo aún más compleja con el auge de las privatizaciones, durante la década de 1990, que llevó a la aparición de nuevos actores, como las empresas concesionarias y los entes reguladores.

El carácter federal del país es otra cuestión que se debe tener en cuenta en la gestión del agua. En efecto, la Constitución Nacional reformada en 1994 establece que las provincias conservan el dominio de sus recursos naturales, entre ellos, el agua. Por lo tanto, pese a que la Nación puede dictar los presupuestos mínimos para la gestión de los recursos a los cuales deben atenerse las

provincias, son estas últimas las que definen su manejo y uso. En el caso particular de las aguas superficiales, además, se establece que los ríos navegables, ya sean provinciales, interprovinciales o internacionales, estarán regulados por las normas y disposiciones de la autoridad nacional.

Los principales organismos.

La Subsecretaría de Recursos Hídricos es la autoridad nacional responsable de las políticas hídricas. El organismo fue creado en 1969, para integrar los diversos aspectos de la gestión del agua. Desde entonces, pese a los cambios en sus funciones, ha formado parte

La articulación entre la Subsecretaría y las autoridades de agua provinciales tiene lugar en el Consejo Hídrico Federal (Cohite). La creación del Cohife, en 2002, coincidió con la firma de los Principios Rectores de Política Hídrica, un documento elaborado en forma conjunta y participativa entre las provincias y la Nación, que presenta los lineamientos ambientales y sociales para la gestión del agua. Además, de la Subsecretaría dependen una serie de organismos que atienden cuestiones sectoriales. Entre ellos, se pueden mencionar el Ente de Obras Hídricas de Saneamiento (Enhosa), encargado de financiar y ejecutar obras de provisión de redes de saneamiento básico, como agua potable y cloacas, para áreas que aún no cuentan con el servicio, y el Instituto Nacional del Agua (1xa), un organismo técnico dedicado al estudio, investigación y aplicación de diversos servicios en materias vinculadas al agua; entre ellos, el sistema de alerta temprana que monitorea la Cuenca del Río de la Plata en la Argentina, para prevenir inundaciones.

LAS DESIGUALDADES SOCIALES EN LA ARGENTINA.

“Desde mediados de la década de 1970 se inició en la Argentina un proceso de transformaciones que aumentó la concentración económica y la desigualdad social. En términos generales, diversos factores afectaron las condiciones de vida de la población”.

Durante varias décadas, la Argentina se caracterizó por ser uno de los países de la región con mejores condiciones de vida para su población. Esto se debió, entre otros factores, al proceso de industrialización iniciado en la década de 1930, que aseguró altos niveles de empleo para el conjunto de los trabajadores, y a un sistema educativo ampliamente democratizador, que extendió la ciudadanía al conjunto de la población. Sin embargo, hace al menos tres décadas atrás, esta sociedad con características integradoras inició un proceso continuo de desarticulación. A partir del último gobierno militar (1976- 1983), debido al impacto generado por las políticas neoliberales implementadas en el país, se fueron perdiendo muchos de los derechos ciudadanos conquistados. Los cambios que a nivel mundial comenzaron a imponerse a través de las políticas neoliberales tuvieron un alto impacto en el país. Las medidas aplicadas, así como sus consecuencias, fueron diversas.

Por un lado, la apertura de la economía significó el desmantelamiento de la pequeña y mediana industria nacional, lo cual se tradujo en un marcado aumento del desempleo. Por el otro, se incrementó el endeudamiento externo, a partir de la estatización de la deuda privada por parte del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Otro problema fue el aumento del precio de los alquileres, que dificultó aún más el acceso a la vivienda en las grandes ciudades. Además, la caída del salario real se volvió un impedimento para lograr un ingreso digno, y la educación y salud de excelencia, que caracterizaron al período anterior, comenzaron a verse afectadas por la reducción de la intervención del Estado. Estas cuestiones se tradujeron en un aumento creciente de la desigualdad social en el país, que llegó a su punto máximo y provocó una gran crisis en 2001. En los últimos años, el crecimiento económico permitió mejorar el nivel de vida de la población. No

obstante, una gran parte de la población aún no puede acceder a condiciones mínimas de subsistencia y bienestar.

¿Qué es la desigualdad social?

En las Ciencias Sociales no existe un consenso respecto al concepto de desigualdad social. En este sentido, es un concepto polisémico, es decir, que presenta varios significados, según el ámbito desde donde se aborde su definición. Con la consolidación de la sociedad capitalista, a partir del siglo XVIII, surgieron dos corrientes que han intentado explicar el origen de la desigualdad social: la liberal y la crítica o radical. El debate entre estas corrientes se centró principalmente en dos temas. El primero se relaciona con el origen mismo de las desigualdades sociales.

El segundo se vincula a la relación entre individuo y sociedad. De esta manera, las posturas de ambas corrientes se han visto enfrentadas. Por un lado, para la corriente liberal, el surgimiento y la expansión del capitalismo ha tendido hacia una mayor igualdad social, a partir de las transformaciones impulsadas por la burguesía, como la abolición de la esclavitud y las relaciones de servidumbre, la Declaración de los Derechos del Hombre y mayores libertades políticas. Para el liberalismo, las desigualdades existentes son naturales, producto de las diferentes aptitudes o capacidades de los individuos. Además, esta corriente de pensamiento postula que la sociedad debe estar regulada y organizada por el mercado. Por el contrario, para la corriente crítica, la desigualdad social no es algo natural, sino un producto del desarrollo histórico. Según esta corriente, la expansión del capitalismo y la propiedad privada no aseguran mayores niveles de igualdad social, sino que, por el contrario, generan mayores desigualdades. Por ello, la única forma de superar la desigualdad en una sociedad es a partir de la abolición de la propiedad privada como forma de organización social.

Este debate sobre los orígenes, el desarrollo y la naturaleza de la desigualdad social entre las corrientes liberal y crítica atraviesa el campo de las Ciencias Sociales. De hecho, los diferentes estudios sobre la creciente desigualdad social en nuestro país también dan cuenta de estas tradiciones. En términos generales, es posible señalar que existe desigualdad social cuando una parte de la población no cuenta con las mismas oportunidades que el resto de la sociedad. Esta desigualdad de oportunidades puede estar referida a diferencias en cuanto al ingreso percibido y el acceso a la educación, la vivienda o la salud, entre otros factores

Los principales indicadores de las condiciones de vida.

La desigualdad social es un problema que abarca múltiples dimensiones, por lo cual debe ser analizada en base a varios aspectos de la realidad. No obstante, es posible saber si existen las mismas oportunidades para el conjunto de la sociedad. Para ello, se observa un conjunto de necesidades básicas, como la alimentación, la vestimenta, la salud, la vivienda, entre otras. También es necesario tener en cuenta un conjunto de necesidades indispensables para funcionar socialmente: la educación, la recreación, el acceso a la cultura, etcétera. Para medir las condiciones de vida de la población, se utilizan una serie de indicadores, que son la expresión numérica de alguna dimensión social. Como la medición social implica cuantificar procesos que son muy complejos, es necesario contar con datos que hayan sido elaborados con un método científico. Ningún indicador por sí mismo puede dar una idea acabada del grado de desigualdad de una sociedad. No obstante, en su conjunto, estos indicadores permiten conocer sus tendencias o características más destacadas. Entre los indicadores más conocidos y utilizados se encuentran la distribución del ingreso, el coeficiente de Gini, el Índice de Desarrollo Humano (IDH), y los índices de medición de la pobreza: Línea de Pobreza (1p) y Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI).

La distribución funcional del ingreso.

A lo largo de la historia, cada sociedad organizó el trabajo de forma particular. En la sociedad capitalista, forma actual de organización de la reproducción de la vida humana, la producción se desarrolla a través de dos factores principales que intervienen en el proceso productivo: los dueños de los medios de producción y los asalariados. Los primeros aportan el capital y los segundos, el trabajo a partir de los medios de producción provistos por el capitalista. El resultado del proceso de producción es una cantidad de bienes o servicios que generan ingresos, tanto para el capitalista como para el trabajador.

En ese contexto, el análisis de cómo se distribuye el producto total generado es una de las formas de medir el grado de igualdad dentro de una sociedad.

El producto total -también llamado ingreso nacional- es el valor de todo lo producido en un país a lo largo de un año. El porcentaje del ingreso total correspondiente a cada factor que interviene en el proceso productivo, es decir, el trabajo y el capital, se denomina distribución funcional del ingreso. Para medir el porcentaje del producto total que corresponde al factor trabajo, se debe determinar qué cantidad del ingreso generado se destinó a salarios. A pesar de su relevancia teórica, el análisis de la distribución funcional del ingreso fue relegado en la Argentina desde mediados de la década de 1970 hasta prácticamente desaparecer en los años noventa. De esta manera, los análisis acerca de la apropiación de la riqueza se han centrado en el ingreso personal.

La partición del salario.

La distribución funcional del ingreso-es importante, ya que es una herramienta para identificar y analizar diversos factores relacionados con la acumulación de capital y el crecimiento. Además, representa el modo característico de asignación de la renta nacional entre los trabajadores y los capitalistas. Así, la distribución funcional del ingreso es el instrumento que permite analizar de qué manera el factor capital y el factor trabajo se reparten el ingreso nacional en determinado momento histórico. En la Argentina, uno de los resultados más significativos desde mediados de los años setenta fue el fuerte aumento de la desigualdad en la distribución del ingreso. Durante las últimas tres décadas, la participación del salario en el producto total disminuyó.

Este proceso de incremento de la desigualdad se verificó conjuntamente con una significativa reducción del ingreso medio. Asimismo, esta tendencia indica que la distribución de la riqueza en el país se ha vuelto menos equitativa, es decir, ha sido-una distribución regresiva. En 2002, se produjo el abandono del Plan de Convertibilidad (1991-2001), por el cual un peso argentino valía un dólar, y, en consecuencia, se registró la devaluación de la moneda nacional. A partir de entonces, la producción local mejoró las condiciones de competencia respecto a los productos externos, la industria se reactivó y se puso en marcha un nuevo proceso de sustitución de importaciones. No obstante, se amplió la brecha de los salarios de los trabajadores de diferente calificación y, en particular, entre aquellos pertenecientes a distintas ramas productivas,

En los últimos años, se generaron más puestos de trabajo y la actividad industrial se convirtió en una de las actividades económicas con mayor demanda de mano de obra. En este contexto, el trabajo recuperó peso dentro de la distribución funcional del ingreso; sin embargo, los niveles de equidad para este tipo de distribución siguen sin alcanzar los valores de décadas atrás. Así, por ejemplo, para el año 1974, la participación de los asalariados en el ingreso nacional era del 48%, mientras que, para 1982, apenas representaba el 22% del ingreso total generado en el país. A partir del año 2003, la participación del salario en el ingreso se ha incrementado desde un 22,9% a alrededor del 30% en la actualidad.

El coeficiente de Gini.

Actualmente, uno de los indicadores más utilizados para medir la desigualdad es el coeficiente de Gini. A diferencia del indicador que analiza el producto total, el coeficiente de Gini mide la distribución personal del ingreso, es decir, cómo se reparten los ingresos entre la población. Para saber si la distribución del ingreso dentro la sociedad es equitativa o desigual, se deben comparar los ingresos por estrato. Para ello, se realiza una operación aritmética de la cual se obtiene un valor al que se denomina coeficiente de Gini.

Este coeficiente indica si la distribución del ingreso entre los diferentes estratos sociales es equitativa. Cuando el coeficiente se aproxima al valor 1, la distribución del ingreso es muy desigual, e indica que los estratos más altos de la sociedad concentran la mayor parte de los ingresos. En cambio, si el coeficiente se aproxima a 0, se trata de una distribución más equitativa. Para calcular este coeficiente, se divide a la población en estratos, con igual cantidad de personas cada uno, y se los ordena de manera ascendente de acuerdo al ingreso percibido.

Cuando el total de personas está dividido en cinco estratos, se habla de quintiles de población está dividido en diez estratos, se denominan deciles, De esa manera, cuando se divide a la población en deciles, el primer estrato contiene al 10% de la población con ingresos más bajos y el último decil, al 10% con ingresos más altos. Por lo tanto, la evolución a lo largo del tiempo del coeficiente de Gini permite analizar si entre los miembros de la sociedad hay una tendencia mayor o menor en la desigualdad de ingresos. Además, la distribución del ingreso puede medirse en base a hogares o personas.

En el primer caso, se mide el ingreso promedio del grupo familiar en base al total de la población, En el segundo caso, se tienen en cuenta solamente a aquellas personas que reciben un ingreso por su trabajo y forman parte de lo que se denomina población económicamente activa (PEA). En relación a otros países latinoamericanos, la Argentina era considerada un país con una buena distribución del ingreso. Pero esto cambió, ya que el incremento de la pobreza se verificó por un empeoramiento en la distribución del ingreso. Por ejemplo, al analizar el coeficiente de Gini por región, se registran valores heterogéneos.

El índice de desarrollo humano.

La ONU, a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (pnuD), elabora desde 1990 el Índice de Desarrollo Humano (IDH), un indicador que mide tres aspectos referidos a las condiciones de vida de la población: salud, educación y nivel de vida. Este índice fue creado por el economista pakistaní Mahbub ul Haq y el Premio Nobel de Economía Amartya Sen, entre otros. El IDH constituye una alternativa a las mediciones tradicionales de desarrollo de un país que, por lo general, son insuficientes, ya que solamente consideran al crecimiento económico como el aspecto más importante de la vida de las personas.

Para la dimensión de la salud, se toma como indicador la esperanza de vida al nacer; para el aspecto educativo, los años de escolarización de personas adultas y los años de escolarización previstos para los niños, y para la dimensión económica, el ingreso per cápita, es decir, el total de ingresos generados en un año por estrato de población. Por lo tanto, la combinación de esos tres aspectos permite obtener una referencia para comparar el desarrollo social y económico entre distintos países o regiones. El IDH define un valor mínimo y un valor máximo para cada dimensión, que varían entre 0 y 1, de acuerdo a si las condiciones de desarrollo son bajas o altas, respectivamente.

La pobreza como nueva cuestión social.

A partir de la creciente desigualdad social registrada en América latina, en la década de 1980 las Ciencias Sociales -con notable influencia de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y el Banco Mundial (Bm)- comenzaron a tomar a la pobreza como tema central. Al mismo tiempo, la pobreza se constituyó como uno de los principales problemas a resolver para los gobiernos de la región. De esa manera, comenzaron a definir diferentes políticas sociales y acciones que permitieran medir en profundidad esta cuestión.

El término “pobreza” puede definirse como la situación de aquellos hogares que no logran cubrir las necesidades básicas de sus miembros. Esta situación está asociada a la desnutrición, las precarias condiciones de vivienda, los bajos niveles educativos, malas condiciones sanitarias, entre otras cuestiones. En este contexto, la Cepal creó un método directo para medir las necesidades básicas insatisfechas (NBI) de la población. Los hogares con NB1 son aquellos que presentan, a] menos, una de las siguientes situaciones: Deterioro de la calidad habitacional: la vivienda debe cumplir con condiciones mínimas de habitabilidad y protección para las habitantes. Algunas construcciones, como las piezas de inquilinato, son precarias y no cumplen con esas condiciones mínimas.

Hacinamiento: se refiere a la relación entre el número de personas en una vivienda y el número de cuartos disponibles; cuando hay más de tres personas por cuarto, se habla de hacinamiento. Ausencia de un nivel sanitario adecuado: hace referencia a los hogares que no cuentan con acceso a agua potable y cloacas. o Inasistencia escolar: se considera la falta de acceso a la educación cuando al menos un niño de entre 6 y 12 años no asiste a la escuela. Insuficiencia de ingresos: este indicador está relacionado con la incapacidad para generar ingresos y subsistir económicamente.

El método indirecto para la medición de la pobreza La pobreza es una temática central en el análisis de la situación social de los países. Por eso, actualmente, también se utiliza un método indirecto para medirla. Este método consiste en establecer un umbral de ingresos —o línea de pobreza (LP) que representa el valor mínimo de todos los bienes y servicios necesarios para el desarrollo personal y la convivencia en sociedad. Se trata de un método que mide el ingreso familiar para identificar los sectores de la población que pueden comprar determinada cantidad de bienes y servicios. A partir de esta metodología, un hogar es considerado pobre si su ingreso —es decir, la suma de todos los ingresos percibidos por todos sus miembros- no le permite adquirir los bienes y servicios que garanticen una subsistencia mínima. Este enfoque de medición de la pobreza basado en el ingreso ha tenido una larga tradición en Gran Bretaña y los Estados Unidos hacia fines del siglo xix.

Asimismo, dentro de esta perspectiva, algunos adoptan un criterio de pobreza absoluta y otros, en cambio, trabajan con un criterio de pobreza relativa. La noción de pobreza absoluta hace referencia a la existencia de un núcleo básico de necesidades insatisfechas que indican la condición de pobreza en cualquier contexto y momento histórico. Este método es el más difundido y se utiliza para medir oficialmente la pobreza en países como México, Uruguay, Chile y los Estados Unidos. En cambio, el criterio de pobreza relativa postula que las necesidades de los seres humanos no son estáticas, sino que varían de acuerdo con los cambios sociales y la oferta de determinados productos en un contexto particular. En cualquier caso, la pobreza relativa siempre depende del nivel general de ingresos. Este criterio es utilizado en los países de la Unión Europea, donde se considera pobres a aquellas personas cuyos ingresos no alcanzan el promedio del continente.

Por lo tanto, la diferencia entre lo absoluto y lo relativo no estaría dada por la pobreza, sino que son interpretaciones de la manera en que se forman socialmente las necesidades. En la Argentina, hasta el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas de 2001, la pobreza era medida a través del método directo o de NBI. Sin embargo, el país siguió el ejemplo de la mayoría de los países del continente y terminó adoptando el método indirecto, basado en el análisis del ingreso. La adopción de este método es beneficiosa, ya que permite identificar las situaciones de pobreza reciente, es decir, aquellos hogares que satisfacen sus necesidades básicas pero que, por motivos circunstanciales, han visto reducidos sus ingresos a un nivel menor que la línea de pobreza. Esta metodología también es utilizada oficialmente por la Cepal, que realiza estimaciones periódicas de la pobreza en distintos países de la región. De esa manera, la adopción de la misma metodología por parte de todos los países latinoamericanos permite mayores niveles de comparación, intercambio y cooperación estadística.

¿Cómo se miden la pobreza y la indigencia en la Argentina?

En la Argentina, las estimaciones sobre pobreza e indigencia se obtienen a partir de los datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), que releva los ingresos de la población. La línea de indigencia se calcula en base al costo de la Canasta Básica de Alimentos (CBA), es decir, el conjunto de bienes que satisfacen las necesidades nutricionales mínimas de una persona u hogar, según los requerimientos calóricos diarios por sexo y edad. El monto de esta CBA se calcula con los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrados mensualmente por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Se considera que una persona u hogar es indigente si su ingreso no llega a cubrir la CBA. Por otro lado, la línea de pobreza se establece al ampliar estas necesidades e incluir bienes y servicios básicos no alimenticios, como vestimenta, transporte, educación y salud.

El conjunto de estos bienes y servicios, que cubren las necesidades alimenticias y no alimenticias mínimas, recibe el nombre de Canasta Básica Total (car). El componente no alimenticio de la CBT se calcula de forma indirecta al aplicar un coeficiente a la cBa. Se considera que una persona u hogar es pobre si su ingreso no llega a cubrir la cBT. La pobreza y la indigencia por regiones La pobreza y la indigencia no son homogéneas en todas las regiones del país. Esto se debe a las distintas condiciones de vida de la población urbana en cada región.

Por ejemplo, en la región del Noreste, conformada por las provincias de Corrientes, Formosa, Chaco y Misiones, se observan índices de pobreza e indigencia superiores al promedio de los centros urbanos de la Argentina. Lo mismo sucede con la región del Noroeste, comprendida por las provincias de Tucumán, Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero.

Asimismo, la región de Cuyo (Mendoza, San Juan y San Luis) y la Patagonia (Neuquén, Chubut, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego) presentan índices más bajos que el promedio. En la región Pampeana (Córdoba, Santa Fe, La Pampa y Buenos Aires) y el Gran Buenos Aires, donde se concentra gran parte de la población total del país, los índices de pobreza e indigencia se asemejan al promedio nacional.

Las diferencias regionales

Las diferencias en cuanto a la incidencia de la pobreza y la indigencia a lo largo de la Argentina corresponden, entre otros factores, a la desigual distribución de la población, las actividades productivas y la infraestructura de servicios de cada región. De esta manera, cuando se habla de pobreza en la Argentina, se deben tener en cuenta las diferencias regionales que existen en términos de desigualdad social. La desigualdad social se relaciona principalmente con la

pauperización de las condiciones de vida, es decir, el proceso de empobrecimiento de la población, que se vincula con el crecimiento de los índices de desnutrición y mortalidad infantil.

El Estado tiene un rol muy importante en la lucha contra la pobreza y debe garantizar mayor igualdad de oportunidades para todos los habitantes. Sin embargo, los cambios ocurridos en los principales mercados urbanos de trabajo, han generado desigualdades regionales en la estructura social del país. Las diferencias en los niveles de pobreza e indigencia en las regiones del Noreste y Noroeste con respecto a otras partes del país, son históricas. Por ello, los criterios federales de distribución de la renta nacional por provincias deberían ayudar a moderar esas diferencias, a fin de lograr un mayor nivel de igualdad en toda la población del país.

Los factores asociados a las condiciones de vida.

Las condiciones de vida son uno de los elementos centrales a la hora de caracterizar a una población, principalmente cuando están asociadas a situaciones de pobreza y precariedad económica. Por ello, el análisis no debe estar centrado en un único aspecto, sino considerar diferentes factores asociados, como el trabajo, la educación, la salud y la vivienda. Estos factores son indispensables para obtener información sobre las condiciones reales de vida de la población. El trabajo constituye uno de los principales instrumentos de integración social.

Por ello, la recomposición del mercado laboral durante los últimos años es un indicador positivo respecto a otros momentos que atravesó el país. La generación de puestos de trabajo, así como su calidad, son condiciones fundamentales para un mejor desarrollo de la sociedad. En este sentido, la caída en los niveles de desempleo ha sido continua. En décadas anteriores, el desempleo llegó a afectar a Casi una cuarta parte de la población económicamente activa del país. En la actualidad, los índices de desempleo no alcanzan los dos dígitos, es decir, son menores al 10% (FIG.8). Si bien sigue siendo un valor alto, es significativamente menor al de una década atrás, cuando la Argentina atravesó una de sus más graves crisis económicas.

La educación también es otro de los factores asociados. En este sentido, la escuela cumple un rol fundamental como espacio de integración social. La educación pública argentina fue un modelo para los países de la región. Sin embargo, las políticas de privatización de la década de 1990 y las sucesivas reformas en sus distintos niveles, tuvieron un gran impacto en la educación y la estructura social. Otro factor fundamental entre las condiciones de vida de la población es la salud. La atención pública y gratuita, como factor asociado al bienestar de los habitantes, garantiza el acceso al cuidado de la salud.

Sin embargo, el sistema de salud fue otro de los sectores afectados por las políticas neoliberales implementadas durante las últimas décadas. Por último, la posibilidad de acceso a la vivienda es otro de los factores de importancia a la hora de evaluar las condiciones de vida. Es fundamental tener en cuenta que este aspecto se refiere tanto al acceso a la vivienda, como espacio físico, como al conjunto de servicios y condiciones necesarios para vivir en la ciudad; por ejemplo, transporte, áreas de esparcimiento, medio ambiente, entre otros. Sin embargo, para las poblaciones con mayores problemas habitacionales, acceder a una vivienda digna es sumamente difícil, debido a la escasa disponibilidad de tierras, el alto costo de la construcción y la falta de financiamiento.

Una visión integral de los factores asociados.

Los factores asociados a la calidad de vida de la población tienen resultados diversos, que son relevantes para las políticas y las decisiones públicas. Además, las tendencias de comportamiento de la población, afectadas por diversos factores, como los patrones de consumo, los avances tecnológicos y las políticas ambientales, influyen en la presión sobre el espacio y los

ecosistemas. Estas tendencias también inciden sobre parámetros económicos como el ahorro, la inversión y la productividad. Por ello, los comportamientos de la población presentan varios puntos de interés para quienes toman decisiones sobre políticas públicas.

La satisfacción de estas necesidades implica un marco ambiental sano, así como modelos de desarrollo económico y tecnológico basados en el desarrollo humano. Durante las últimas décadas, tanto en la Argentina como en otros países del continente, el crecimiento urbano dio lugar al surgimiento de periferias pobres, que expresan las condiciones de desigualdad en el territorio. Así, la ausencia de políticas de vivienda generó un déficit habitacional que afecta a muchos habitantes. De esa manera, el conjunto de factores asociados permite tener una visión más integral de las condiciones de vida de la población, que no se restringen solamente a la medición de algunos índices. Si bien estos índices son herramientas muy importantes, también es necesario tener en cuenta aquellos factores asociados al desarrollo de la vida en condiciones dignas, que cambian a lo largo del tiempo. Estas condiciones están vinculadas con la justicia y la inclusión social, que garantizan que todas las personas tengan las mismas oportunidades y puedan acceder a los recursos necesarios para vivir bajo condiciones normales.

LA DIFERENCIACIÓN Y DESIGUALDAD REGIONAL EN LAS CONDICIONES DE VIDA

“Las políticas implementadas durante la década de 1990 acentuaron las diferencias regionales en las condiciones de vida del país. Pero, a medida que aumentaban las desigualdades sociales, también crecía la resistencia de distintos sectores de la sociedad, En este contexto, surgieron diferentes movimientos sociales urbanos y rurales”.

Durante el proceso de consolidación del capitalismo en la Argentina, es posible distinguir, al menos, tres períodos históricos, según el tipo de vínculo de la economía local con el mercado mundial. El primer período se extendió desde fines del siglo XIX hasta principios del siglo XX (1880-1930) y se caracterizó por la implementación de una economía agroexportadora basada en la renta de la tierra y la demanda externa de cultivos. Durante esa etapa, la Pampa Húmeda fue el centro del desarrollo económico del país. El segundo período (1930-1976) fue escenario de un modelo de industrialización basado en la sustitución de importaciones y, a diferencia del período anterior, orientado hacia el mercado interno.

El desarrollo industrial fue dando forma a grandes centros urbanos, localizados generalmente en la zona central del país, a los cuales llegaba una creciente masa de trabajadores asalariados. La primera parte de este segundo período estuvo caracterizada por esos procesos de migración interna, que se evidenciaron en el crecimiento periférico de las ciudades más importantes y delinearon procesos de urbanización informal, como las “villas miseria”. A su vez, las demandas de los sectores asalariados fueron canalizadas a través del Estado. La industrialización redefinió la matriz distributiva del ingreso en favor de las clases populares.

Sin embargo, en un contexto de crisis mundial del capitalismo, la industrialización sustitutiva mostró límites internos, que dieron lugar a un giro conservador a partir de dictaduras militares que aplicaron políticas neoliberales en todo el continente. Así, se dio inicio al tercer período, que se extendió entre 1976 y 2001, y estuvo caracterizado por la implementación de un régimen basado en la valorización financiera que llevó adelante un proceso de desindustrialización, centralización de la economía y concentración de la producción y el ingreso. En este último período, cobraron visibilidad las luchas y resistencias de un conjunto de movimientos sociales que se enfrentaron a las políticas de exclusión social implementadas en aquellos años.

La desigualdad social urbana y rural.

El crecimiento de la tasa de urbanización es una tendencia general en la mayoría de los países modernos. Esto significa que la población de estos países se agrupa en torno a pequeñas, medianas y grandes localidades. Como ya vimos, en la Argentina, la población urbana se refiere al conjunto de habitantes que vive en localidades de 2.000 habitantes o más. De acuerdo con el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas del año 2010, la población urbana constituye alrededor del 90% de los habitantes del país. Como se puede observar en el mapa de esta página, casi la mitad de la población urbana se concentra en la región pampeana y el Gran Buenos Aires.

Por otro lado, la población rural incluye a los habitantes que viven en localidades de menos de 2.000 habitantes. En este tipo de población, se pueden distinguir dos categorías: la población rural agrupada y la dispersa, que generalmente reside en viviendas aisladas o pequeños caseríos. Durante los últimos años, parte de esta población residente en pequeños poblados emigró hacia las ciudades en busca de mejores condiciones de vida. Sin embargo, en muchos casos, esas expectativas no se cumplieron, y pasó a engrosar las periferias pobres de los grandes centros urbanos.

La diferenciación y desigualdad regional.

La dinámica de acumulación del capitalismo en la Argentina ha dado lugar a un constante proceso de desarrollo regional desigual. Durante las últimas décadas, esta tendencia se ha profundizado y generó una creciente diferenciación regional. Para analizar el desarrollo desigual de las regiones, es necesario considerar el producto bruto geográfico (PG). Este valor mide la producción de bienes y servicios finales atribuibles a factores de producción, según provincias o regiones. Al observar el PBG se puede afirmar que existe una importante desigualdad regional en la distribución de este producto en el país. Casi la mitad del producto bruto nacional proviene de la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Al sumar la región pampeana, se observa que ambas regiones alcanzan el 75% del producto bruto del país. Para la teoría liberal, la diferenciación regional se presenta cuando existen obstáculos para el flujo y la localización del capital y el trabajo. Según este enfoque, se trata de desequilibrios transitorios que pueden ser regulados por el propio mercado. Sin embargo, la desigualdad regional es el resultado estructural del desarrollo de la acumulación capitalista. Para comprender los procesos de desigualdad regional, es necesario analizar la estructura productiva de cada provincia y su inserción en la economía nacional.

En este sentido, la primarización productiva que se observa en la Argentina durante las últimas décadas, acompañada por el aumento de los precios internacionales de los commodities, es un elemento que permite comprender por qué algunas regiones mantienen altos niveles de desigualdad social, a pesar de mostrar un crecimiento económico. Es el caso de aquellas provincias donde la producción primaria (sobre todo los complejos oleaginoso, minero y frutícola) adquiere un importante peso relativo en su economía, pero en la mayor parte de los casos presentan índices de desempleo superiores al promedio del país. Esto se debe a que se trata de actividades de poca complejidad y bajo valor agregado, por lo que no incorporan mano de obra a gran escala. Por el contrario, las actividades vinculadas al sector manufacturero generan una mayor cantidad de puestos de trabajo, sobre todo aquellas actividades intensivas en el uso de mano de obra. La concentración geográfica de estas actividades ayuda a comprender la persistente desigualdad regional del país.

La desigualdad regional persistente.

La reconversión productiva iniciada a partir de la última dictadura militar, estuvo caracterizada por un proceso desindustrializador con eje en la valorización financiera. Estas características fueron profundizadas durante la década de 1990. Aquellos años fueron escenario de un proceso de modernización excluyente sobre algunas regiones del país. El crecimiento económico en esta década se afianzó sobre la reducción de costos laborales y la expulsión demográfica. Estos mecanismos de ajuste tuvieron fuertes implicancias sobre las condiciones de vida de la población.

Las políticas implementadas a nivel nacional transformaron las estructuras productivas provinciales e implicaron mayor presión sobre los sectores de pequeños y medianos productores. Se eliminaron las ventajas regionales, como los precios diferenciales a favor de las provincias, y se desreguló el mercado de servicios. A nivel provincial, se aplicaron ajustes de gasto público y hubo una reestructuración y achicamiento del empleo público.

De esta manera, se produjo un crecimiento económico nacional localizado en los espacios donde existía infraestructura de transporte, servicios y comunicaciones, como en las grandes capitales, en general, y Ciudad de Buenos Aires, en particular. Así, las restantes regiones del país quedaron relegadas. En la última década del siglo xx, la mayor parte de las provincias del país expulsaron población hacia otras provincias. Esto fue notable en el sea (Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones), por el rol de estas provincias como proveedoras de fuerza de trabajo para procesos extrarregionales, como la zafra en Tucumán. También, en la provincia de Mendoza, se advirtió un proceso de expulsión demográfica, acompañado por cambios en la producción frutícola. La provincia de Santa Fe, en la región pampeana, y las provincias patagónicas de Chubut y Rio Negro, también sufrieron consecuencias emigratorias similares.

Las condiciones de vida en las distintas regiones.

Al tener en cuenta la desigualdad regional y analizar geográficamente las condiciones de vida de la población, se encuentran diferencias notables. La población en condiciones de pobreza en la región del NEA es muy superior a la del resto de las regiones. En el caso del NEA, durante el primer semestre del año 2003, el 73,4% de la población era pobre, mientras el promedio nacional para el total de aglomerados urbanos alcanzaba el 54%. También, la región del NOA presentaba valores superiores a la media del país, donde la población bajo la línea de pobreza representaba el 64,8% del total. No obstante, la región patagónica se encontraba muy por debajo de ese promedio, con un 39,2% de población pobre. Al observar la evolución durante los últimos años, se aprecia una evidente caída en los índices de pobreza en todo el país. Sin embargo, la desigualdad regional se mantiene. Esto significa que, para el segundo cuatrimestre de 2010, el índice de pobreza en el NEA (18,5%) continuaba siendo cinco veces mayor que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (4,2%), tres veces mayor que en la Patagonia (5,8%) y dos veces mayor que en la región pampeana (9,6%) (FIG. 5).

El mercado de trabajo.

El mercado de trabajo se refiere al ámbito de intercambio donde confluyen dos factores: la demanda y la oferta de trabajo. También se denomina mercado laboral. Para analizar el comportamiento y las características del mercado de trabajo, es necesario describir algunos indicadores utilizados usualmente. Por un lado, la tasa de empleo indica el porcentaje del total de la población que se encuentra ocupada. Asimismo, es importante distinguir la población total de la

población económicamente activa (PEA), que se refiere a aquellas personas que participan activamente en el mercado laboral, ya sea porque tienen o buscan empleo.

La tasa de actividad es el porcentaje que representa la PEA sobre el total de la población, e indica el nivel de demanda del mercado laboral. Por otro lado, la tasa de desempleo mide el porcentaje de la PEA que no consigue trabajo. Otro indicador es la tasa de subocupación, que se refiere al porcentaje de ocupados que trabajan menos de 35 horas semanales, aunque desearían trabajar más pero no pueden hacerlo por causas involuntarias. En cuanto a los indicadores de desocupación y subocupación, las regiones presentan valores dispares. Así, la región pampeana y el Gran Buenos Aires presentan altas tasas, aunque son las regiones con el mayor volumen de actividad económica del país: Por lo tanto, esas tasas de desocupación y subocupación dan cuenta de un mercado laboral activo, con una importante población económica que demanda empleo.

En estas regiones, las tasas de empleo son superiores a las del resto del país. Esto significa que el porcentaje relativo de población ocupada sobre el total de habitantes es mayor. Por el contrario, en las regiones donde la tasa de desocupación y subocupación es menor, como en el caso del NEA, también disminuye la tasa de empleo, ya que la presión de la PEA sobre el mercado de trabajo es menor. Por último, también es notoria la diferencia regional en cuanto al nivel de los salarios percibidos. En este factor influye el costo de vida, que difiere de acuerdo a las regiones. Por lo tanto, analizar el mercado laboral es importante para determinar el grado de desigualdad distributiva que se registra en la población.

Los movimientos sociales como emergentes de la desigualdad social.

El proceso de reestructuración económica, política y social iniciado a mediados de la década de 1960, modificó la sociedad argentina de forma significativa. Los cambios en las condiciones de vida de la población se hicieron notar rápidamente a través de la caída de los salarios, el aumento de la pobreza y la pérdida de puestos de trabajo. En ese contexto, surgieron respuestas colectivas desde la sociedad civil que, muchas veces, rebasaron los canales institucionales habituales, como los partidos políticos, los sindicatos, etcétera. Estas acciones colectivas con alta participación popular, generalmente agrupadas en torno a alguna reivindicación específica, fueron conocidas como movimientos sociales.

Durante la década de 1980, todas estas acciones se vieron muy influenciadas por la transición democrática, donde las nuevas formas de participación ciudadana cobraron un lugar destacado. Así, comenzaron a surgir diferentes movimientos sociales alrededor de cuestiones que afectaban directamente a la vida de los sectores populares. Por ejemplo, frente al marcado aumento de los impuestos en los partidos del Gran Buenos Aires, durante la primavera de 1982, tuvo lugar un movimiento vecinal que llegó a protagonizar amplias manifestaciones en la zona sur y oeste, conocidas con el nombre de “vecinazos”. Con la desregulación de los alquileres y su consiguiente incremento, se extendieron las tomas de terrenos en varias provincias del país. Estas tomas se convirtieron en una estrategia de los sectores populares para solucionar los problemas de acceso a la vivienda. En cuanto al movimiento obrero, la reapertura de las elecciones en los sindicatos, clausuradas por casi diez años durante la dictadura militar, dio lugar a una renovación de las conducciones sindicales.

En varios gremios, esto se logró a partir de un discurso antiburocrático que apostaba a la participación de los trabajadores. Por su parte, el movimiento de derechos humanos se enfrentó a la represión del régimen militar y protagonizó una dura batalla contra los crímenes de lesa humanidad llevados a cabo durante el gobierno de facto. Allí, tuvieron un rol fundamental organismos como la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, el Servicio Paz y Justicia (Serpaj), la Asamblea

Permanente por los Derechos Humanos (APDH), el Movimiento EcuMénico por los Derechos Humanos (MEDH), Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, y Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. Ya en democracia, fueron el sostén de la lucha por la memoria, la verdad y la justicia.

Los movimientos sociales en la década de 1990.

Durante el gobierno de Carlos Menem (1989-1999), la aplicación del decálogo promovido por el llamado “Consenso de Washington” se tradujo en la no intervención del Estado en la economía y su reorientación hacia un “Estado mínimo”, mientras se controlaba el gasto público y se promovían las privatizaciones de empresas públicas. Esta década estuvo atravesada por dos ciclos de protesta. En el primer ciclo, signado por la resistencia a la desarticulación del Estado, se destacaron las luchas contra las privatizaciones de las empresas estatales. Así, comenzaron las primeras puebladas en distintos puntos del país, que convocaron a empleados públicos, comerciantes, estudiantes y docentes. Una de estas puebladas se llevó a cabo en Santiago del Estero, en 1993, contra el ajuste fiscal en esa provincia. Se denominó “Santiagazo”, y dio comienzo a un período de intensificación de la movilización popular en el país.

Por entonces, también se destacó la conformación de una nueva central sindical, la Central de Trabajadores de la Argentina (cra). Esta central obrera nació a partir de la separación de un grupo de sindicatos de la Confederación General del Trabajo (car), que estaban disconformes con la política adoptada frente al gobierno de Carlos Menem. La CTA se constituyó con una gran presencia de trabajadores estatales, docentes y empleados públicos. El segundo ciclo de protesta se abrió a mediados de la década de 1990 y se relacionó con los efectos del nuevo modelo económico. Como vimos, una de las privatizaciones paradigmáticas fue la de la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), en el sector de hidrocarburos, en torno a la cual se constituía la vida de numerosos pueblos del interior del país. Durante el año*1996, con eje en las localidades de Plaza Huincul y Cutral-Có, en la provincia del Neuquén, los trabajadores despedidos de la empresa petrolera protagonizaron puebladas, que inauguraron los cortes de ruta conocidos como “piquetes”. De esa manera, los piquetes tomaron repercusión nacional y, con ellos, un sector de trabajadores que iría ganando peso en ese período: los desocupados. La experiencia de los cortes de ruta se replicó rápidamente en todo el país y dio origen a los primeros movimientos de desocupados.

Los movimientos sociales y la crisis de 2001.

En 2001, luego de casi tres años de recesión económica, la crisis llegó a su punto máximo. Durante la revuelta popular del 19 y 20 de diciembre, bajo la consigna “Que se vayan todos”, miles de personas protestaron en las calles a pesar del Estado de sitio impuesto por el entonces presidente Fernando de la Rúa, quien finalmente presentó su renuncia. Las movilizaciones tuvieron lugar en la Plaza de Mayo, en la Ciudad de Buenos Aires, y se reprodujeron en muchas otras ciudades del país. De acuerdo con los datos del Indec, en el año 2002, el índice de desocupación para el total de aglomerados urbanos del país era del 21,5%, mientras que más de la mitad de la población (57,5%) se encontraba en situación de pobreza y casi una cuarta parte (27,5%) en condiciones de indigencia. En ese contexto, se multiplicaron las asambleas barriales, con especial fuerza en la Ciudad de Buenos Aires, pero también en otras ciudades, como Córdoba, Rosario, Mar del Plata y Mendoza.

El movimiento asambleario constituyó un renovado intento por generar prácticas de participación democrática en el marco de una crisis de representatividad general de las instituciones y, particularmente, de los partidos políticos. La forma de organización de las asambleas se constituyó a través de los principios de horizontalidad y la acción directa. Las acciones que llevaron a cabo

fueron múltiples y comprendieron la realización de ollas populares, la implementación de proyectos de autogestión (proyectos productivos, redes de comercialización), acciones culturales (festivales, charlas, publicaciones) y acciones de protesta (apagones, cacerolazos).

De esta manera, las asambleas barriales expresaron la emergencia de un nuevo protagonismo en la vida política. Durante su periodo de auge, en el año 2002, se estima que existían un centenar de asambleas barriales en la Ciudad de Buenos Aires, 70 en el conurbano bonaerense, 17 en Córdoba, 12 en Santa Fe, cinco en Mar del Plata y tres en Mendoza. Sin embargo, con el correr de los meses, la participación fue disminuyendo.

Por otra parte, si bien fueron un fenómeno anterior, las empresas y fábricas recuperadas por sus trabajadores cobraron una mayor visibilidad a partir de la ola de movilizaciones populares iniciada en diciembre de 2001. Ante la deserción empresaria en numerosos establecimientos, los propios trabajadores optaron por salvar sus fuentes de trabajo a través de la ocupación y puesta en producción de las fábricas y empresas. El movimiento de fábricas y empresas recuperadas comenzó a tener trascendencia, no solo por su magnitud, sino también por las distintas modalidades autogestionarias implementadas durante su desarrollo.

En suma, el ciclo de luchas iniciado una década atrás contra las medidas neoliberales, tuvo como protagonistas a los movimientos sociales, que implementaron distintos tipos de resistencia contra la precarización de la vida. El repertorio de protestas desplegado durante esos años demostró la fuerza y el alcance de la acción colectiva.

Las asambleas ciudadanas.

La consolidación del modelo basado en la explotación no sustentable de los recursos naturales, dio lugar al surgimiento de un conjunto de asambleas ciudadanas en el país. Ante los problemas que implica para la comunidad la instalación de proyectos que dañan el medio ambiente, estas asambleas comenzaron a movilizarse en defensa de la vida de los pueblos y los bienes comunes.

Uno de los principales ejes sobre los cuales trabajan las asambleas ciudadanas es la resistencia a los proyectos de megaminería, impulsados por empresas transnacionales a lo largo de la Cordillera de los Andes. Este tipo de minería a gran escala consume grandes cantidades de agua y energía, por lo que demanda buena parte de los recursos naturales de aquellas regiones donde se emplaza. A su vez, el proceso productivo utiliza sustancias altamente contaminantes, como el cianuro. Así, resulta una de las actividades industriales con mayor impacto sobre el medio ambiente. En 2006, los temas relacionados con el ambiente comenzaron a tener mayor visibilidad a partir del conflicto originado por la localización de la pastera Botnia sobre el río Uruguay. Ese año, con motivo de la cumbre de presidentes del Mercosur realizada en la Ciudad de Córdoba y a modo de contracumbre, nació la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC), cuyo primer encuentro se realizó en Colonia Caroya, en la provincia de Córdoba. La UAC es un espacio que articula a diferentes movimientos sociales, asambleas de todo el país y vecinos autoconvocados, bajo la consigna: "Contra el saqueo, la destrucción y la contaminación".

Los Movimientos de Trabajadores Desocupados.

A medida que se transformaba la situación social, política y económica de la Argentina, nuevos actores sociales adquirieron relevancia. La aparición de los desocupados como sujeto social expresó el agotamiento de un modelo de sociedad que había comenzado a resquebrajarse en el último cuarto de siglo. La falta de trabajo perjudicó de distintas formas a quienes iban sufriendo la desocupación. Por un lado, significó la pérdida del salario y la dificultad para sostener los hogares. Por otro lado,

repercutió en la dignidad del desocupado, acostumbrado a vivir en una sociedad para la que el trabajo era un mecanismo de integración social. Así, el desempleo dejó de ser un problema social para convertirse en un problema individual.

La posibilidad de resolver colectivamente el desempleo es uno de los elementos que ayudan a comprender el surgimiento de numerosas asambleas de desocupados a lo largo del país, frente al desmantelamiento de la estructura salarial. Uno de los rasgos más notables de este proceso es que pocas veces fueron hombres quienes tomaron la iniciativa de convocarse para enfrentar el problema del desempleo. En la mayor parte de los movimientos de desocupados, fueron las mujeres quienes cumplieron ese rol.

En 1996, organizaciones de desocupados de distintos puntos del Gran Buenos Aires realizaron una movilización a Plaza de Mayo, en lo que se conoce como el origen formal del Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD). En los MTD del conurbano bonaerense participaban hombres, mujeres y jóvenes, que muchas veces no tenían una experiencia anterior de empleo, pero se reconocían como trabajadores desocupados. En sus orígenes el MTD no era una organización única. En los hechos, era un conjunto heterogéneo de comisiones barriales que se habían ido desarrollando con el objetivo de agrupar a los desocupados.

Con el tiempo, los MTD fueron teniendo cada vez más presencia en las protestas a lo largo de todo el país que expresaban la resistencia de los sectores populares a las políticas neoliberales. La generalización de la práctica de los piquetes implementada por los desocupados dio origen a su denominación como movimientos piqueteros". De esta manera, los MTD, a partir de su propia necesidad de supervivencia, construyeron la capacidad de acción. Sin embargo, muchas de estas organizaciones desplegaron un extenso trabajo por fuera del corte de rutas, con el objetivo de reconstruir los lazos sociales destruidos por la pauperización de las condiciones de vida en los barrios populares.

En diversas oportunidades, las protestas fueron reprimidas por el gobierno. En junio de 2002, debido al corte del Puente Pueyrredón que une la Ciudad de Buenos Aires con el partido de Avellaneda, la represión dejó como saldo la muerte de dos militantes: Darío Santillán y Maximiliano Kosteki. Este episodio, conocido como la "Masacre de Avellaneda", fue repudiado masivamente por la sociedad y, como consecuencia se adelantó el llamado a elecciones para elegir nuevo gobierno.

La construcción territorial.

El trabajo comunitario es una de las principales características de los movimientos de desocupados. La apertura de comedores y merenderos, talleres de capacitación, y espacios culturales y recreativos, hasta el más reciente desarrollo de escuelas populares para jóvenes y adultos, dan cuenta de la construcción comunitaria en los barrios. No obstante, uno de los principales desafíos de los movimientos de desocupados es recuperar la cultura del trabajo. Con el objetivo de brindar una salida laboral, muchos de estos al Estrada 50. movimientos implementaron proyectos productivos que, además de plantear estrategias de supervivencia para salir de la crisis, pusieron en práctica formas solidarias y autogestionarias de organización del trabajo.

Un caso emblemático es el de la Unión de Trabajadores Desocupados (UTD) de General Mosconi, Salta. A partir de la privatización de YPF, los desocupados comenzaron a dar forma a huertas comunitarias, emprendimientos agrícolas, ladrilleras, un basurero ecológico para reciclar plástico y vidrio, así como un taller de herrería, donde también se brinda capacitación en el oficio. Además, administran una clasificadora de porotos, que trabaja para una empresa de la zona, y llevan

adelante un aserradero, el cual aprovecha la madera descartada por los desmontes que, de otra forma, sería quemada.

En 2011, inauguraron una Universidad Popular, donde se dicta formación en contabilidad, construcción e informática, entre otras áreas. Al sur del Gran Buenos Aires, en la localidad de Monte Chingolo, se encuentra Roca Negra, un espacio recuperado en el que desarrolla su trabajo el mrp de Lanús. En el predio de varias hectáreas, construido sobre el casco de una ex fábrica del cinturón industrial bonaerense, funcionan los proyectos productivos de herrería, taller de serigrafía e imprenta, junto a emprendimientos culturales y recreativos para niños. Allí también tienen lugar cooperativas de trabajo dedicadas a la construcción y, en 2008, se inauguró un bachillerato para que jóvenes y adultos puedan terminar los estudios secundarios. En la actualidad, con el asesoramiento de arquitectos y estudiantes universitarios, se están proyectando un polideportivo y una plaza dentro del predio.

El rol de las mujeres en los movimientos sociales.

A lo largo de las últimas décadas, una de las características más salientes de los movimientos sociales fue el protagonismo asumido por las mujeres, así como también la participación de jóvenes en general. Esto no resulta sorprendente si se tiene en cuenta que ambos sectores fueron los más castigados por el nuevo modelo de sociedad impuesto por el neoliberalismo. En parte, es una de las razones que explican la presencia de estos sectores en el amplio conjunto de movimientos sociales emergentes en el país. Al igual que en toda América latina, las mujeres de los sectores más pobres, tanto del campo como de la ciudad, fueron organizándose para contrarrestar las consecuencias de las transformaciones estructurales que se imponían en el continente. En un contexto de deterioro de las condiciones de vida, muchas mujeres debieron tomar la iniciativa ante la necesidad de responder por todo el entorno familiar.

Por otro lado, fueron décadas en las que se redefinieron los criterios que relegaban a las mujeres a un rol pasivo dentro de la sociedad y surgieron nuevos modelos de familia en los que las mujeres representan el vínculo principal de unidad y continuidad. Así, comenzó a notarse una mayor presencia de las mujeres en ámbitos que, hasta ese momento, se consideraban naturalmente ligados a los hombres, como los sindicatos, partidos políticos y movimientos sociales.

A su vez, la creciente participación de las mujeres en el mercado de trabajo ayudó a redefinir su papel en la sociedad. Por otro lado, en relación a los derechos humanos, fueron las Madres de Plaza de Mayo quienes inauguraron una nueva modalidad en la participación política de las mujeres. En los años de la dictadura, enfrentaron al gobierno militar para exigir la aparición de sus hijos desaparecidos. Estas mujeres no se consideraban a sí mismas feministas. Por el contrario, sus estrategias políticas y su solidaridad fueron una extensión de sus papeles familiares tradicionales. En este sentido, el movimiento de derechos humanos fue una clara expresión del nuevo rol de las mujeres en la participación política.

La participación política de los jóvenes.

La fuerte participación juvenil en los movimientos sociales tiene un origen similar al de las mujeres, pero con implicaciones particulares. La posibilidad de ascender socialmente fue desapareciendo y dio lugar a una sociedad en que predominaba la precarización y el individualismo, por ello las nuevas generaciones debieron reinventar sus modos de pertenencia y sus identidades. La falta de empleo y las condiciones de flexibilización laboral afectaron especialmente a los jóvenes, para quienes resultaba cada vez más difícil pensarse dentro de marcos de cierta estabilidad. Ligadas a las transformaciones en el mundo popular, expresiones como el rock barrial cobraron relevancia

como fenómeno cultural, en el cual no solo se resaltaban aspectos del horizonte juvenil, como la marginalidad, sino también componentes contestatarios.

También por esos años, el surgimiento de la agrupación Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (Hijos), integrada en su mayoría por hijos de personas desaparecidas durante la dictadura, significó la aparición de la participación juvenil como continuidad de aquellas luchas que habían llevado adelante sus padres. El protagonismo de la juventud en las expresiones de resistencia al neoliberalismo pudo observarse en las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001, cuando repudiaron en las calles las consecuencias sociales de las políticas de ajuste. Desde entonces, es posible identificar entre las personas jóvenes un desplazamiento de las formas tradicionales de organización y participación política, hacia otro tipo de espacios y prácticas. Estos nuevos espacios suelen rechazar la política como tal, pero renuevan los mecanismos de participación y toma de decisiones.

LA FORMACIÓN Y EL CRECIMIENTO DEL SISTEMA URBANO.

“El sistema urbano argentino ha tenido grandes transformaciones a lo largo del tiempo, Actualmente, se considera que el 90% de la población argentina es urbana. Sin embargo, ese porcentaje esconde realidades muy dispares, desde pequeños pueblos que apenas superan los 2.000 habitantes hasta la Aglomeración Gran Buenos Aires con más de 12 millones de habitantes”.

Algunas de las principales ciudades argentinas se fundaron durante el período colonial. Las áreas que actualmente forman parte del territorio argentino tenían una posición periférica en la organización territorial del imperio español en América del Sur, cuyo centro era Lima, capital del Virreinato del Perú. La ocupación española de esas áreas se inició en el siglo XVI, a partir de tres corrientes colonizadoras.

La primera corriente provino directamente de España, a través del océano Atlántico y el Río de la Plata, y fundó las ciudades de Buenos Aires, Asunción —durante muchos años, la principal ciudad de la región-, Santa Fe y Corrientes. La segunda corriente colonizadora se originó en el Alto Perú —actual territorio de Bolivia-, atravesó la región del Tucumán (que abarcaba los actuales Noroeste y Centro de la Argentina), y fundó las ciudades de Santiago del Estero, San Miguel de Tucumán, Córdoba, Salta, La Rioja, San Salvador de Jujuy y San Fernando del Valle de Catamarca. Finalmente, la última corriente provino de Chile, se instaló en Cuyo y fundó las ciudades de Mendoza, San Juan y San Luis.

Las ciudades en la colonización.

Las ciudades fueron un elemento central en la estrategia territorial de la Corona española para la conquista y colonización de América. Cada ciudad tenía jurisdicción sobre un amplio territorio. Esas jurisdicciones fueron el origen de varias provincias argentinas que, en muchos casos, mantuvieron el nombre de aquellas ciudades. Hacia principios del siglo XVIII, las áreas más importantes desde el punto de vista económico eran aquellas que tenían contacto directo con el Perú y el Alto Perú; es decir, las ciudades del actual Noroeste argentino, así como las misiones jesuíticas del Paraná y el Uruguay, distribuidas en territorios que actualmente pertenecen a Paraguay, Brasil y la provincia argentina de Misiones. También, la región de Cuyo, con intensos vínculos comerciales con Chile y el puerto de Buenos Aires, creció aceleradamente durante los siglos XVI y XVII.

Este esquema presentó importantes transformaciones durante el siglo XVIII. Con la expulsión de los jesuitas, comenzó la decadencia del área de las misiones. Mientras tanto, Buenos Aires crecía aceleradamente, beneficiada por el comercio libre y por su nuevo rol como capital del Virreinato del

Río de la Plata. A partir de la Revolución de Mayo, se fue desintegrando el territorio del antiguo Virreinato. A través de procesos diversos y complejos, Paraguay, Bolivia y Uruguay se convirtieron en repúblicas independientes.

En 1820, se disolvió el gobierno central de las Provincias Unidas y, durante años, las distintas provincias fueron Estados independientes, con gobiernos y ejércitos propios, que frecuentemente se enfrentaron entre sí. Las guerras de Independencia y los conflictos civiles desarticulaban las relaciones comerciales entre las regiones del antiguo Virreinato. En tanto, Buenos Aires fue consolidando su poder económico, basado en la riqueza ganadera y las rentas portuarias, a las que añadió su hegemonía política durante el largo gobierno de Juan Manuel de Rosas (1835-1852).

Las transformaciones en el período agroexportador.

Después de la caída de Rosas, las provincias argentinas se integraron al sistema federal establecido por la Constitución de 1853, aunque Buenos Aires se mantuvo al margen de la Confederación durante casi diez años. En 1862, se reformó la Constitución y el país quedó unificado bajo la hegemonía de Buenos Aires. Luego, en 1880, se federalizó la Ciudad de Buenos Aires y se alcanzó una estabilidad institucional que se mantuvo durante 50 años. En 1930, un golpe militar derrocó al presidente Hipólito Yrigoyen y dio inicio a la alternancia de gobiernos constitucionales y dictaduras militares que caracterizó a la vida política argentina durante gran parte del siglo xx.

Durante este período (1880-1930) hubo un acelerado crecimiento económico basado en la exportación de productos agropecuarios, como carne, trigo y lana. Para que esto fuera posible, las clases dirigentes argentinas debieron resolver dos cuestiones principales: el orden y el progreso. Para lograr el orden era necesario garantizar las condiciones políticas y sociales para la implementación de un determinado modelo de desarrollo económico. Esta cuestión se resolvió con la federalización de la Ciudad de Buenos Aires y a partir de un acuerdo político entre los grupos dirigentes de Buenos Aires y el Interior.

La cuestión del progreso en cambio, implicaba la provisión de los factores básicos de producción —tierra, trabajo y capital— para que ese desarrollo fuera posible. La tierra se obtuvo mediante la expansión de la frontera agrícola a partir de la llamada “conquista del desierto”. A través de la acción militar, el Estado se apropió de extensos territorios que, hasta entonces, se hallaban en manos de los indígenas. La propiedad de esas tierras quedó en poder de un número pequeño de familias, lo cual contribuyó a consolidar el grupo social que luego sería conocido como la “oligarquía terrateniente”.

El trabajo fue aportado por mano de obra inmigrante, en su mayor parte de origen europeo, principalmente españoles e italianos, pero también franceses, irlandeses, suizos, galeses, judíos de Europa central y del Mediterráneo, sirios y libaneses, entre otros. Por su parte, la implementación de la educación pública, gratuita y obligatoria cumplió un rol principal para integrar a esta multitud heterogénea en la economía y la sociedad argentinas, y además contribuyó a generar sentimientos de pertenencia y lealtad a la Nación.

El capital que financió al Estado y a las grandes obras de infraestructura provino, en su mayor parte, del exterior, principalmente de Gran Bretaña. Esta inversión extranjera fue especialmente importante en las áreas del sistema de transporte, como puertos y ferrocarriles, que hacían posible la exportación de los productos agropecuarios y la importación de bienes industriales. Las tarifas diferenciales, combinadas con los bajos aranceles de importación, desalentaron la producción industrial local.

El crecimiento acelerado de las ciudades.

El desarrollo de la economía agroexportadora produjo grandes transformaciones en la organización económico-territorial de la Argentina y en el sistema de asentamientos humanos. La población creció aceleradamente, en gran parte, debido a la inmigración. Durante ese periodo, en los años 1869, 1895 y 1914, se realizaron los primeros censos nacionales, que permitieron analizar el crecimiento de la población y los cambios en el sistema urbano. La concentración de la tierra agrícola en un número relativamente pequeño de propietarios condicionó la distribución espacial de esa creciente población y, en especial, de los inmigrantes, quienes, al no tener acceso a la tierra, se concentraron mayoritariamente en las ciudades del Litoral. Así, hacia 1895, el 25% de la población del país era extranjera, pero esa proporción llegaba al 50% en la Ciudad de Buenos Aires.

Por lo tanto, debido a que la producción primaria de exportación se concentraba en la región Pampeana, esta región tuvo un alto crecimiento demográfico, debido al aporte de la inmigración, mientras en el resto del país el crecimiento fue solo vegetativo. En 1869, la población urbana era un porcentaje menor (27%) pero, en 1914, ya representaba más de la mitad de la población total, con un 53%. En las mayores aglomeraciones argentinas durante ese período, las grandes ciudades del Litoral crecieron más que las ciudades del Interior. Al terminar el período, la población de Buenos Aires se había multiplicado por 25; la de Rosario, por 22, y la de Santa Fe, por 17, mientras que, en Córdoba, Tucumán y San Juan, la población solo se multiplicó entre 12 y 14 veces.

En el interior del país, la excepción fue Mendoza, que creció a un ritmo comparable a las ciudades del Litoral. Además, en la provincia de Buenos Aires, se fundaron ciudades nuevas, como La Plata, para ser capital de la provincia, y Mar del Plata, como principal centro turístico. También, Bahía Blanca mostró un notable crecimiento: en 1869, era un pequeño pueblo y, para 1947, ya era la novena ciudad del país, cuya población se multiplicó 114 veces.

El contexto sociopolítico de 1930-1976.

A partir del golpe militar de 1930, se implementaron distintas políticas conservadoras que procuraron restablecer el orden político vigente antes de 1916. En 1943, sucedió otro golpe militar, aunque de orientación nacionalista. Más tarde, en 1946, Juan Domingo Perón fue elegido presidente, hasta su derrocamiento por otro golpe de Estado, en 1955.

A partir de esa fecha, se desarrolló un período de creciente inestabilidad política, caracterizado por la alternancia de gobiernos constitucionales y dictaduras militares, que desembocó en el golpe militar de 1976. La crisis económica mundial iniciada en 1929, se hizo sentir en la Argentina a partir de 1930. La recesión en los países capitalistas centrales generó una reducción en la demanda de alimentos y materias primas, lo cual puso en crisis al modelo agroexportador. El Estado comenzó a intervenir en algunos aspectos del comercio exterior, a fin de sostener los precios de los principales productos de exportación. Por otra parte, la falta de divisas dificultó la importación de bienes industriales, que aumentaron sus precios.

Esto estimuló un incipiente proceso de industrialización, tendiente a sustituir los productos importados por: otros de fabricación nacional. A partir de 1943, este proceso se convirtió en una política de Estado, profundizada durante el gobierno de Perón. La primera etapa de industrialización estuvo dirigida a la producción de bienes de consumo (alimentos, textiles, etcétera) para el mercado interno y tuvo como protagonistas a pequeños y medianos capitales locales. Al mismo tiempo, los altos salarios y el bajo desempleo garantizaban la fortaleza de ese mercado interno, sin embargo, este modelo económico debió enfrentar diversos problemas. Uno de ellos era la necesidad de insumos (materias primas, energía) y bienes de capital (maquinarias, herramientas) para la creciente industria nacional.

Otro problema era el estancamiento tecnológico de la industria, ante lo cual era necesario desarrollar una industria pesada (metalúrgica y siderúrgica, metalmecánica, petrolera, petroquímica, etcétera) que requería importantes inversiones de capital y tecnología. Para ello, se recurrió a la inversión extranjera directa, que dio origen a una segunda etapa de industrialización sustitutiva, caracterizada por las inversiones de origen extranjero orientadas a la producción de bienes de capital y otras actividades, como la producción de petróleo y la fabricación de bienes de consumo. Paralelamente, el Estado realizó inversiones importantes en infraestructura de transporte, como rutas, puentes, autopistas, así como en obras hidráulicas, energéticas y equipamientos sociales. Así, se crearon hospitales, centros educativos y complejos habitacionales. Este período se caracterizó por la combinación de crecimiento económico con inflación, y por crecientes tensiones sociales y políticas surgidas, en parte, alrededor de la distribución del ingreso.

La evolución reciente del sistema urbano.

La política económica implementada durante la dictadura militar (1976-1983) respondió a ideas neoliberales y monetaristas, que proponían reducir la intervención del Estado, achicar el gasto público para combatir la inflación y dejar las principales variables en manos de los mercados. Estas políticas trajeron como resultado la reducción del salario real, acompañada por la represión contra las actividades sindicales. También, se redujeron los aranceles a las importaciones, desaparecieron muchos establecimientos industriales pequeños y medianos, y aumentó la concentración económica en menos empresas de mayor tamaño. Además, aumentó el desempleo, el trabajo por cuenta propia y el empleo informal, y la desocupación y la precariedad laboral generaron un aumento de la pobreza.

Por otra parte, aumentó notablemente el endeudamiento del Estado, lo cual condicionó fuertemente las políticas públicas en las décadas siguientes. Durante la década de 1990, volvieron a ponerse en práctica las políticas neoliberales, que incluyeron, además, un amplio proceso de privatización de empresas y actividades del Estado. Esto tuvo un fuerte impacto social y territorial, expresado en la concesión de infraestructuras y servicios de transporte a operadores privados; la venta de empresas públicas; la concesión de servicios de agua, gas, electricidad y teléfonos, y la privatización de numerosos bancos estatales, tanto nacionales como provinciales.

Durante algunos años estas políticas generaron cierto éxito en cuanto al control de la inflación y la modernización de ciertos sectores de la economía, aunque con un alto costo social. A partir de 1998, se produjo la caída de la actividad económica, con altos índices de desempleo, pobreza e indigencia. Esta situación empeoró hasta desembocar en la gran devaluación del peso, que durante diez años se había mantenido artificialmente en una relación de paridad “uno a uno” dólar, abarató los productos argentinos y favoreció la colocación de exportaciones.

En términos generales, las políticas de apertura económica tuvieron, entre otras, dos consecuencias: un mayor crecimiento de grandes e intermedias junto a una creciente inserción de estas ciudades en la economía global. En este contexto, las ciudades han de afrontar el incremento de sus funciones demandas de actores locales y extranjeros. lo cual agudizó la competencia interurbana por la atracción de inversiones y capitales. A pesar de esto, sigue existiendo una desigualdad en la distribución del una parte importante de la población sufre situaciones de pobreza e indigencia.

Los cambios en el sistema urbano.

A partir de la década de 1970, se observa una disminución lenta pero constante del peso relativo del GBA en el conjunto de la población argentina. En efecto, este aglomerado pasó de

concentrar el 36% de la población total del país, en 1970, a un 32%, en 2001. Estos datos no significan que el aglomerado haya perdido población, ya que, en valores absolutos, pasó de 8.450.000 habitantes, en 1970, a 11.800.000, en 2001. Pero sí que el ritmo de crecimiento fue menor al de la población total, por lo cual disminuyó su participación relativa en el total. Además, el aumento en la cantidad de habitantes del GBA se debió al crecimiento vegetativo de la población, ya que los saldos migratorios fueron negativos, al contrario de lo que ocurrió en períodos anteriores, en los cuales recibió una gran afluencia de migrantes del interior del país. Otro proceso interesante durante este periodo es el crecimiento de las aglomeraciones de tamaño intermedio (ATT), es decir, aquellos que tienen entre 50.000 y 1.500.000 habitantes y, especialmente, los de menos de 500.000 habitantes. De esa manera, para 1991, el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas muestra una población total de casi 33 millones de habitantes, repartidos en tres partes prácticamente iguales: un 34% en el GBA, un 33% en ATI y otro 33% en localidades con menos de 50.000 habitantes o en el campo. Entre 1991 y 2001, estas tendencias se acentuaron.

Las ATI llegaron a representar un 36% del total, mientras que las otras dos categorías siguieron reduciendo su participación, hasta llegar a un 32% cada una. Las causas de estos cambios son diversas, por ejemplo, la desindustrialización resultante de las políticas neoliberales implementadas entre 1976 y 2001, que redujo las posibilidades de trabajo en los grandes aglomerados. Esto desalentó las migraciones desde localidades más pequeñas.

Por otra parte, también hubo un aumento de los desplazamientos de población desde el GBA hacia ciudades medianas o pequeñas, en busca de una mejor calidad de vida. En cambio, la población rural, tanto dispersa como aglomerada, fue disminuyendo su participación relativa, debido a un proceso de concentración en pueblos relativamente grandes (entre 2.000 y 20.000 habitantes). En este proceso han influido, por una parte, la incorporación de tecnología en la agricultura, que llevó al desplazamiento de una gran cantidad de mano de obra, y por la otra, el desarrollo del transporte automotor, que permite residir en un pueblo y trabajar en el campo.

El empleo en las ciudades argentinas.

Como consecuencia de los procesos analizados, el desempleo en las ciudades argentinas aumentó significativamente desde mediados de la década de 1970. Si bien este proceso tuvo variaciones, la tendencia general del período fue la creciente expulsión de población del mercado de trabajo. De esa manera, en cada crisis económica, las tasas de desocupación alcanzaron valores más altos: de 2,7% en octubre de 1977, se llegó a 6% en mayo de 1982; 8,1%, en 1989; 18,4%, en 1995, y 21,5%, en 2002. A partir de 2003, las tasas de desocupación disminuyeron y llegaron a un mínimo de 7,3%, en el cuarto trimestre de 2008.

Por otra parte, en este período existe una diferenciación regional en las situaciones de empleo y desempleo. El GBA, la región Pampeana y la región Patagónica presentan altas tasas de actividad y empleo en relación a la población total. Esto quiere decir que un alto porcentaje de la población trabaja o busca trabajo. Por el contrario, Cuyo, Noreste y Noroeste presentan tasas más bajas, lo cual puede deberse a distintas causas, como la existencia de un alto porcentaje de población menor de edad o muy mayor, o la presencia de una cantidad importante de personas que, por diversos motivos, han dejado de buscar trabajo.

Es importante tener en cuenta que las tasas de actividad y empleo se calculan en relación a la población total; en cambio, la tasa de desocupación se calcula en relación a la población económicamente activa (PEA). Las personas que han pasado mucho tiempo desocupadas y han

dejado de buscar trabajo, no están incluidas en la PEA y, por lo tanto, no integran el cálculo de las tasas de desocupación. Por eso, cuando se compara una región con otra, hay que tener en cuenta simultáneamente los distintos indicadores: una tasa de desocupación relativamente baja no significa lo mismo en una región donde la tasa de actividad es alta que en otra región donde la PEA representa una proporción relativamente baja de la población total. Además, dentro de una misma región, pueden existir diferencias importantes entre los distintos aglomerados urbanos.

La desigualdad en el ingreso.

Hacia fines de 2010, las ciudades argentinas también presentaban una distribución desigual del ingreso entre los habitantes de los aglomerados urbanos. El ingreso promedio per cápita para todos los aglomerados urbanos del país en ese momento era de 1.341 pesos mensuales. El 10% de la población presentó ingresos de 2.710 a 66.000 pesos mensuales, con un promedio de 4.289 pesos. Este grupo obtuvo el 320% del total de ingresos. En el otro extremo, el 10% más pobre de la población registraba un ingreso promedio de 204 pesos mensuales por persona y recibía, en conjunto, el 1,5% de los ingresos totales.

Si se comparan los ingresos promedio de estos dos grupos, se puede apreciar que los miembros del primer grupo recibían en promedio un ingreso 21 veces mayor que los miembros del segundo. Los datos permiten realizar el mismo análisis para cada una de las ciudades o aglomerados urbanos por separado. Por ejemplo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para el mismo período, un 10% de la población obtenía los mayores ingresos, con un promedio de 7.124 pesos mensuales por persona y, de esa manera, se quedaba con el 30,1% del ingreso total, mientras que el 10% que menos ganaba, recibía un ingreso mensual promedio de 316 pesos, lo que correspondía al 1,3% del total. El primer grupo registró, en promedio, un ingreso 23 veces mayor que el segundo.

LAS TRANSFORMACIONES URBANAS EN EL PERÍODO NEOLIBERAL.

“En las últimas décadas, se consolidó en la Argentina un modelo de desarrollo urbano cada vez más desigual, caracterizado por la aparición y desarrollo de dos fenómenos antagónicos: por un lado, el surgimiento de urbanizaciones cerradas; por el otro, el crecimiento espacial y demográfico de barrios precarios”.

El retroceso de la intervención estatal en la década de 1990 determinó una menor inversión del Estado en vivienda y equipamiento urbano. En algunos casos, estas inversiones comenzaron a ser realizadas por empresas privadas, pero solo se limitaron a lugares con mayor rentabilidad. A esto se sumó la desaparición casi total del crédito hipotecario para sectores medios y la desregulación de los alquileres. Como consecuencia, se profundizó un modelo de fragmentación social y territorial en el que algunas áreas se modernizaron rápidamente y otras se deterioraron cada vez más.

Así, se consolidó un modelo de desarrollo urbano cada vez más desigual, que tiene sus expresiones antagónicas en la aparición y desarrollo de urbanizaciones cerradas, por un lado, y en el crecimiento espacial y demográfico de los barrios precarios, por el otro. La segregación urbana es el proceso por el cual los distintos grupos sociales se asientan en diversas áreas de la ciudad. Esto va conformando áreas internamente homogéneas, pero muy dispares entre sí. Si bien siempre existieron zonas ricas y zonas pobres en la ciudad, ninguna lo era en exclusividad.

En los barrios de menos recursos había algunos vecinos con buena situación económica que vivían en el barrio. Lo mismo, pero a la inversa, ocurría en los barrios más pudientes, y en la mayoría de los barrios de

clase media existía una importante mezcla social. La heterogeneidad en los barrios generaba un ámbito igualitario de socialización para los niños y los habitantes en general.

Además, en el caso de los niños, esa integración tenía su correlato en la escuela pública y los denominados “clubes de barrio” donde todos compartían un espacio común. Sin embargo, esta heterogeneidad comenzó a perderse paulatinamente a partir de las décadas de 1960 y 1970, y se agudizó en los últimos veinte años. Actualmente, los barrios están viviendo una homogeneización social y cultural, ya que no solo comienzan a diferenciarse por su paisaje y sus funciones urbanas, sino también por las clases sociales que los habitan en forma casi excluyente.

De este modo, cada fragmento de la ciudad comienza a ser más uniforme en su composición social y fisonomía edilicia. En los barrios ricos, se da el reciclaje de viviendas y la aparición de nuevas construcciones en altura. En cambio, en los barrios pobres, los altos costos dificultan el mantenimiento de los edificios, que se ven deteriorados. Estos procesos de segregación socioterritorial se manifiestan especialmente en las grandes ciudades del país. Un ejemplo es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde los barrios de la zona norte se modernizan aceleradamente, mientras que los de la zona sur parecen relegados. Otro ejemplo es la Ciudad de Córdoba, donde los barrios del noroeste han crecido debido a la inversión privada, mientras que las zonas sur y este de la ciudad han quedado rezagadas.

Auge y especulación inmobiliaria.

La diferenciación social de los barrios se refleja en el valor del suelo, así como de las propiedades urbanas. Por lo tanto, el valor inmobiliario depende de varios factores, entre ellos, la accesibilidad y los servicios de transporte; la infraestructura urbana (pavimento, iluminación, etcétera); la cercanía a espacios verdes u otros valores paisajísticos, como la costa del mar o de un río, entre otros. En el valor inmobiliario también influye el “prestigio social” de una zona. Así, algunos barrios comienzan a estar de moda y muchas personas quieren vivir allí, lo cual aumenta el valor de las propiedades, la densidad poblacional y la edificación del barrio. Debido a esta mayor valoración de ciertos barrios de una ciudad, el suelo urbano pasa a ser objeto de la especulación inmobiliaria, y el valor de las propiedades y el suelo aumenta aceleradamente. Frente a esa situación, algunos vecinos se ven obligados a mudarse de barrio, ya que no pueden hacer frente a los alquileres.

En las últimas décadas, este fenómeno se viene dando de forma sostenida en la zona noroeste de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Barrios tradicionales de clase media, como Villa Urquiza, Colegiales y Palermo, vivieron grandes transformaciones por la expansión de la construcción en altura. En el otro extremo, otros barrios dejan de ser atractivos para la población porque son percibidos como inseguros o porque no cuentan con los servicios comerciales más modernos. Muchos vecinos comienzan a abandonar estos barrios que, al perder densidad poblacional, aparecen como zonas con poco movimiento comercial. Además, en este contexto, los precios de las propiedades comienzan a ser más accesibles.

Los espacios exclusivos y la autosegregación.

En el espacio urbano, las políticas neoliberales implementadas durante la década de 1990 trajeron como consecuencia el surgimiento de urbanizaciones cerradas. Estas urbanizaciones son la mayor expresión de la segregación urbana, particularmente de la autosegregación, ya que las personas van a vivir voluntariamente a espacios cerrados con perímetros vigilados y accesos restringidos. Estos espacios cerrados se localizan en las áreas periurbanas y rurales, aunque cuentan con todas las comodidades y servicios de las ciudades. Por ello, son conocidas como urbanizaciones. En el país, las primeras urbanizaciones cerradas

surgieron hace varias décadas, pero su número era reducido y eran utilizadas, principalmente, como casas de fin de semana para los sectores sociales más pudientes.

A partir de la década de 1990, comenzó el desarrollo masivo de estos emprendimientos en las áreas periurbanas de las grandes ciudades, pero como residencia permanente y no como lugar de descanso. Así, se genera un proceso por el cual los sectores de ingresos medios-altos abandonan los barrios ubicados en áreas céntricas o cuasicéntricas de las ciudades y se trasladan a varios kilómetros de la ciudad. Este proceso se asocia con un patrón de movilidad basado en el uso intensivo del automóvil, por lo cual estas urbanizaciones cerradas se localizan cerca de la red de autopistas y de vías rápidas en general. Estos espacios cerrados son verdaderos enclaves de riqueza en zonas cuya población original y circundante pertenece a estratos medios-bajos y bajos, e incluso muchas veces están próximos a asentamientos precarios.

En la década de 1990, las reformas estructurales impulsaron la desregulación de diversos sectores, entre ellos, el inmobiliario. Esto propició la entrada de capital extranjero y favoreció el desarrollo urbanístico privado, que convirtió al sector en un negocio altamente rentable. Se calcula que, en los años de construcción más intensiva, la inversión ha rondado los 3.500 millones de dólares. Este proceso valorizó tierras que se encontraban fuera del mercado inmobiliario, incluso algunas zonas inundables o bañados que, por sus condiciones naturales, debieron ser reacondicionadas con obras de infraestructura, lo cual multiplicó su valor. Este es el caso de las urbanizaciones localizadas en la zona del Delta del Paraná. Una de las motivaciones de los sectores medios-altos para trasladarse a estos espacios exclusivos ha sido la seguridad, así como el deseo de un mayor contacto con la naturaleza.

Tipos de urbanizaciones cerradas.

Existen diferentes tipos de urbanizaciones cerradas: Countries o clubes de campo: son el tipo de urbanizaciones cerradas más conocido. Se caracterizan por disponer de grandes espacios comunes, como parques, instalaciones deportivas (desde canchas de pádel hasta campos de golf), Club House, gimnasio, entre otros. Todas las casas poseen parque y piscina propia. o Barrios privados: los terrenos, al igual que las casas, son de menor extensión y no cuentan con infraestructura deportiva ni Club House. Condominios: son urbanizaciones conformadas por pequeños edificios de departamentos de no más de cuatro pisos. Por lo general, cuentan con piscina y algún espacio verde reducido.

Se ubican muy cerca de los grandes centros urbanos. Clubes de chacras: son grandes terrenos de media hectárea, ubicados en zonas rurales y con algunos servicios comunes, como seguridad, pero sin instalaciones deportivas. Megaemprendimientos: son verdaderos pueblos y ciudades privadas, divididos en barrios y con diferentes tipologías edilicias. Cuentan con hipermercados, comercios, servicios de salud, centros educativos y de entretenimiento, así como transporte público.

El impacto territorial de las urbanizaciones cerradas El hecho de que las urbanizaciones cerradas se constituyan en lugares de residencia permanente, implica la aparición de una oferta de servicios en las inmediaciones. Así, en las zonas de concentración de varias urbanizaciones cerradas, se generaron nuevas centralidades comerciales y de servicios, y se abrieron o ampliaron calles y vías rápidas. La aparición de centros de educación y salud en estas urbanizaciones da cuenta de la segmentación de los mercados a los que brindan servicios. Los establecimientos educativos cumplen con una serie de exigencias, como la doble escolaridad, la enseñanza bilingüe, actividades recreativas, planes de estudio con reconocimiento internacional, etcétera.

En muchos casos, los colegios se ubican dentro de los propios countries, lo cual restringe aún más las relaciones sociales de los jóvenes. Con respecto a los servicios de salud, la aparición de centros médicos es

más limitada, aunque se realiza exclusivamente bajo la modalidad de medicina prepaga. El fenómeno de la expansión de las urbanizaciones cerradas está presente en todas las grandes ciudades del país e, incluso, en algunas ciudades medianas. En San Miguel de Tucumán, existen unas 50 urbanizaciones cerradas, mientras que, en el Gran Mendoza, hay cerca de 100, particularmente en los municipios de Luján de Cuyo y Maipú. En el Gran Córdoba, el crecimiento de estas urbanizaciones no ha cesado desde la recuperación económica de 2003, ya que existen cerca de 55, entre countries, barrios cerrados y chacras, que ocupan una superficie de unos 50 km². La mayoría se concentró en el noroeste de la ciudad y en torno a la ruta que va hacia Villa Carlos Paz, en particular en los municipios de Unquillo, Villa Allende, Malagueño, Alta Gracia, La Calera y Mendiolaza. En este último municipio, el 40% de la superficie corresponde a urbanizaciones cerradas. La provincia de Buenos Aires posee el mayor número de urbanizaciones cerradas del país. Según datos del año 2007, la provincia tenía unas 577, de las cuales 541 (el 93%) se ubican en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Dentro del amBA, más de la mitad de estas urbanizaciones se concentra en los partidos de la zona norte: Pilar, con 133; Tigre, con 71; Escobar, con 45, y San Isidro, con 39.

Los barrios precarios e informales.

En la sociedad actual, en lo que se refiere al acceso a los bienes y servicios, se registran grandes diferencias sociales. La vivienda es uno de esos bienes cuyo acceso es selectivo. Una gran parte de la población no posee un ingreso suficiente para pagar el alquiler de una vivienda y, mucho menos, comprar un inmueble. Por lo tanto, este es un indicador de exclusión que, a su vez, también se relaciona con la desnutrición, las enfermedades, el bajo nivel de escolaridad, el desempleo o subempleo, entre otros. Dentro de la ciudad, en contraposición a las urbanizaciones cerradas, se encuentran diferentes formas de viviendas, entre ellas, los barrios precarios e informales.

Estos espacios tienen ciertas características. Por un lado, la informalidad refiere a que sus habitantes son ocupantes de hecho de la tierra; es decir, no son propietarios ni tienen un contrato de alquiler; derivado de esto la construcción no se ajusta a las normativas de edificación. Por otro lado, otra característica central es la precariedad, que se refiere tanto a las dimensiones reducidas de las viviendas, lo cual da lugar a situaciones de hacinamiento, como a los materiales con que están construidas y la falta de servicios mínimos indispensables (agua, luz eléctrica, saneamiento) que aseguren una calidad de vida aceptable.

Por lo general, estos tipos de asentamientos poblacionales tienden a ubicarse en las áreas periféricas de las ciudades, en terrenos que, por su ubicación desfavorable, no son atractivos para los sectores sociales con mayor poder adquisitivo. Estos terrenos suelen ser zonas inundables, laderas de cerros y áreas cercanas a establecimientos industriales contaminantes, vías férreas o bajo autopistas. Por el bajo valor de mercado de su suelo urbano y, muchas veces, por ser terrenos de propiedad estatal, estos lugares se convierten en los únicos donde pueden establecerse los sectores más pobres suelen distinguirse dos tipos de viviendas precarias: las villas y los asentamientos.

Las villas se fueron conformando como resultado de la llegada de familias al lugar, quienes construyeron viviendas con carácter transitorio. Por ello, la trama urbana es desordenada y las viviendas son muy precarias. Por otro lado, los asentamientos responden a tomas de tierras planificadas y decididas colectivamente por un grupo, que aspira a construir residencias permanentes y, con el tiempo, lograr su regularización. Esto se ve reflejado en el trazado urbano y las construcciones de esos asentamientos, ya que aparecen manzanas, parcelas y calles, y las viviendas son más grandes. Sin embargo, ambos tipos de viviendas precarias tienen al autoconstrucción como característica común. Según estudios en el AMBA, existen cerca de 1.000 villas y asentamientos, que albergan a algo más de un millón de personas.

¿Qué hacer con las villas?

A lo largo de los años, luego de atravesar diferentes regímenes, tanto militares como civiles, y diversas situaciones económicas, la cantidad de población que vive en asentamientos y villas no ha dejado de crecer. Esto demuestra que la desigualdad social y el acceso a la vivienda continúan siendo un problema grave para los sectores populares. De esa manera, se generan dos visiones opuestas acerca del crecimiento y la conformación de las villas: por un lado, quienes reducen el problema de la tenencia a la condición de ilegalidad; por el otro, quienes lo consideran un problema social que incluye múltiples dimensiones. De acuerdo con estas visiones, se han planteado dos soluciones: » Erradicación: plantea que las villas deben ser eliminadas de la trama urbana y sus habitantes, trasladados a otros lugares. La última dictadura militar (1976-1983) implementó la política de desalojos en la Ciudad de Buenos Aires, donde se destruyeron las viviendas con maquinarias y se trasladaron compulsivamente a los habitantes fuera de la ciudad. Los inmigrantes fueron enviados a la frontera o a sus países de origen. En cuanto a los asentamientos, algunos fueron eliminados en forma definitiva, como la Villa Bajo Belgrano, mientras que otros fueron reducidos en tamaño.

Sin embargo, en los últimos años, frente al impacto de las políticas neoliberales, retomaron su crecimiento, como en los casos de la Villa 31 de Retiro o la Villa 21 de Barracas. » Urbanización: consiste en dotar a estos asentamientos de los servicios básicos, como agua, luz y saneamiento; consolidar las viviendas de materiales precarios; abrir y pavimentar las calles en continuidad con la traza de la ciudad, y regularizar la propiedad de la tierra. En los últimos años, los gobiernos municipales han intentado llevar adelante diversos tipos de mejoras en este sentido, a través de la redefinición de programas y diversas normativas. Sin embargo, no son suficientes, pues las villas crecen tanto demográfica como espacialmente.

La posibilidad de implementar las propuestas de urbanización elaboradas son pocas, ya que fueron diseñadas teniendo en cuenta una determinada cantidad de población en un determinado tiempo. Estas políticas como respuesta a la problemática de las villas no han logrado cumplir con sus objetivos propuestos. Recientemente, el Equipo de Sacerdotes para las Villas de Emergencia ha planteado una variante de integración urbana dentro de esta última alternativa de urbanización. Este equipo plantea la urbanización de las villas como un proceso de integración más que de mejoras y parten de una apreciación positiva de la cultura villera. En diversos documentos expresan su preocupación por la posibilidad de que una manera de entender la urbanización pueda ignorar los valores de esa cultura. Por lo tanto, plantean que los planes apunten a integrar a los villeros y al resto de los vecinos en una relación de mutua valoración.

La diferenciación social y territorial del consumo

La diferenciación de grupos sociales se manifiesta en el espacio residencial, pero, también, en las formas de consumo y recreación. Cada vez más, los patrones de consumo se ajustan a valores y preferencias segmentados por clases sociales, que desarrollan sus actividades en espacios diferenciados. Una de las tendencias que acompaña este proceso es la presencia de espacios cerrados, con perímetros vigilados, tanto en áreas de consumo de bienes como en las actividades recreativas.

Esto surge de considerar al espacio público tradicional, ya sean calles, parques o plazas, como un espacio inseguro. En este sentido, los espacios cerrados de consumo parecieran ofrecer ámbitos más seguros y cómodos para esas actividades. Las reformas económicas implementadas en 1990 originaron un proceso de reorganización espacial urbana, que puede observarse con la instalación de shoppings, centros comerciales, hipermercados, hoteles cinco estrellas, etcétera, La expansión de la ciudad se vio acompañada por la dispersión de los nuevos centros y complejos urbanísticos que concentran los mejores factores de localización.

Los shoppings.

La irrupción de los grandes centros comerciales y shoppings es un ejemplo de esta diferenciación social del consumo. Estas grandes superficies integran diferentes rubros comerciales como los hipermercados, servicios diversos, locales gastronómicos y espacios de recreación en un perímetro cerrado. En la mayoría de los casos, tienden a sustituir al tradicional paseo de compras en las avenidas comerciales. La concentración de actividades en un mismo lugar incentiva el consumo, que también es inducido por intensas campañas publicitarias con promociones, ofertas y, en algunos casos, festejos masivos (recitales, fuegos artificiales, etcétera). Así, se busca establecer un vínculo emocional con el consumidor. El shopping pasa a ser un lugar de socialización, que los distintos grupos socioeconómicos aprovechan de manera diferente. El impacto territorial de shoppings e hipermercados se ve reflejado en la decadencia de algunos centros barriales tradicionales de pequeños comerciantes. En la actualidad, muchos de estos locales están cerrados, lo que produce un deterioro generalizado de la zona.

Por el contrario, las áreas donde se instalan los hipermercados se ven revitalizadas, ya que se constituyen en nuevas centralidades. El flujo de vehículos obliga a ciertas adaptaciones del tránsito, algunas líneas de transporte colectivo modifican sus recorridos y comercios pequeños se instalan en sus cercanías, como forma de captar clientes en una zona de gran movimiento diario de personas. Los shoppings comenzaron a instalarse en la Argentina hacia fines de la década de 1980 y tuvieron su auge en la década de 1990.

Con el paso del tiempo, se fueron haciendo cada vez más grandes e incluyeron más servicios. Por lo general, tienden a ubicarse cerca de las grandes vías de circulación, para tener una mejor accesibilidad. Otros shoppings, en cambio, se ubican en las áreas centrales de la ciudad. Por el contrario, gran parte del consumo de los sectores populares se realiza en espacios públicos en condiciones de informalidad, como ferias y puestos de venta ambulante en plazas, o en torno a las estaciones de tren. Las ferias permiten acceder a los bienes de consumo a un menor precio y también son un medio de vida para estos sectores. Estas ferias existen en todo el país y, cuando adquieren grandes dimensiones, comienzan a ser frecuentadas por sectores medios, como en el caso de la feria de La Salada, ubicada en el partido bonaerense de Lomas de Zamora.

La recreación: de la plaza al pelotero.

La construcción de la imagen de la calle como un lugar inseguro ha recludo el juego infantil en lugares cerrados, especialmente destinados para ello. Ya sea en los grandes shoppings, los locales de comida rápida o pequeños locales en los barrios, los peloteros han reemplazado a la vereda o la plaza cercana como el lugar donde los niños hacen amigos. También, han ido perdiendo presencia los parques de diversiones y los zoológicos municipales, que fueron sustituidos por grandes emprendimientos privados. Un importante parque de diversiones, en la ciudad de Tigre, se ha constituido en un atractivo no solo metropolitano sino también nacional, que ha impactado en la estructura urbana, la cual debió acondicionarse para recibir a miles de personas todos los fines de semana. Del mismo modo, un zoológico privado, en el partido de Escobar, recibe tanto visitantes de la Argentina como turistas extranjeros.

Los cines.

El proceso de desaparición de los cines barriales comenzó hace varias décadas, pero se acentuó en los últimos quince años y afectó también a los grandes cines que se ubicaban en los centros de las ciudades. Estos grandes cines han sido sustituidos por complejos que cuentan con numerosas salas pequeñas. Así, pueden tener una oferta variada de películas en cartel, lo cual asegura la concurrencia diaria de espectadores. Por lo general, están asociados a los shoppings y forman parte de cadenas internacionales.

El desarrollo del sector hotelero.

En la década de 1990, comenzó a crecer el sector hotelero de lujo, junto con el desarrollo del consumo suntuoso que caracterizó al modelo neoliberal. En esos años, se construyeron hoteles cinco estrellas, pertenecientes a cadenas internacionales, en las principales ciudades del país. Estas cadenas se establecieron no solo en Buenos Aires, sino también en Mendoza, Córdoba, Salta, Mar del Plata e Iguazú. Esta oferta hotelera atendía a sectores de muy altos ingresos. La modificación de la relación cambió el crecimiento del turismo receptivo, gracias al cual los sectores medios y medios-altos pudieron acceder a ese tipo de hotelería. En la actualidad, en el país, existen unos 50 hoteles cinco estrellas y unos 115 de cuatro estrellas. Solamente en Buenos Aires, hay 23 hoteles cinco estrellas y 70 de cuatro estrellas, concentrados en los barrios de Recoleta y Puerto Madero. Simultáneamente, aparece una oferta de alojamiento más segmentada de acuerdo a los diferentes perfiles de los consumidores. Es el caso de los hostels y los llamados Bed Breakfast (en español, Cama y Desayuno).

Los hostels son requeridos principalmente por los jóvenes, cuentan con variados servicios y, en general, sus habitaciones son compartidas, lo cual los hace más económicos. En Buenos Aires, se ubican mayormente en barrios como San Telmo o Palermo, lo cual facilita la movilidad en transporte público.

Los Bed Breakfast, en cambio, son una alternativa para los viajeros independientes que buscan conocer con más profundidad la cultura local. Por lo general, son casas de familia acondicionadas para el alojamiento, donde se da un trato personalizado. Algunos son muy sencillos y otros, más lujosos y con tarifas elevadas. En la Ciudad de Buenos Aires se ubican principalmente en los barrios de Palermo y Belgrano, que aún conservan grandes casonas para este tipo de alojamiento,

LAS CIUDADES PEQUEÑAS E INTERMEDIAS LIGADAS A LAS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS

“Tradicionalmente, el campo y la ciudad se configuraban como espacios diferenciados y opuestos. Las ciudades eran consideradas ámbitos de progreso; en cambio, los espacios rurales se identificaban con el atraso y la pobreza. Actualmente, existe una mayor integración entre el campo y la ciudad, que se expresa en una gran heterogeneidad de usos del suelo y una nueva ruralidad”.

En la Argentina, las definiciones de la población urbana y rural están basadas en un criterio estrictamente demográfico. Como vimos anteriormente, el criterio consiste en determinar un umbral de cantidad de población aglomerada: la población que se encuentra por encima de ese umbral, es considerada como “urbana”, y la que está por debajo, como “rural”, lo cual genera un sistema clasificatorio dicotómico. El umbral es de 2.000 habitantes, de modo que cualquier localidad de hasta 1.999 habitantes es considerada rural.

Los límites de la aglomeración se establecen a partir del perímetro, que define espacialmente los límites de la localidad y permite contabilizar la población allí contenida. Sin embargo, las diferencias entre lo urbano y lo rural no se reducen a una única variable de tipo poblacional, sino que existen numerosos aspectos socioeconómicos, como la educación, el ingreso, las ocupaciones, las necesidades básicas insatisfechas, así como condiciones de salud, sexo y composición etaria de la población, que configuran espacios rurales diversos. En la actualidad, existen fuertes procesos de cambio en el campo, tales como la interrelación entre la industria y la producción agraria, la conformación de cadenas y complejos agroindustriales, la importancia de la innovación tecnológica, la creciente incidencia de la mano de obra urbana en el campo, el empleo rural no agrícola y la multiocupación.

Estos cambios conforman un conjunto de tendencias que se engloban en la llamada “Mi nueva ruralidad”, por lo que resulta necesaria una definición más flexible y actualizada de lo rural. Además, la nueva ruralidad tiene expresiones importantes en la dinámica actual del medio rural, con repercusiones territoriales precisas que han provocado enormes transformaciones en las estrategias de vida de los productores y sus familias, incluyendo sus patrones residenciales.

Las ciudades agropecuarias En las últimas décadas, la visión tradicional de lo rural está siendo cuestionada a partir de una serie de cambios, como la diversificación de ocupaciones entre la población rural, la aparición de actividades no agropecuarias -como industrias y servicios o la revalorización del campo como lugar de residencia. A su vez, la aparición de otros usos del ambiente no urbano, como la valorización paisajística y cultural, la ampliación de las actividades ligadas al ocio, la conservación ambiental como objetivo de la instalación humana y el progresivo aumento de la movilidad territorial de una población y el turismo rural, son otros de los cambios que atraviesan al ámbito rural. Estos procesos comenzaron a desarrollarse en Europa y los Estados Unidos desde mediados del siglo xx y, desde fines de la década de 1980, se extendieron a América latina, a partir del impacto de la globalización en el sector agropecuario.

En la actualidad, numerosas localidades agropecuarias, especialmente aquellas que se ubican en las cercanías de los grandes núcleos urbanos, superan los 2.000 habitantes, lo cual las constituye en ciudades agropecuarias. Además, lejos de la idea tradicional de lo rural como sinónimo de pobreza y aislamiento, los ámbitos rurales se encuentran cada vez más integrados con las áreas urbanas, debido al desarrollo de infraestructura y tecnología.

No obstante, estos procesos no se dan de igual modo en todo el territorio argentino, por lo que, junto a estas ciudades en crecimiento, también existen pequeños pueblos y/o parajes rurales que no superan los 100 habitantes, así como población rural dispersa en áreas rurales deprimidas. En este sentido, la heterogeneidad de las estructuras agrarias hace difícil pensar en la posibilidad de una única definición de lo rural.

De esta manera, el medio rural está caracterizado por la heterogeneidad geográfica e histórica, ya que la población rural de las diferentes provincias y regiones atravesó diversos procesos de desarrollo. Esta heterogeneidad, a su vez, está basada en una compleja trama de factores ambientales, económicos, sociales, culturales y políticos.

Pueblos y parajes rurales.

Luego de la privatización ferroviaria Muchos pueblos y parajes rurales surgieron a partir de la extensión de la red ferroviaria que, a fines del siglo xix y comienzos del xx, dio impulso a las actividades productivas agropecuarias, tanto pampeanas como extrapampeanas. El sistema económico se vio incentivado por la nueva oferta de transporte masivo a bajo precio, gracias a la cual los habitantes de Una extensa región geográfica podían entrar en contacto con el mercado mundial y, a veces, con los mercados locales extrarregionales,

Las numerosas estaciones de ferrocarril dieron origen a pueblos y ciudades, y permitieron transportar carnes y cereales desde las chacras a las estaciones, lo que determinó el crecimiento de las líneas férreas. Esto significaba posibilidades de expansión económica, así como fuentes de trabajo y el crecimiento de los pueblos. El transporte de la producción a través del ferrocarril contribuyó no solo al desarrollo de los pueblos rurales, sino también a que los habitantes del campo pudieran satisfacer sus necesidades inmediatas. De esta manera, el movimiento de bienes y personas era cotidiano. En la década de 1930, se creó la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) con el objetivo de construir caminos paralelos a las grandes líneas ferroviarias troncales.

De ese modo, el tráfico automotor comenzó a reemplazar al tren, hasta quitarle parte de la carga potencial. A la competencia del sistema vial, se sumó el deterioro de equipos, vías y estaciones. La estatización de los ferrocarriles, a mediados del siglo xx, y el subsidio a las tarifas, provocaron una situación deficitaria, que desembocó en la tercerización de algunos servicios y la progresiva pérdida de la carga transportada frente al creciente transporte automotor.

Luego, a comienzos de la década de 1990, la instauración del modelo neoliberal de ajuste trajo aparejadas políticas de privatización de los ferrocarriles, como parte de las medidas de reducción del gasto público. Las empresas privadas a cargo de la gestión de los diferentes ramales, determinaron la clausura de aquellas líneas que no resultaban rentables. La cancelación masiva de servicios generó el abandono de cientos de pueblos, para los cuales el ferrocarril era fuente de trabajo y abastecimiento, y medio de comunicación. Actualmente, el servicio de pasajeros se limita a las redes concesionadas del Área Metropolitana de Buenos Aires y a pocos servicios de larga distancia, como el servicio a Mar del Plata, Tucumán o Posadas.

En cambio, el transporte de carga está organizado básicamente de acuerdo a las necesidades de las empresas privadas que los gestionan, las cuales pertenecen a grupos agropecuarios o productores de materias primas. En esos casos, las formaciones del ferrocarril son parte de las empresas que las operan. Por ejemplo, el tren del grupo de Aceitera General Deheza transporta casi exclusivamente los insumos y los productos de la empresa; mientras que el 80% de la carga de Ferrosur es cemento y mineras, y lo maneja el grupo empresario de origen brasileño Camargo Correa.

Despoblamiento y envejecimiento.

Al igual que en otros países latinoamericanos, los ámbitos rurales de la Argentina han experimentado un profundo proceso de despoblamiento desde mediados del siglo xx y hasta la década de 1980, aproximadamente. El proceso global de despoblamiento rural coincide con un fuerte crecimiento de la producción agrícola, basado en cambios productivos, organizativos y tecnológicos que ahorran mano de obra. La falta de empleo agropecuario motivó el abandono de las áreas rurales y el traslado hacia las ciudades, centros de expansión de la industria sustitutiva de importaciones. Según los datos censales, entre 1947 y 1980, la población rural disminuyó en más de 1.400.000 personas.

El cierre de los ramales ferroviarios a partir de 1991 dejó aislados a numerosos pueblos, lo cual reanudó el abandono de las áreas rurales. Sus habitantes migran para estudiar o buscar trabajo y, en algunos casos, continúan residiendo en las áreas rurales pero realizan sus actividades en áreas urbanas. Aquellos que emigran son, principalmente, jóvenes y adultos jóvenes. Esto impactó en la estructura etaria de la población, la cual, al perder a sus miembros en edad reproductiva, presenta signos de envejecimiento demográfico, a partir del descenso de las tasas de natalidad.

Las transformaciones de la PEA rural.

La población económicamente activa (PEA) está conformada por las personas que tienen entre 14 y 64 años; es decir, aquella población que está en edad de trabajar. En las áreas rurales de principios del siglo xx, la PEA se empleaba mayormente en actividades agropecuarias. Al disminuir la demanda de trabajo en las explotaciones agropecuarias, la PEA rural emigró a las ciudades o se volcó hacia otras ramas de la economía, en consonancia con los cambios operados en los modos de producción agraria. En este sentido, la PEA rural se fue orientando gradualmente hacia el sector industrial extraurbano o en torno a las actividades terciarias.

En efecto, al mismo tiempo que la PEA se transformaba, aumentaban la población rural aglomerada y la prestación de servicios productivos y sociales (educación, salud), prácticamente inexistentes en el área rural hasta 1960. De esta manera, se observa que la PEA ocupada en el sector agropecuario disminuye en las aglomeraciones rurales. Como ya se dijo, una localidad es rural hasta los 2.000 habitantes; sin embargo, en la actualidad, numerosas aglomeraciones que superan ese límite son igualmente consideradas “pueblos”, dado que su población y sus actividades económicas continúan centradas en las actividades agropecuarias.

La residencialidad urbana de los productores.

Las importantes modificaciones en el sector agropecuario durante la segunda mitad del siglo xx, como los cambios en la tenencia del suelo y la estructura de la propiedad de la tierra, la crisis de las pequeñas unidades productivas y los procesos de tecnificación, potenciaron el despoblamiento del campo y la radicación urbana de gran parte de los productores agropecuarios. A diferencia de la migración desde el campo a la gran ciudad, el cambio de residencialidad implica la radicación de una proporción significativa de productores agropecuarios en las ciudades cabeceras de los departamentos. Este fenómeno se registró en todo el país, aunque con mayor notoriedad en el área pampeana.

Por ejemplo, en 1947, la mitad de los habitantes de la zona rural de la provincia de Buenos Aires vivía en las unidades productivas rurales, mientras que, en la actualidad, solo lo hace el 11%. Las causas del traslado se asocian con el acceso a servicios, como las redes de servicios básicos (electricidad, agua, teléfono); establecimientos de educación media y superior, y centros de salud y áreas comerciales, entre otros. La residencia en la ciudad permitía a la familia rural elevar su nivel de vida, de modo que también resultaba un símbolo de prestigio social. A partir de 1980 y con mayor intensidad en 1990, la expansión de la soja impactó en los productores que, sin poder acceder al paquete tecnológico, rentaron sus campos y se trasladaron al pueblo o la ciudad más cercana.

La asalarización de la mano de obra rural.

Los cambios de residencialidad también implicaron profundas transformaciones en aquellas unidades productivas que continuaron bajo control de los productores. Al cambiar el lugar de residencia, se disolvió el equipo de trabajo conformado por el productor y su familia, característico de los productores pequeños y medianos conocidos como “productores familiares”. Una consecuencia de esta fragmentación de la familia fue la asalarización de la mano de obra rural. Durante la segunda mitad del siglo XX, tuvo lugar una reducción del número de personal permanente por hectárea; sin embargo, a partir de la adopción de innovaciones tecnológicas que permiten ahorrar trabajo, estos puestos no fueron ocupados por familiares del productor, sino por asalariados, que se convirtieron en la fuerza de trabajo predominante. Por otra parte, los productores implementaron la tercerización de actividades, a través de la contratación de servicios de maquinarias.

Las agrocidades del área pampeana.

Lejos del enfoque dicotómico que considera a los espacios rural y urbano como opuestos e incompatibles, en la actualidad se reconocen las numerosas interrelaciones que existen entre el campo y la ciudad, así como su diversidad, intensidad y dinámica. Un ejemplo concreto de la vinculación rural-urbana lo constituyen las agrocidades. Son espacios urbanos estrechamente ligados a la lógica rural, en los que el campo condiciona la forma y dinámica de la ciudad o, al menos, de algunos de sus grupos sociales.

Por lo tanto, las agrocidades pueden ser espacios urbanos en los cuales predomina una industria especializada en la transformación de materias primas, como granos, carne y leche, o bien,

ciudades que se dedican a la producción de equipos e insumos para el agro. Es el caso de las economías de enclave agroindustriales, surgidas en la década de 1980 en distintos ámbitos de la pampa argentina y vinculadas a la industrialización de oleaginosas, principalmente soja, pero también girasol, trigo y maní. En el sur de Córdoba, por ejemplo, la localidad de General Deheza es sede de una empresa agroindustrial del sector oleaginoso que, en los últimos años, se ha convertido en una de las principales exportadoras del país. También, puede tratarse de ciudades, ubicadas en determinadas regiones agrarias, que asumen la función central como centro de comercio y servicios en un área cuya economía gira en torno a la actividad agropecuaria.

Las nuevas formas de producción promueven la localización de servicios especializados y la venta de productos vinculados a la actividad agropecuaria en los centros más importantes de la región. Un ejemplo de este tipo de ciudades es Río Cuarto, cabecera de la región agrícola del sur de Córdoba y que abastece los departamentos de General Roca, Juárez Celman, Presidente Roque Sáenz Peña y Río Cuarto. Otro ejemplo es Bahía Blanca, una ciudad-puerto donde confluye la producción de lavasta extensión agroganadera del centro y sur de la provincia de Buenos Aires, así como de las vecinas provincias de La Pampa y Río Negro,

El crecimiento de las ciudades de más de 10.000 habitantes.

El análisis de los datos censales desde 1970 hasta la actualidad pone en evidencia la declinación demográfica de pequeñas localidades con menos de 500 habitantes, que tienden a desaparecer por no contar con condiciones suficientes para retener su población. Por otra parte, en relación con este proceso, se dio una concentración progresiva en los centros de más de 3.000 habitantes y, en especial, en ciudades con más de 10.000 habitantes que, al contar con el atractivo de una mayor oferta de servicios y actividades, se constituyeron en los nuevos lugares de residencia de los agricultores migrantes.

La emergencia de nuevos sujetos sociales.

En la última década, se ha registrado el ingreso de nuevos agentes a la producción agropecuaria. Este proceso se diferencia de fenómenos anteriores similares, ya que se trata de actores con una trayectoria ocupacional no agropecuaria, y está asociado al cambio de lugar de residencia y, en la mayoría de los casos, al abandono de las ocupaciones anteriores. En este sentido, existe un cambio en las condiciones de vida y de trabajo que revierten parcialmente procesos estructurales de mayor intensidad, como la persistente tendencia a la disminución de la población rural o la concentración de la producción agraria.

Sin embargo, resulta importante en términos cualitativos, porque alude a un cambio en la composición social de algunas áreas rurales y presenta nuevas demandas sobre la actividad agraria y el medio rural. Estas demandas se vinculan con otras ventajas ofrecidas por el medio rural, como tranquilidad, contacto con la naturaleza, un ambiente menos contaminado, etcétera. De este modo, el espacio rural es valorizado por atributos que exceden a la productividad agraria, aunque se nutren de ella como parte del escenario rural.

El turismo rural.

El turismo rural se destaca como una actividad de servicios, en un contexto de terciarización de la economía, valorización extraagraria de los ámbitos rurales, y búsqueda de nuevos empleos y espacios alternativos de crecimiento económico. El turismo rural surge a partir de la demanda de espacios de ocio por parte de los habitantes de las grandes áreas urbanas, atraídos por factores ambientales y formas de vida locales, a la vez que evidencia la crisis de los pequeños y medianos productores marginados del nuevo modelo agroindustrial.

Esta actividad se define como la práctica realizada por aquellas personas que visitan, interactúan con el entorno y/o se alojan en un predio rural, con el interés de conocer, disfrutar y vivenciar alguna actividad agropecuaria. El rasgo fundamental del turismo rural es que se realiza en un ambiente agropecuario. La inclusión del turismo en un establecimiento rural permitió diversificar las actividades, así como ampliar el ingreso y el empleo familiar. A través del turismo rural, el productor puede obtener beneficios sin resignar la actividad agropecuaria, por lo que se considera a la actividad como un factor de desarrollo local. Sin embargo, algunos emprendimientos vinculados al turismo rural, como los restaurantes de campo, tienen su origen en inversiones realizadas por los nuevos habitantes del medio rural, que ofrecen el servicio como una extensión de la ciudad en el campo.

Los nuevos productores y las actividades intensivas en capital.

Las últimas tendencias en consumo alimenticio indican que, a la producción masiva de alimentos, se suma la producción de alimentos diferenciados, es decir, un conjunto de alimentos de alto valor destinados a la exportación. Los consumidores de los alimentos diferenciados pertenecen a sectores sociales altos o en ascenso, cuya dieta moderna incorpora otros alimentos sanos y diversos. Las producciones de alto valor, también llamadas “de nicho” por orientarse a un determinado sector o al mercado internacional, han ingresado al agro argentino a partir de la irrupción de nuevos agentes, generalmente extra agrarios y muy capitalizados. Las producciones de valor requieren importantes inversiones iniciales y pueden pasar varios años hasta que la producción comience a generar ganancias.

En un contexto de crisis de muchas economías regionales y de condiciones favorables para las producciones exportables, los nuevos productores han invertido en otras producciones de alimentos con alto valor, como los frutos finos, los aceites de oliva o las conservas de carnes exóticas. Las empresas apuntan a lograr la diferenciación de sus productos, así como dar respuesta a los cambios que sugieren los nuevos hábitos de consumo y el creciente interés del público por los productos que sustituyen a los tradicionales.

El cultivo de arándanos en Entre Ríos La crisis experimentada a fines de los años 1990 afectó gravemente a los pequeños y medianos productores que, en algunos casos, debieron abandonar la producción directa. Esto se tradujo en una baja del precio de la tierra, circunstancia que fue aprovechada por agentes externos al sector, que ingresaron en la actividad agraria atraídos por una oportunidad productiva particular: el cultivo de arándano. Este cultivo cobró dinamismo a partir de 2002, cuando cambiaron las condiciones macroeconómicas. Su desarrollo ha sido impulsado por agentes comercializadores y viveristas (productores de plantines), que resaltaron las aptitudes agroecológicas del noreste de Entre Ríos para este cultivo. En 2006, el 70% de los productores de Concordia se inició en el cultivo de arándanos, que en la actualidad ocupa unas 1.200 hectáreas. El 55% de los agentes productivos son empresas que superan las 15 hectáreas implantadas. Entre las grandes empresas, con más de 40 hectáreas implantadas, existen dos chilenas y una estadounidense. La producción implica una inversión inicial superior a los 20.000 dólares, sin contar la tierra, y deben transcurrir cinco años para que la planta pueda ser cosechada.

La truficultura.

El cultivo de trufa es considerado actualmente uno de los más rentables. La trufa es un hongo que crece en simbiosis con ciertas especies de árboles, como la encina, el roble o el avellano europeo. El proceso por el cual se produce un árbol con la capacidad de generar trufas se llama micorrizado. Su gran rentabilidad se debe a que pertenecen a una clase de hongos comestibles de alto valor, utilizados en la gastronomía internacional como condimento y aromatizante.

En la Argentina, este nuevo agronegocio comenzó a desarrollarse en 2007 en la localidad de Coronel Suárez, provincia de Buenos Aires. Allí se fundó la primera planta de árboles micorrizados con trufas negras.

Los enclaves rurales residenciales.

La caída del precio de la tierra, ocasionada por la crisis de diferentes producciones pampeanas y extrapampeanas, no solo atrajo inversiones orientadas a nuevas producciones sino también a desarrollos inmobiliarios. Estos agentes realizaron Operaciones especulativas, es decir, compraron tierras a bajo precio, que fueron acondicionadas y subdivididas para su venta a un valor mucho mayor a la inicial. La mayoría de estos establecimientos se convirtieron en urbanizaciones cerradas, como enclaves rurales de espacio residencial.

Estos emprendimientos residenciales tuvieron su auge durante la década de 1990 en los partidos rurales más cercanos a las grandes ciudades, especialmente en aquellos que están vinculados a los grandes centros urbanos a través de autopistas. Los consumidores de estos espacios valorizan el entorno rural por considerarlo más sano y natural, y por su mayor seguridad. Algunos nuevos habitantes de origen urbano adoptaron a la nueva vivienda como residencia permanente; otros, en cambio, la utilizan de manera temporaria, los fines de semana o durante las vacaciones.

El impacto socioeconómico en las pequeñas y medianas localidades rurales.

Los habitantes de los nuevos emprendimientos residenciales no siempre están relacionados con el entorno rural que los rodea. En los casos donde la residencia es temporaria, casi no se establecen vínculos locales, mientras que, cuando la residencia es permanente, la interacción con la población local es mayor. No obstante, la construcción de nuevas urbanizaciones se ve acompañada por el desarrollo de centros comerciales que “acercan” los servicios de la ciudad a los nuevos habitantes rurales. A pesar de ello, estos establecimientos residenciales dinamizan las aglomeraciones preexistentes, ya que aumentan la demanda de insumos cotidianos y generan trabajo.

El impacto de las urbanizaciones cerradas El desarrollo de urbanizaciones cerradas es recibido por algunos municipios con entusiasmo, dado que atraen población al partido y generan fuentes de empleo. Sin embargo, el empleo que generan se focaliza en el sector de servicios, especialmente en seguridad y limpieza, trabajos de baja calificación y por ende, mal remunerados. Además, la condición de los empleados es precaria, es decir, se trata de trabajos temporales y no formalizados. Por ejemplo, en el partido de Pilar, provincia de Buenos Aires, en los barrios privados existe al menos un empleado doméstico por hogar. Si se tiene en cuenta solamente el personal doméstico, el 70% de los empleados presenta irregularidades en su situación previsional.

Asimismo, la construcción de una urbanización cerrada implica muchas veces la deforestación de predios para la construcción de caminos y viviendas. Algunos suelen utilizar cascos de tradicionales estancias de la zona como club houses o centros de reunión y recreación de sus pobladores. Estos edificios, que constituyen parte del patrimonio histórico-cultural, se ven deteriorados o modificados por este uso, o son demolidos. A la vez, los residuos y desechos cloacales generados en estos espacios residenciales son, en algunos casos, vertidos en cuerpos de agua cercanos sin procesamiento previo.

La periferia rural de una gran ciudad.

Por lo general, el avance de la ciudad sobre el campo provoca el desplazamiento de las actividades agropecuarias hacia áreas más alejadas. En este sentido, la frontera urbana y la agrícola avanzan en el mismo sentido. No obstante, el desplazamiento no es simultáneo, sino que, durante la expansión de la ciudad, los usos urbanos se entremezclan con los rurales y conforman espacios de transición o interfase, conocidos como espacios “rururbanos”.

En las áreas rururbanas, se desarrolla una gran diversidad de actividades, que conforman un mosaico de usos del suelo y actores sociales. Algunos de los usos urbanos y rurales que se alternan en el ámbito rururbano son: industrias, viveros, basurales, huertas, cavas, galpones avícolas, corralones, acopio de cereales, entre otros. Esto ocurre en aquellas áreas donde la frontera urbana compite casi exclusivamente con agrosistemas consolidados, por lo que no suele darse en ecosistemas naturales.

El avance de la ciudad deja huellas sobre los agrosistemas circundantes. Por un lado, la huella ecológica incluye toda la tierra productiva, así como los cursos y cuerpos de agua necesarios para producir los bienes consumidos por los habitantes de la ciudad y recibir los residuos urbanos. Si bien estas zonas no se encuentran necesariamente cerca de las ciudades, sí se organizan para su abastecimiento. Por otro lado, la huella paisajística implica tanto la urbanización propiamente dicha, como la impronta que deja una aglomeración urbana en su entorno, del cual extrae recursos naturales para la construcción, como tierra, piedras, tosca, arena, entre otros.

La renta rural versus la renta urbana.

El crecimiento de las grandes ciudades y el deterioro de sus condiciones socioambientales favorecieron la expansión urbana sobre la periferia rural, a partir de un patrón selectivo y de baja densidad. Esta expansión es protagonizada por sectores sociales contrapuestos, tanto marginales como de altos ingresos, lo cual polarizó la estructura sociodemográfica rururbana. De ese modo, los sectores pobres se alejan de la ciudad debido a los elevados precios de la tierra urbana, mientras que los sectores ricos lo hacen en busca de una mejor calidad de vida, que se traduce en un entorno “verde” y alejado de los problemas urbanos, como la contaminación, la violencia, la inseguridad, etcétera.

Los inversores inmobiliarios contribuyen a la construcción de una “ruralidad idílica”, en la que el territorio rural aparece como un ámbito sin conflictos sociales y ambientalmente sustentable. Estos inversores realizan compras especulativas de tierras; es decir, adquieren predios a bajo precio, los acondicionan y luego los fraccionan. Más tarde venden estos lotes a valores urbanos, es decir, mucho más elevados. Esto implica la multiplicación del dinero que invierten en un período de tiempo muy corto. No obstante, este proceso no es posible en áreas donde las actividades agropecuarias aún son rentables, como el caso de la avicultura o la horticultura en el periurbano bonaerense.

“Los movimientos sociales urbanos han adquirido un gran protagonismo en la vida social, cultural y política de las grandes ciudades argentinas. Gracias a su crecimiento, así como a la renovación de sus prácticas, estos movimientos han pasado de una posición de resistencia y denuncia, a un rol activo en la discusión y ejecución de políticas urbanas”.

Los Movimientos Sociales Urbanos (MSU)

Son aquellas organizaciones sin fines de lucro constituidas en torno a una o varias reivindicaciones populares urbanas, tales como el derecho a la vivienda, el transporte digno o el acceso a los bienes culturales. Por lo general, el principal interlocutor de estas organizaciones es el Estado, único canal a través del cual pueden buscar soluciones a temas tan variados y complejos. El término msu es utilizado por las Ciencias Sociales para diferenciar estos movimientos de otras formas tradicionales de organización social, más relacionadas con el mundo del trabajo, como los sindicatos y las mutuales, o con la política formal, como los frentes y partidos políticos.

Asimismo, los MSU poseen una serie de elementos constitutivos particulares, entre los que se destacan la estructura organizativa, los objetivos y la metodología de acción, que los diferencian de otros tipos de organizaciones. En la Argentina, los antecedentes de los MSU pueden rastrearse hasta los inicios del siglo xx, con las primeras organizaciones comunitarias de inmigrantes que buscaban soluciones a sus malas condiciones habitacionales. Sin embargo, las primeras organizaciones que se encuadran con la definición actual de msu, surgieron en las décadas de 1950 y 1960, con la consolidación de organizaciones barriales, tales como el fomentismo o el movimiento villero de Buenos Aires y otros grandes centros urbanos. Así, el movimiento villero se constituyó a partir de un conjunto de organizaciones sociales y políticas, que buscaban de forma permanente mejores condiciones de vida y derechos para los pobladores de las villas de los grandes centros urbanos del país. Desde entonces, los msu del país han sufrido constantes cambios en cuanto a número, tamaño y capacidad de acción, que han dependido de los diferentes momentos económicos y políticos atravesados por la Argentina. De todos modos, las últimas dos décadas se caracterizaron por el notable incremento del protagonismo de los MSU.

Los msu y el ejercicio de la ciudadanía.

El papel que han tenido los msu durante los últimos años representa una importante contribución a la vida democrática del país. En momentos de inestabilidad económica, social y civil, los msu han funcionado como una herramienta para canalizar las reivindicaciones e inquietudes de los sectores populares. Así, cuando el Estado se desentendió de una planificación urbana justa, ciertos MSU asumieron la tarea de defender los derechos sociales fundamentales e, incluso, intentaron dar respuesta a las problemáticas de la ciudad.

Las lógicas territoriales y participativas.

A partir de las lógicas territoriales y participativas, los MSU pueden erigirse como importantes espacios de democracia participativa. La lógica territorial refiere a las acciones de los MSU que no están vinculadas a las reivindicaciones laborales tradicionales, sino con demandas propias de los lugares de residencia; es decir, están vinculadas a necesidades surgidas en los barrios. En este sentido, durante los períodos de marcada desocupación, en los cuales muchas personas quedaron desvinculadas del trabajo formal, los MSU generaron desde el ámbito barrial la discusión y expresión de los sectores populares. Por su parte, la lógica participativa hace referencia a la intervención permanente de los MSU y sus integrantes. En consecuencia, cuando sus miembros están inactivos, estas organizaciones desaparecen; es decir, la participación directa y permanente es una característica básica de los MSU.

La lucha en el barrio y el ideal de ciudad.

Las reivindicaciones de los MSU, así como sus estructuras organizativas y metodológicas, son muy variadas. Sin embargo, muchos MSU se relacionan entre sí para fortalecer las demandas urbanas específicas, vinculadas con cuestiones materiales. Además, los elementos inmateriales, como la identidad y los valores urbanos, coinciden en un ideal de ciudad más justa e inclusiva. A

partir del desarrollo de esta visión más integral de la ciudad, muchos de estos movimientos han pasado a tener un rol protagónico en el diseño y ejecución de políticas urbanas. En la formulación e implementación de las políticas urbanas, se promueve el uso equitativo del espacio y el suelo urbano, y se aseguran las condiciones ambientales saludables para todos los habitantes.

El derecho a la ciudad amplía el enfoque tradicional sobre la mejora de la calidad de vida de las personas, centrado en la vivienda y el barrio; ya que este derecho abarca la calidad de vida a escala urbana para todos los habitantes de la ciudad. Por lo tanto, este enfoque implica una nueva manera de defender los derechos políticos, culturales y ambientales contemplados en los instrumentos legales regionales e internacionales sobre derechos humanos y civiles. El derecho a la ciudad es un derecho de todos los habitantes de las ciudades, en especial de los grupos vulnerables.

Las demandas de infraestructura urbana y mejores condiciones de vida.

A partir de la Revolución Industrial que se inició en el siglo xv1r, la lucha por la vivienda digna ha sido una de las principales reivindicaciones de los sectores populares de los grandes centros urbanos. Esta lucha dio origen a los primeros Movimientos Sociales Urbanos. Las ciudades han cambiado a lo largo de los años, sin embargo, la lucha por el acceso a la vivienda ha sido constante. La vivienda representa un bien de difícil acceso para los sectores de bajos y medianos ingresos, ya que debe ser pagada de una sola vez en un contexto donde el trabajo suele remunerarse mensualmente; es decir, el trabajador debe disponer de ahorros equivalentes a años de salario.

A lo largo del tiempo se han desarrollado diversos mecanismos para paliar esta situación, como el otorgamiento de créditos o las viviendas sociales construidas por el Estado. Sin embargo, el déficit y la precariedad habitacional siempre han afectado a una importante porción de la población. En la Argentina, los MSU vinculados al tema de la vivienda poseen una larga historia, desde las primeras asociaciones de inquilinos hasta las actuales cooperativas de construcción autogestionadas. De acuerdo al contexto político y económico del país, los MSU relacionados con esta problemática han desarrollado tres grandes formas de acción: s Resistencia a situaciones violentas, como desalojos o relocalizaciones. Reclamos, peticiones y demandas de construcción de viviendas y títulos de propiedad.

Propuesta y ejecución de proyectos concretos, como construcción de viviendas, proyectos de ley o gestión de fondos públicos. Por lo general, los msu más consolidados y de mayor eficacia han combinado las tres formas. Por otro lado, la demanda de los msU por una vivienda digna supone al menos tres elementos básicos: la calidad constructiva, la seguridad en la tenencia y permanencia de la vivienda, y el acceso adecuado a servicios urbanos. Por ello, el tema habitacional implica más que la construcción de una vivienda, ya que su habitabilidad también depende del entorno en el cual se inserta. En ese contexto, aparecen ciertas demandas asociadas, como el transporte adecuado, el acceso a establecimientos de salud y educación, y los bienes culturales.

La demanda de condiciones de movilidad.

En la medida que la resistencia de los sectores populares se fue desplazando hacia la periferia de los centros urbanos más extensos, la cuestión del transporte se volvió decisiva y empezó a estar asociada a la discusión laboral y habitacional. Algunos ejemplos planteados por los MSU son elocuentes: para un trabajador que reside a dos horas de su trabajo, la jornada laboral, en los hechos, resulta cuatro horas más extensa debido al viaje; por otro lado, una vivienda periférica de excelente calidad constructiva pero alejada de la red de transporte público, en la práctica resulta inhabitable. Por lo general, los reclamos están orientados a cinco demandas fundamentales relacionadas con el transporte público de subterráneos, trenes y colectivos urbanos: menor. precio;

mayor frecuencia y velocidad; más limpieza, comodidad y espacio; mayor seguridad, y extensión hacia otros puntos de la ciudad. Sin embargo, el tema del transporte no agota el de la movilidad, ya que esta incluye, entre otras cosas, las características culturales de la población que se desplaza por el territorio. Algunos reclamos de los MSU, como el pedido de furgones ferroviarios para bicicletas y herramientas, se relacionan con esta idea de movilidad.

El acceso a la salud y la educación.

El acceso a la salud y la educación es otro de los reclamos tradicionales de los MSU. Desde mediados del siglo pasado, los esfuerzos se concentraron en conseguir que los barrios más desfavorecidos pudieran contar con establecimientos básicos, como puestos sanitarios, y escuelas iniciales y primarias. Sin embargo, en una ciudad con acceso muy desigual en lo que se refiere a salud y educación, la existencia de estos establecimientos no era suficiente. Por lo tanto, el reclamo se extendió hacia aspectos como la calidad profesional y organizativa. Asimismo, muchas organizaciones observaron que el tema de la movilidad se relacionaba directamente con el acceso a la educación y la salud, por lo que también exigieron facilidades para movilizarse hacia los centros sanitarios o educativos de mayor jerarquía.

Otros reclamos sobre el hábitat urbano.

Las demandas de los MSU por infraestructura urbana son muy amplias. Algunas, como los reclamos por asfalto, desagües, alumbrado público, acceso a servicios de red (gas, agua potable, cloacas), son recurrentes, especialmente en zonas periféricas, donde los loteos se iniciaron de manera informal o bien, con poca o nula planificación de servicios. Esto obligó a que sus pobladores se organizaran para dar respuesta a esos problemas inmediatos. Entre los reclamos de infraestructura urbana se encuentra también el problema de las inundaciones, tanto en zonas céntricas como periféricas. Se trata de un problema que excede la infraestructura de desagüe, y se vincula con la planificación y las políticas de tierras y loteos.

Las demandas de ambientes urbanos saludables.

La cuestión ambiental es una reivindicación reciente de los MSU y está relacionada con el desarrollo del ecologismo, corriente de pensamiento y acción originada en Estados Unidos y Europa a partir de los años 1950 y 1960. En la Argentina, como en casi toda América latina, las reivindicaciones ecológicas y ambientales se manifestaron tardíamente y se volvieron más complejas en la ciudad, donde rápidamente se vincularon con reclamos previos relacionados con la infraestructura urbana y el saneamiento básico.

Los temas ambientales urbanos.

Los primeros temas ambientales fueron planteados por el fomentismo y los movimientos barriales en la década de 1950, y estaban vinculados con el saneamiento básico, un tema urbano central que comprende diversos elementos. Entre ellos, se puede mencionar la gestión del agua potable, las aguas residuales y negras, y los residuos sólidos. Hasta la década de 1980, esta demanda era entendida como un tema relacionado principalmente a la infraestructura urbana y los servicios públicos, sin tener en cuenta que el saneamiento básico previene enfermedades y contribuye a la higiene urbana. En la década de 1990, con la plena incorporación del debate ecológico a las luchas populares, comenzaron a surgir las reivindicaciones estrictamente ambientales. Así, en los últimos años, los MSU, y los vecinos en general, plantearon varios temas importantes, como la calidad del agua para consumo humano, la calidad atmosférica, etcétera. Estos temas aparecen asociados a preocupaciones específicas de contaminación o daño ambiental, como el vertido de sustancias tóxicas al medio, propias de áreas urbanas.

Los movimientos vecinales.

En este contexto, muchas personas se han agrupado en comisiones de vecinos para hacer frente a algún problema o preocupación ambiental de manera colectiva y sistemática. Estas organizaciones han adoptado diversas denominaciones, tales como “vecinos autoconvocados” o “asambleas ambientales”. El caso más emblemático es el de los foros hídricos, surgidos en el conurbano bonaerense para tratar temas urgentes vinculados con las inundaciones y la calidad del agua superficial y subterránea. Otras organizaciones de vecinos autoconvocados han abordado temáticas más puntuales, según las necesidades y preocupaciones de cada zona o barrio; por ejemplo, la presencia de PCB (policloruro de bifenilo) en transformadores de energía, la contaminación electromagnética relacionada con las antenas de telefonía, o los malos olores y el lixiviado, es decir, el líquido contaminante de los rellenos sanitarios mal construidos que se filtra a capas inferiores del suelo.

Sin embargo, más allá de la reivindicación sobre la cual se constituyeron estas agrupaciones, se observa una tendencia a unificar las demandas y reclamos a través de espacios de reunión e intercambio, tales como los encuentros y asambleas interdistritales o interprovinciales. Paralelamente, muchos MSU orientados en un primer momento a reivindicaciones urbanas clásicas (vivienda, transporte, etc.), han incorporado la temática ambiental dentro de sus demandas. Actualmente, la mayoría de estos movimientos reconoce a los temas ambientales como cuestiones urbanas centrales, ya que contribuyen a mejorar la calidad de vida de la población.

Los msu en la cuestión ambiental.

El papel de las organizaciones barriales en la temática ambiental presenta tres grandes virtudes. En primer lugar, las acciones de reclamo constante representan valiosas iniciativas para proteger el medio ambiente urbano, y prestan especial atención sobre las conductas ambientales inapropiadas de empresas y organismos estatales. Por otro lado, la creciente toma de conciencia sobre temas ambientales ha generado discusiones sobre las conductas de los propios vecinos. De esa manera, se plantea la necesidad de desarrollar comportamientos higiénicos y ambientalmente no agresivos.

Muchas organizaciones barriales han implementado prácticas de autorregulación para que, por ejemplo, las aguas negras domésticas no sean volcadas en arroyos cercanos o los terrenos baldíos no se conviertan en improvisados basurales por parte de los propios vecinos. Finalmente, estas organizaciones han hecho un invaluable aporte a la introducción de la temática ambiental en la sociedad. Aún con ciertas debilidades, han operado como “puentes” a través de los cuales muchos de los debates ambientales, propios del mundo científico y político, se trasladaron a la ciudadanía. Esto se llevó a cabo a partir de tareas concretas de difusión y educación ambiental. Esta es una herramienta fundamental para lograr un cambio de actitud y de comportamiento en la sociedad. Así, se ha logrado una mayor concientización de la población sobre estos temas.

La privatización del espacio público y los MSU..

En la Argentina, las reivindicaciones tradicionales sobre el espacio público están vinculadas a demandas por espacios verdes y de esparcimiento, y vías de circulación. Sin embargo, en las últimas décadas, frente a un contexto de progresiva privatización, segmentación y control del espacio público, muchos MSU han trasladado la discusión hacia el tipo de acceso y uso democráticos de estos espacios. En primer lugar, algunas organizaciones se han convocado para defender el libre acceso a determinados espacios de la ciudad, como plazas, paseos o sitios de alto valor patrimonial

y cultural (áreas monumentales, museos, etc.) que, en muchos casos, fueron vallados, arancelados o hasta vedados a ciertos sectores sociales.

Además, se suman otros reclamos que cuestionan la viabilidad social y urbanística de los nuevos espacios residenciales, como los barrios cerrados y countries. Estos espacios cerrados han incrementado el nivel de segregación de la ciudad, además de restringir espacios públicos mediante cercamientos. Otra importante reivindicación de los MSU, también relacionada con el acceso y uso del espacio público, ha sido el derecho a la libre manifestación callejera. El espacio público representa el ámbito de manifestación para la mayoría de los movimientos sociales y políticos. Por lo tanto, las restricciones impuestas a la circulación o permanencia en determinados lugares de la ciudad fueron interpretadas por los MSU como una vulneración del derecho a la protesta. Este reclamo fue muy importante, por ejemplo, para los movimientos piqueteros.

La lucha por los espacios simbólicos.

La ciudad también cuenta con espacios públicos que poseen un gran valor simbólico en el aspecto político y social, frente a los cuales también existen disputas sobre el acceso. Por ejemplo, la Plaza de Mayo, la Plaza del Congreso y Plaza Lavalle son espacios públicos con un gran valor simbólico, ya que allí se emplazan los principales edificios del poder republicano, y se los considera escenarios de luchas sociales. Por ello, a pesar de haber lugares más espaciosos y menos transitados en la Ciudad de Buenos Aires, estas plazas son puntos de concentración de innumerables manifestaciones y actos. En los ámbitos locales, estos puntos de concentración también suelen darse en plazas o paseos municipales, así como en otros lugares (santuarios, complejos deportivos, etcétera) que, por diversos motivos, han adquirido un alto valor simbólico. Asimismo, entre los sitios urbanos con un gran valor simbólico, se destacan los lugares donde funcionaron centros clandestinos de detención durante la última dictadura militar.

Luego de años de haber sido escenarios de marchas y manifestaciones de organizaciones de derechos humanos, algunos de estos espacios han sido transformados en centros deportivos, centros comunitarios o museos de la memoria. Tales son los casos de los centros clandestinos Mansión Seré, en Morón, y Automotores Orletti y El Olimpo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La revalorización de la cultura popular.

En las últimas dos décadas, los msu han desarrollado una intensa lucha por la recuperación y revalorización de prácticas y tradiciones populares. De ese modo, se gestionaron gran cantidad de emprendimientos populares, como centros culturales, bibliotecas, periódicos y otros medios gráficos, programas radiales, etcétera. Asimismo, muchas de estas iniciativas han generado espacios artísticos o de comunicación en los barrios periféricos de las grandes ciudades, al tiempo que han planteado discusiones sobre el sentido tradicional de espacio público y arte.

El acceso a los bienes comunicacionales.

En el actual contexto de globalización, la información y el conocimiento son herramientas indispensables para la igualdad de oportunidades, tanto en el ámbito laboral como político. Por ese motivo, recientemente, ciertas demandas comunicacionales e informativas aparecen como cuestiones centrales. El caso más novedoso es el debate sobre la posibilidad de declarar a Internet como un derecho comunicacional e informativo universal. También es relevante el debate surgido en torno al derecho a la libre expresión e información a través de la prensa o los medios audiovisuales. Este derecho es fundamental, ya que resguarda la libertad para opinar o denunciar injusticias.